



# REGISTRO OFICIAL

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



## EDICIÓN JURÍDICA

**Año I - Nº 47**

**Quito, viernes 25 de  
octubre de 2019**

**ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA**  
**DIRECTOR**

Quito: Calle Mañosca 201  
y Av. 10 de Agosto

Oficinas centrales y ventas:  
Telf.: 3941-800  
Exts.: 2561 - 2555

Sucursal Guayaquil:  
Calle Pichincha 307 y Av. 9 de Octubre,  
piso 6, Edificio Banco Pichincha.  
Telf.: 3941-800 Ext.: 2560

Suscripción anual:  
US\$ 400 + IVA para la ciudad de Quito  
US\$ 450 + IVA para el resto del país

Impreso en Editora Nacional

132 páginas

[www.registroficial.gob.ec](http://www.registroficial.gob.ec)

**Al servicio del país  
desde el 1º de julio de 1895**

**Págs.**

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA**

**RESOLUCIONES:**

**SALA ESPECIALIZADA  
DE LO LABORAL:**

Oficio N° 1638-SSL-CNJ-2017 RO134-2016,  
RO135-2016, RO136-2016, RO137-2016, RO138-  
2016, RO139-2016, RO140-2016, RO141-2016,  
RO142-2016, RO143-2016, RO144-2016, RO146-  
2016, RO148-2016, RO149-2016,.....

2

**FE DE ERRATAS:**

- Rectificamos el error deslizado en el sumario de la  
Edición Jurídica N° 45 de 21 de octubre de 2019 . 132



Oficio No. 1638-SSL-CNJ-2017

Quito, 12 de abril de 2018

Señor Ingeniero

HUGO DEL POZO BARREZUETA

**DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL**

En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Cumpro con enviar las copias certificadas de las resoluciones desde **R0001-2016** hasta **R0822-2016**, siendo un total de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO resoluciones, con lo que culmina el año 2016. Adjunto sírvase encontrar el formato digital como el listado con número de resolución y numero de juicio; las mismas se encuentran certificadas debidamente con el sello de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia y firmadas por el señor Secretario Relator (E), resoluciones que fueron tomadas de sus originales.

Atentamente;

Dra. Ladys Baca Crespo

SECRETARIA RELATORA (E)

SALA LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

|     |           |
|-----|-----------|
| 134 | 2116-2015 |
| 135 | 1372-2015 |
| 136 | 1796-2015 |
| 137 | 1446-2015 |
| 138 | 0513-2016 |
| 139 | 1338-2015 |
| 140 | 1351-2013 |
| 141 | 0841-2014 |
| 142 | 1812-2014 |
| 143 | 1189-2014 |
| 144 | 2022-2014 |
| 146 | 2518-2015 |
| 148 | 1429-2012 |
| 149 | 2288-2015 |

RO134- 2016

JUICIO No. 2116-15

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-**

Quito, viernes 4 de marzo de 2016, las 08h35.

**VISTOS:** En el juicio laboral seguido por Ana María Farinango Basantes en contra del Instituto Nacional de la Niñez y Familia INNFA, representado por el señor economista Jorge Oswaldo Vallejo Panbabay en calidad de liquidador y representante legal; de la señora Rosa Gina Orellana Román, en calidad de Directora General; y del Procurador General del Estado como representante legal del Estado Ecuatoriano; la parte demandada, el Ministerio de Inclusión Económica y Social formula recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 2 de septiembre de 2015, las 11h38, que rechaza los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirma la sentencia subida en grado.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto el Tribunal hace las siguientes consideraciones: **PRIMERO: Competencia:** Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación. Admitido a trámite el recurso por la Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto 11 de diciembre de 2015, las 09h25, corresponde a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado conforme a lo previsto en el artículo 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, como consta de la razón que obra del expediente.- **SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación:** El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Las normas que considera infringidas son: artículo 1 del Mandato Constituyente No.4 expedido por la Asamblea Constituyente, el 12 de febrero de 2008, publicado en el Registro Oficial Suplemento 273, Gaceta Judicial 9, Serie 18, publicada el 30 de septiembre del 2009. En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República y

regulado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. El recurso de casación se fundamenta en los siguientes cargos: **2.1.- CAUSAL PRIMERA:** La recurrente alega que, en la sentencia impugnada, al momento de resolver el recurso de apelación y la reconvención planteados por su representada, el tribunal Ad quem ha incurrido en errónea interpretación del artículo 1 del Mandato Constituyente No.4, hecho que ha sido determinante en la parte dispositiva por haber rechazado el recurso de apelación del recurrente. Que, conforme consta de las actas de finiquito suscritas el 2 de diciembre de 2008, la indemnización total que percibió la actora ascendió a la suma de USD 78.981,36 excediendo el monto máximo (60.000,00) de la indemnización que por cualquier concepto podía percibir, conforme lo ordenado en el artículo 1 del Mandato Constituyente No.4. Que, el Tribunal Ad quem ha rechazado injustamente la reconvención planteada, perjudicando los intereses institucionales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. **TERCERO.- Del recurso de casación:** El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con ciertos elementos formales para su procedencia; el recurso de casación tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia, en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente. El Tratadista Humberto Murcia Ballén, sobre el objeto de la casación señala: *"Tradicionalmente se le ha asignado a la casación como objetivo la anulación de las sentencias proferidas con violación de las reglas de derecho, o sea que dicho recurso corresponde al poder que tiene el Tribunal Supremo para asegurar el respeto a las leyes por los jueces; y desde este punto de vista la casación es una institución política que responde a un interés social evidente. En efecto, es esencial a todo régimen político que la ley sea estrictamente obedecida e interpretada de la misma manera en todo el territorio nacional. De ahí que la más relevante doctrina sobre el tema le haya asignado al instituto en comento, hace ya cerca de dos siglos, esta finalidad esencial: la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia"* (Recurso de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, pág. 73). El Dr. Santiago Andrade Ubidia al abordar

sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: *“La Función de la Casación es constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública...”*. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17).- **CUARTO.- Análisis del recurso de casación.- Motivación:** Conforme el mandato contenido en el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de Casación debe expresar con razonamiento jurídicos apropiados y coherentes, sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derecho, las razones o motivos por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la motivación en casación debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida. El tratadista Michele Taruffo sobre la motivación expresa:... *“el <contenido mínimo esencial> de la motivación equivale a lo que ha sido definido como justificación en primer grado. En síntesis, la misma comprende: 1) la enunciación de las elecciones realizadas por el juez en función de: identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos, calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprende de la misma; 2) el contexto de vínculos de implicación y de coherencia entre estos enunciados, (...); 3) la calificación de los enunciados particulares sobre la base de los criterios de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son*

*racionalmente correctas. La necesidad de estas tres categorías de requisitos para la existencia de la motivación podría justificarse analíticamente, pero es suficiente recordar lo que se ha sostenido en materia del modelo general de la motivación; lo único que falta añadir es que todos estos requisitos son necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la decisión.*" (Taruffo Michele, *La motivación de la sentencia civil*, Editorial Trotta, Madrid, 2011, págs. 407-408). Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: **4.1.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL PRIMERA:**

La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, procede por: *"Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva."*.-

Corresponde a los errores que en Doctrina se conocen como "in judicando", es decir, de juzgamiento, cuando ha existido en el fallo la violación directa de la norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios. La infracción de una norma de derecho se produce cuando el juzgador no ha efectuado la correcta subsunción de los hechos en el contenido hipotético, abstracto o genérico de la norma; cuando la jueza, juez o tribunal de instancia da por ciertos determinados hechos materia de la litis, realiza un ejercicio de lógica jurídica al establecer si aquellos encajan o no en la hipótesis de la disposición legal que sería aplicable al caso y las consecuencias que aquella ha establecido, para sustentar su decisión. Esta causal contempla tres diferentes tipos de infracción, que son autónomos e independientes entre sí, por ello el casacionista deberá identificarlos con absoluta precisión; estos son: a) aplicación indebida, que se produce cuando el juzgador elige una norma que no corresponde al caso que se está juzgando, que no se relaciona con los hechos materia de la litis; b) falta de aplicación, es un error de omisión, ya que el vicio consiste en que el juzgador no aplica la norma que efectivamente corresponde al caso materia del litigio; y, c) errónea interpretación está constituida por una equivocación de hermenéutica jurídica, en tal caso el juez ha elegido correctamente la norma aplicable al caso, pero al interpretarla le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al texto de la Ley, dando como

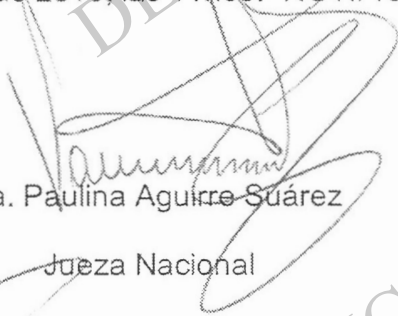


resultado una consecuencia distinta a la prevista en la norma. Es importante señalar que bajo esta causal no corresponde analizar los hechos, ni las pruebas; pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal de instancia. Otro aspecto importante en esta causal, es que el error sea relevante en la decisión de la causa, es decir, que si no hubiere incurrido en la equivocación, el resultado en la sentencia habría sido distinto.- 4.1.1.- El recurrente con cargo a esta causal acusa a la sentencia de segunda instancia de incurrir en errónea interpretación del artículo 1 del Mandato Constituyente No.4.- La errónea interpretación alegada ocurre cuando siendo la norma la aplicable al caso el Juez le da un sentido y alcance distinto al que tiene. En la especie en el Considerando Quinto de la sentencia impugnada el tribunal ad-quem se pronuncia: *“Conforme a la prueba existente y señalada en el considerando anterior, la actora recibe dos pagos: uno por fondo global de jubilación patronal cuyo derecho no ha sido materia de duda; pues, de acuerdo al Art. 216 del Código del Trabajo, el trabajador que ha laborado para un mismo empleador por 25 o más tiene derecho a percibir de éste un pago mensual por jubilación patronal y en el numeral 3, faculta al trabajador a solicitar de su empleador la entrega directa de un fondo global correspondiente a este derecho a fin de que el mismo trabajador administre ese capital por su cuenta, que en el caso de la actora, es lo que ha ocurrido. Habiendo laborado más de 25 años para el INFA y asistiéndole el derecho a la jubilación patronal, recibió éste pago como fondo global, pago con el que se encuentra conforme; y, otro, por indemnización por despido intempestivo de \$56.300,781, que no supera las 300 remuneraciones que refiere el Art. 1 del Mandato Constituyente No.4, fundamento de derecho de la reconvención”*. El artículo 1 del Mandato constituyente No 4, que a decir del casacionista el tribunal de alzada ha interpretado erróneamente, dispone: *“(...). Las indemnizaciones por despido intempestivo, del personal que trabaja en las instituciones señaladas en el artículo 2 del Mandato No2, aprobado por la Asamblea Constituyente, el 24 de enero de 2008, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado”*. Las


juzgadoras de segundo nivel interpretan correcta y acertadamente la citada norma; pues ésta se refiere a los límites establecidos para el pago de la terminación unilateral de la relación laboral; así entonces en el caso de la especie por este concepto no podía pagarse a la accionante más de USD 60,000; pues a la fecha en que termina la relación laboral el salario básico unificado estaba fijado en USD 200. Procesalmente se ha demostrado que por este concepto la accionante ha recibido la cantidad de USD 56,300.81; como consta de la liquidación de fs. 24 a 26; y no de "Actas de Finiquito", que según el recurrente obran del proceso; y que a pesar de sustentar su defensa en que los valores recibidos por la accionante son excesivos, no los agrega en el momento procesal oportuno; por lo tanto la indemnización por despido intempestivo a la que se refiere el artículo 1 del Mandato Constituyente No.4 se encuentra dentro de los límites del referido Mandato; por lo mismo la reconvención de la parte demandada, como resuelve la sentencia que se ataca no procede. La jubilación patronal constituye un derecho que se adquiere por haber laborado bajo la dependencia del mismo empleador durante 25 años en forma continua o interrumpida. El artículo 216 numeral 3 del Código del Trabajo prevé la posibilidad de entregar a la persona trabajadora un fondo global que cubra las pensiones jubilares que le correspondan. Según alega la parte demandada hoy recurrente, y lo reconoce la accionante se le ha entregado un fondo global en concepto de jubilación patronal; valor que no forma parte de la liquidación por despido intempestivo, cuyos límites establece el artículo 1 del Mandato Constituyente No.4. La pensión jubilar o el fondo global de jubilación constituye un derecho adquirido que no forma parte de indemnizaciones. Así, en torno a los derechos adquiridos, Alessandri, Somarriva y Vodanovic señalan que éstos *"entran al patrimonio por un acto o hecho del hombre (...) o directamente por ministerio de la ley"*. En el mismo sentido, Soto Kloss ha sostenido que los derechos adquiridos *"requieren de una fuente jurídica generadora de la obligación y derecho recíproco (...) y su fuente será -de modo usual- la ley, sin perjuicio de que también pueda ser el contrato o el cuasidelito"* y *"...siendo la fuente la ley, ingresará un derecho al patrimonio de un sujeto (v. gr. un administrado) desde el momento que este sujeto cumpla las condiciones (hechos habilitantes) que dicha ley determina como aptos para originar tal derecho. Desde ese instante el sujeto que cumple esas condiciones habilitantes ha adquirido ese derecho y lo ha*

*ingresado a su patrimonio;...”* (Soto Kloss, RDJ, t. 81, 1ª parte, pág. 13).- Con el análisis efectuado se concluye que el recurrente no justifica los cargos que formula con fundamento en la causal primera de casación, por lo tanto se lo rechaza.-

**DECISIÓN:** Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** no casa la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 2 de septiembre de 2015, las 11h38.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

  
Dra. Paulina Aguirre Suárez

Jueza Nacional

  
Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez Nacional

  
Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo

Jueza Nacional

Certifico

  
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

SECRETARIO RELATOR SALA DE LO LABORAL.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.



En Quito, viernes cuatro de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: FARINANGO BASANTES ANA MARIA en la casilla No. 3412. INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA - INNFA en la casilla No. 2609; LIQUIDADOR EL INNFA PRIVADO en la casilla No. 3164; MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL en la casilla No. 1173 y correo electrónico patrocinio.judicial@inclusion.gob.ec; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a 21 MAR 2018  
SECRETARIO RELATOR

CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

R0135-2016-J1372-2016

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA**

En Quito, hoy viernes cuatro de marzo de dos mil dieciséis a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, ante la Dra. Paulina Aguirre Suárez, Jueza de la Corte Nacional de Justicia, y, Secretario Relator de la Sala, comparece el señor DIEGO ANTONIO CASTRO FREIRE, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711150795, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica puestas al pie del escrito de desistimiento de fs. 68 y 69 del cuaderno de la instancia. Al objeto juramentado en forma legal, previa explicación de la gravedad del mismo y la obligación que tiene de responder con claridad y exactitud a lo que se le pregunte y puesto de manifiesto su firma y rúbrica donde se lee “DIEGO ANTONIO CASTRO” manifiesta ser las suyas propias, misma que acostumbra a usar en todos sus actos públicos como privados y como tal las reconoce. Termina la presente diligencia firmando para constancia la señora Jueza Nacional, el compareciente y Secretario Relator que certifica.

DRA. PAULINA AGUIRRE SUAREZ  
JUEZA NACIONAL

DIEGO ANTONIO CASTRO FREIRE  
COMPARECIENTE


DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. - SALA DE LO LABORAL.**

Quito, lunes 7 de marzo del 2016, las 15h25. VISTOS.- Incorpórese al expediente los anexos y el escrito presentado por las partes procesales; tómese en cuenta la casilla judicial que señala la demandada para recibir sus notificaciones. En lo principal, por cuanto el actor DIEGO ANTONIO CASTRO FREIRE, ha dado cumplimiento al reconocimiento de su firma y rúbrica puestas en el escrito de desistimiento de la acción que interpusiera en esta causa; se lo acepta ordenándose el archivo de la causa. NOTIFIQUESE.

  
DRA. PAULINA AGUIRRE-SUAREZ  
JUEZA NACIONAL

Certifico:

  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

En Quito, lunes siete de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las quince horas y cuarenta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: CASTRO FREIRE DIEGO ANTONIO en la casilla No. 3474 y correo electrónico dr.vicentereategui@hotmail.com del Dr./Ab. ANGEL VICENTE REATEGUI JIMENEZ. NAMM ADAM, EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN EL ECUADOR en la casilla No. 68. Certifico:


  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

ROMOW

  
CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

**RAZON:** En ~~trece~~ fojas útiles se devolvió al Secretario (a) Relator (a) de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito de la Provincia de Pichincha las actuaciones de la presente causa.

Quito, marzo 17 de 2016.

  
Dr. Segundo Ulloa Tapia

Secretario Relator (E)

**RAZON:** En ~~trece~~ fojas útiles recibí del Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia las actuaciones de la presente causa.

Quito, marzo ..... de 2016.

EL (LA) SECRETARIO (A) RELATOR (A) DE LA SALA LABORAL  
DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a 21 MAR 2018  
SECRETARIO RELATOR



R0136-2016

Juicio No. 1796-15

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-**

Quito, lunes 7 de marzo del 2016, las 12h00.

**VISTOS.-** En el juicio laboral seguido por Sandra Jannet Victoria Chávez Meneses en contra del señor Mauricio Alfonso Morillo Wellenius en calidad de representante legal de la Empresa ISKENDERUN DE ECUADOR CIA. LTDA o nombre comercial "GREAT PLACE TO WORK"; tanto por los derechos que representa como por sus propios y personales derechos; la parte actora formula recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 6 de julio del 2015, las 11h34; que acepta la excepción de incompetencia en razón de la materia y rechaza la demanda, en esos términos revoca la sentencia subida en grado.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto el Tribunal hace las siguientes consideraciones: **PRIMERO.- Competencia:** Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación. Admitido a trámite el recurso por la Dra. Rosa Jacqueline Álvarez Ulloa, Conjueza de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto 3 de diciembre del 2015, las 10h07, corresponde a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado conforme a lo previsto en el artículo 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, como consta de la razón que obra del expediente.- **SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación:** El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en las causales primera, tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. Las normas que considera infringidas son: artículos 75; 76 numeral 7 literal I); 326 numerales 2 y 3 y 327 de la Constitución de la República, artículo 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 4; 5; 7; 8; 9 y 10 del Código del Trabajo y artículos 65; 115; 140; 165; 194 y 282 del Código de Procedimiento Civil. En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República y regulado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. El

recurso de casación se fundamenta en los siguientes cargos: **2.1.- CAUSAL QUINTA:** La recurrente alega que, la sentencia impugnada carece de motivación, por lo tanto se deja de aplicar el artículo 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República y artículo 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que, la sentencia impugnada llega a la conclusión que no existe relación laboral sino civil, entre la parte actora y la parte demandada, sin embargo en la misma resolución se menciona que la parte demandada entregó viáticos a la ex trabajadora; pero por otro lado determina la inexistencia de la relación laboral. Que, dentro del fallo se da por sentado que la parte actora “cumplía funciones de Directora de proyectos”, sin tomar en cuenta que dichos proyectos correspondían al giro principal del negocio del demandado, y que es éste quien ordena, dispone o pone a cargo a la directora de dicha área el cumplimiento a cabalidad de cada contrato, a cambio de una remuneración; la Sala tampoco incluyó en la sentencia impugnada la respuesta a la pregunta 5 de la confesión judicial, donde el demandado confirmó la entrega a la actora la cantidad de USD 3.950 mensuales por las actividades que cumplía para su representada. Por consiguiente, el Tribunal Ad quem considera para resolver, la existencia de un certificado de trabajo, el cumplimiento de una actividad relacionada con el objeto principal del empleador, el pago de valores por la gestión realizada, acta de entrega de herramientas de trabajo, y de manera incompatible, la sala de instancia expresa que no se ha demostrado que existen los requisitos del artículo 8 del Código del Trabajo. Que, el tribunal ad quem al incumplir con su deber constitucional y legal de motivar adecuadamente su resolución, trae como consecuencia que la sentencia impugnada sea absurda y arbitraria, sosteniendo una conclusión incorrecta, por lo que se ha dejado de aplicar el artículo 75 de la Constitución de la República. Que, en referencia a la falta de aplicación del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, alega que la providencia que complementa la sentencia del 6 de julio del 2015, se remite de manera simple a negar su solicitud; es decir que no se exponen los motivos por los cuales niega su recurso de ampliación y aclaración. **2.2.- CAUSAL TERCERA.-** En cuanto a esta causal la recurrente alega que, se dejó de aplicar el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, al omitir las premisas que le imponían aceptar la existencia de una relación laboral y despido intempestivo; la falta de aplicación de esta regla de la sana crítica, que le obligaban a valorar en forma integral y lógica todos y cada uno de los medios probatorios, sin excluir bajo ningún punto aquellos que hubieren demostrado la

existencia de relación laboral y despido intempestivo condujo a la Sala de Instancia, a interpretar erróneamente el artículo 8 del Código del Trabajo y determinar de forma inadecuada que el vínculo jurídico se encuentra reglado por el derecho común y no por las leyes laborales, liberando sin causa al empleador de sus obligaciones laborales. Que, la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en su sentencia ignora las pruebas documentales, ya que obran del proceso informes que demuestran la labor que realizaba para la compañía demandada como son; actas, proformas, registros de entrada y salida, liquidación de viáticos, facturas que demuestran los valores cancelados, certificados de una capacitación pagada por la compañía, y el original del certificado de trabajo en el que consta que la actora laboró desde noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 como Directora de Proyecto, dedicada a procesos de gestión del ambiente laboral en organizaciones públicas y privadas, certificado suscrito por Carmen Gómez Bolaños, en calidad de directora ejecutiva de la Compañía; los instrumentos probatorios mencionados, fueron omitidos por el tribunal de instancia; no aplicándose los artículos 165 y 194 del Código de Procedimiento Civil. Que, en el considerando sexto numeral 1 de la sentencia, los jueces de instancia manifiestan que el demandado afirmó que la relación mantenida con la parte actora fue civil, sin embargo nunca presentó prueba alguna al respecto, configurándose falta de aplicación del artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, ya que es obligación del demandado probar lo que afirma. Que, con respecto a la confesión judicial, el juzgador no ha considerado lo señalado por el demandado en su confesión; es así que al responder las preguntas 2, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 26; el contenido de sus respuestas aporta elementos de juicio trascendentales para el proceso, de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; norma que no ha sido aplicada, este medio hace prueba contra el confesante, sin embargo fue excluido del análisis de la sentencia. Que, el Tribunal Ad quem al dejar de aplicar las reglas de la lógica en la valoración integral de la prueba, además de vulnerar los artículos 113, 115, 140, 165 y 194 del Código de Procedimiento Civil, llegan a determinar la inexistencia de la relación laboral interpretando erróneamente el artículo 8 del Código Laboral. **2.3.- CAUSAL PRIMERA:** La casacionista alega que se dejan de aplicar los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10 del Código del Trabajo, artículos 326 numerales 2 y 3 y 327 de la Constitución de la República. Que, en el proceso se evidenció todos los elementos del artículo 8 del Código del Trabajo, sin embargo en la sentencia



impugnada, sin fundamento jurídico valedero, se determinó que no existieron tales requisitos de la relación mantenida entre la parte actora y demandada; debido a que la Sra. Chávez cumplía funciones de Directora de Proyectos, mismas que eran ejercidas bajo los lineamientos de las consultorías, sin tomar en cuenta que los proyectos eran contratados por el empleador y como parte de las actividades que cumple la compañía, las cuales consistían en ejecutar determinados proyectos que eran puestos a cargo de la actora por órdenes de la parte demandada. El RUC correspondiente a las facturas con las cuales, el Tribunal Ad quem considera razón suficiente para concluir que es una relación civil, *“no contienen como actividades, aquellas correspondientes al ejercicio profesional de la Sra. Sandra Chávez”* y así obra del proceso. Además de la falta de aplicación del artículo 8 del Código del Trabajo; el Tribunal Ad quem tampoco aplicó los artículos 4; 5 y 7 ibídem, este último en concordancia con el artículo 326 de la Constitución de la República; incluyendo también los artículos 9 y 10 del Código Laboral. **TERCERO.- Del recurso de casación:** El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con ciertos elementos formales para su procedencia; el recurso de casación tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia, en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente. El Tratadista Humberto Murcia Ballén, sobre el objeto de la casación señala: *“Tradicionalmente se le ha asignado a la casación como objetivo la anulación de sentencias proferidas con violación de las reglas de derecho, o sea que dicho recurso corresponde al poder que tiene el Tribunal Supremo para asegurar el respeto a las leyes por los jueces; y desde este punto de vista la casación en una institución política que responde a un interés social evidente. En efecto, es esencial a todo régimen político que la ley sea estrictamente obedecida e interpretada de la misma manera en todo el territorio nacional. De ahí que la más relevante doctrina sobre el tema le haya asignado al instituto en comento, hace ya cerca de dos siglos, esta finalidad esencial: la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia”* (Obra: Recurso de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, pág. 73). El Dr. Santiago Andrade Ubidia al abordar sobre la Casación y el Estado de



Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: *“La Función de la Casación es constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública...”*. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17).- De conformidad a lo establecido en la doctrina y la jurisprudencia, se deben analizar en primer lugar las causales que corresponden a vicios *“in procedendo”*, que afectan a la validez de la causa y su violación determina la nulidad total o parcial del proceso, así como también se refieren a la validez de la sentencia impugnada; vicios que están contemplados en las causales segunda, cuarta y quinta; en segundo orden, procede el análisis de las causales por errores *“in iudicando”*, que son errores de juzgamiento, los cuales se producen, ya sea por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una norma de derecho o por una infracción directa de esta clase de normas, vicios que se hallan contemplados en las causales tercera y primera.

**CUARTO.- Análisis del recurso de casación.-**

**Motivación:** Conforme el mandato contenido en el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de Casación debe expresar con razonamiento jurídicos apropiados y coherentes, sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derecho, las razones o motivos por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la motivación en casación debe

contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida. El tratadista Michele Taruffo sobre la motivación expresa:... *"el <contenido mínimo esencial> de la motivación equivale a lo que ha sido definido como justificación en primer grado. En síntesis, la misma comprende: 1) la enunciación de las elecciones realizadas por el juez en función de: identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos, calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprende de la misma; 2) el contexto de vínculos de implicación y de coherencia entre estos enunciados, (...); 3) la calificación de los enunciados particulares sobre la base de los criterios de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son racionalmente correctas. La necesidad de estas tres categorías de requisitos para la existencia de la motivación podría justificarse analíticamente, pero es suficiente recordar lo que se ha sostenido en materia del modelo general de la motivación; lo único que falta añadir es que todos estos requisitos son necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la decisión."* (Taruffo Michele, La motivación de la sentencia civil, Editorial Trotta, Madrid, 2011, págs. 407-408). Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación.

**4.1.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL QUINTA:** Esta causal hace relación a los requisitos que la ley establece para la validez de una sentencia y a decisiones contradictorias o incompatibles en la resolución. La primera parte se refiere a los requisitos de forma y de fondo en la resolución judicial. Son requisitos de forma aquellos que se refieren a la estructura formal del fallo como es el lugar, fecha y hora de su emisión, la firma de la jueza o juez que lo suscribe, etc.; es decir en lo formal, se refiere a los requisitos que están contenidos en los artículos 275 y 287 del Código de Procedimiento Civil; en tanto que los requisitos de fondo se refieren al contenido mismo de la resolución; así un requisito esencial de fondo es la motivación, que constituye la obligación del juzgador de señalar las normas legales o principios jurídicos que sustentan su fallo y la pertinencia de su aplicación al caso sometido a su decisión, la segunda parte, en cambio, determina que existen motivos para casar una sentencia o auto definitivo, cuando en su parte resolutive se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles. Toda resolución judicial constituye un silogismo lógico, partiendo de los antecedentes del caso que se juzga, con la descripción de la posición

de las partes en la acción y las excepciones, las pruebas aportadas dentro del proceso, para luego hacer las consideraciones de índole legal y jurídico que permiten la aplicación de las normas de derecho que corresponden al caso, para arribar a una decisión, por lo tanto se trata de un razonamiento lógico, armónico y coherente; sin embargo este principio se rompe cuando lo resuelto no guarda armonía con los antecedentes y fundamentos de derecho.- La motivación es un requisito esencial para la validez de las resoluciones de los poderes públicos, pues en ella se exige que las decisiones de las personas que ejercen jurisdicción y competencia, ya sea en el ámbito judicial como administrativo, sustenten sus decisiones en la ley y en la pertinencia de su aplicación a los hechos. **4.1.1.-** Con cargo a esta causal la recurrente acusa a la sentencia de segunda instancia de haber incurrido en falta de aplicación de los artículos 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República y 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial; pues afirma que la sentencia carece de motivación; y por falta de aplicación del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil por no haber atendido el pedido de aclaración y ampliación, respecto del requisito de motivación de las sentencias, expresando que tal vicio aparece del texto de la sentencia recurrida sobre sus conclusiones para negar la existencia de relación laboral entre las partes procesales; cuando de la misma sentencia se evidencia que la accionante recibió viáticos; que existe un certificado de trabajo otorgado por la Directora Ejecutiva de la compañía demandada y otras pruebas que detalla y considera que demuestran el vínculo laboral. Es evidente que la casacionista se refiere a la valoración de la prueba, defecto o vicio que está contemplado en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación; pues en nuestro sistema de casación, cada tipo de vicio o infracción está regulado, tipificado en su respectiva causal. Puede ocurrir que la valoración de la prueba sea absurda o arbitraria, pero en ese caso, estamos frente a una infracción típica de preceptos jurídicos de valoración probatoria, cuando el juzgador no aplica las reglas de la lógica, la experiencia, es decir, de la sana crítica. Las discrepancias que tenga el recurrente con la valoración de la prueba de los juzgadores, no es causa de falta de motivación, tanto más si, como en el presente caso, ocurre que la casacionista también ha invocado la causal tercera del artículo 3 de la Ley de la materia. Adicionalmente, se debe señalar que la sentencia de segunda instancia se halla debidamente motivada al expresar los antecedentes del caso que se juzga, esto es, el asunto o asuntos materia de la litis, las normas legales que estima

aplicables al caso, y los razonamientos para llegar a sus conclusiones, sin que se observe que aquellos sean arbitrarios, ilógicos o absurdos, es decir, contrarios a la motivación. En cuanto a la falta de aplicación del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, porque según la recurrente no se atendió su petición de aclaración y ampliación de la sentencia, se observa que, esta petición fue atendida por el tribunal de alzada mediante auto de 5 de agosto de 2015, las 13h12; siendo distinto el caso de que la actora, hoy casacionista no este conforme con la decisión de las juzgadoras en dicho auto. Por lo expresado, se desechan los cargos por la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación.- **4.2.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL**

**TERCERA:** La causal tercera de casación, procede por: *“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”*.- Para la procedencia de esta causal, que en doctrina se la conoce como de violación indirecta de la norma, es necesario que se hallen reunidos los siguientes presupuestos básicos: a) la indicación de la norma (s) de valoración de la prueba que a criterio de recurrente han sido violentada; b) la forma en que se ha incurrido en la infracción, esto es, si es por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; c) la indicación del medio de prueba en que se produjo la infracción; d) la infracción de una norma de derecho ya sea por equivocada aplicación o por no aplicación; y, e) una explicación lógica y jurídica del nexo causal entre la primera infracción (norma de valoración de la prueba) y la segunda infracción de una norma sustantiva o material. Al invocar esta causal el recurrente debe justificar la existencia de dos infracciones, la primera de una norma de valoración de la prueba, y la segunda, la violación de una disposición sustantiva o material que ha sido afectado como consecuencia o por efecto de la primera infracción, de tal manera que es necesario se demuestre la existencia del nexo de causalidad entre una y otra. Esta causal no tiene como propósito que el Tribunal de Casación vuelva a evaluar la prueba, pues esta es una tarea propia del juzgador de instancia, sino establecer si en el ejercicio de valoración probatoria se ha transgredido algún precepto de valoración de la prueba. *“...la valoración de la prueba es una atribución jurisdiccional soberana o autónoma de los jueces o tribunales de instancia. El Tribunal de Casación no tiene otra atribución que la de fiscalizar o controlar que en esa valoración no se hayan violado normas de derecho que regulan*

*expresamente la valoración de la prueba.” (Fallo de 29 de noviembre de 1999, publicado en el Registro Oficial No. 349 de miércoles 30 de marzo de 1999).* **4.2.2.-** Con cargo a esta causal la casacionista acusa a la sentencia de segunda de instancia de falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; pues afirma que haber inobservado la regla de la lógica, ha conducido al Tribunal Ad-quem a interpretar erróneamente el artículo 8 del Código del Trabajo.- Al respecto este Tribunal de la Sala de lo Laboral estima que el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, contiene dos mandatos fundamentales para los juzgadores de instancia en cuanto a la valoración de la prueba: a) La obligación de apreciar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La apreciación conjunta de las pruebas, significa que el juzgador deberá considerar todas las pruebas que se han actuado en el proceso en su conjunto para la apreciación de la fuerza probatoria de aquellas, pero no en forma aislada. *“La apreciación conjunta de la prueba -expresa TOBOADA ROCA- es aquella actividad intelectual que realiza el juzgador de instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios suministrados por los litigantes, y en virtud de cuya operación llega al convencimiento de que son ciertas algunas de las respectivas alegaciones fácticas de aquéllas en las que basan sus pretensiones o defensas, o no logra adquirir ese convencimiento necesario para fundamentar su fallo estimatorio de ellas. Tal obligación legal, que impide la desarticulación del acervo probatorio, ha sido la causa de que los juzgadores de instancia muy frecuentemente acudan a ese expediente de la apreciación en conjunto para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Con tal procedimiento resulta que su convicción se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimación conjunta de todas las articuladas, examinadas en su complejo orgánico de compuesto integrado por elementos disímiles”* (Humberto Murcia Ballén. Recurso de Casación Civil, sexta edición, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Pág. 410). *“Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponde, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una “masa de pruebas”, según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos. Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos, es decir, “el tejido probatorio*




que surge de la investigación”, agrupando las que resulten favorables a una hipótesis y las que por el contrario la desfavorezcan, para luego analizarlas comparativamente, pesando su valor intrínseco y, si existe tarifa legal, su valor formal, para que la conclusión sea una verdadera síntesis de la totalidad de los medios probatorios y los hechos que en ellos se contienen. (Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, T.I, Bogotá, ABC, 1995, Pág.306). En cambio, en lo que se refiere a las reglas de la sana crítica, cabe recordar que la sana crítica constituye el juicio razonado sobre los hechos, que asume el juzgador, a través de la apreciación y valoración de las pruebas, de la exégesis de la ley, del uso de su experiencia, de las reglas de la lógica, de los principios de la ciencia y de la justicia universal. Para Couture *“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.”* (Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Depalma, 1958, 3era. edic, Pág. 270-271).- Por ello, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corte Nacional, en múltiples resoluciones han sostenido que, si bien entre los preceptos relativos a la valoración de la prueba contemplados en el Código de Procedimiento Civil, está la obligación del juez de apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, estas reglas no se encuentran contempladas en los códigos, ni leyes, como tampoco han sido elaboradas por la doctrina ni jurisprudencia; por lo que no se puede invocar la falta de aplicación de las reglas de la sana crítica; salvo el caso de que la apreciación de la prueba contradiga las leyes de la lógica, por arbitraria y absurda; circunstancia que no ocurre en la especie; pues las juzgadoras de instancia han valorado todas las pruebas actuadas, llegando a la convicción de que la relación existente entre las partes no tiene los elementos que configuran una relación laboral al amparo del artículo 8 del Código del Trabajo; conclusiones que este Tribunal no considera ni faltas de lógica, ni absurdas y menos arbitrarias; por lo que, los cargos con fundamento en la causal tercera de casación no prosperan.- **4.3.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL PRIMERA:** La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, procede por: *“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de*


*normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”.-*

Corresponde a los errores que en Doctrina se conocen como “injudicando”, es decir, de juzgamiento, cuando ha existido en el fallo la violación directa de la norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios. La infracción de una norma de derecho se produce cuando el juzgador no ha efectuado la correcta subsunción de los hechos en el contenido hipotético, abstracto o genérico de la norma; cuando la jueza, juez o tribunal de instancia da por ciertos determinados hechos materia de la litis, realiza un ejercicio de lógica jurídica al establecer si aquellos encajan o no en la hipótesis de la disposición legal que sería aplicable al caso y las consecuencias que aquella ha establecido, para sustentar su decisión. Esta causal contempla tres diferentes tipos de infracción, que son autónomos e independientes entre sí, por ello el casacionista deberá identificarlos con absoluta precisión; estos son: a) aplicación indebida, que se produce cuando el juzgador elige una norma que no corresponde al caso que se está juzgando, que no se relaciona con los hechos materia de la litis; b) falta de aplicación, es un error de omisión, ya que el vicio consiste en que el juzgador no aplica la norma que efectivamente corresponde al caso materia del litigio; y, c) errónea interpretación está constituida por una equivocación de hermenéutica jurídica, en tal caso el juez ha elegido correctamente la norma aplicable al caso, pero al interpretarla le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al texto de la Ley, dando como resultado una consecuencia distinta a la prevista en la norma. Es importante señalar que bajo esta causal no corresponde analizar los hechos, ni las pruebas; pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal de instancia. Otro aspecto importante en esta causal, es que el error sea relevante en la decisión de la causa, es decir, que si no hubiere incurrido en la equivocación, el resultado en la sentencia habría sido distinto. **4.3.3.-** La casacionista acusa a la sentencia impugnada, por dejar de aplicar los artículos 326 numerales 2 y 3 y 327 de la Constitución de la República; 4,5,7,8,9 y 10 del Código del Trabajo. La falta de aplicación alegada ocurre cuando siendo la norma aplicable al caso que se juzga, el juzgador ignora la misma. En el caso de la especie, luego de valorar las pruebas actuadas por las partes procesales, las juezas de segunda instancia llegan a la conclusión de que la relación que existió entre la actora y la compañía demandada fue de carácter civil; por lo mismo no correspondía aplicar las normas constitucionales y

legales que cita la recurrente, aplicables para los trabajadores amparados por el Código del Trabajo; por tanto no existen los yerros alegados, por lo que los cargos no prosperan.- **DECISIÓN.-** Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no casa la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de 6 de julio del 2015; las 11h34. **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

  
Dra. Paulina Aguirre Suárez

Jueza Nacional

  
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia

Juez Nacional

  
Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez Nacional

Certifico

  
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.

**SECRETARIO RELATOR SALA DE LO LABORAL.**

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.**



En Quito, lunes siete de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: CHAVEZ MENESES SANDRA JANNET VICTORIA en la casilla No. 1784 y correo electrónico jfvq@asesoria-gestion.com. ISKENDERUN DE ECUADOR CIA LTDA, en la casilla No. 5519 y correo electrónico ab.delgado.lanaa@outlook.com; ops@opsabogados.com; adl@opsabogados.com. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a..... 21 MAR 2018 .....


SECRETARIO RELATOR

.....

R0137-2016-J1446-2015

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA**

En Quito, hoy jueves tres de marzo de 2016, a las quince horas y treinta minutos, ante el señor Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Juez Nacional Ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia; y, Secretario Relator que Certifica, comparece el señor **ACOSTA GARCIA CHRISTIAN ANDRES**, portador del pasaporte No. AP294684, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica puestas al pie del escrito de desistimiento de fs. 4 del cuaderno de la instancia. Al objeto juramentado en forma legal, previa explicación de la gravedad del mismo y la obligación que tiene de responder con claridad y exactitud a lo que se le pregunta y puesto de manifiesto su firma y rúbrica donde se lee “CHRISTIAN ANDRES ACOSTA” manifiesta que son las suyas propias, la misma que acostumbra a usar en todos sus actos públicos como privados y como tal las reconoce. Termina la presente diligencia firmando para constancia el señor Juez Nacional Ponente, el Compareciente; y, el Secretario Relator que Certifica.

  
DR. ALFONSO ASDRUBAL GRANIZO GAVIDIA  
JUEZ NACIONAL

  
SR. ACOSTA GARCIA CHRISTIAN ANDRES  
COMPARECIENTE

  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. - SALA DE LO LABORAL.**

Quito, lunes 7 de marzo del 2016, las 12h28.

**VISTOS:** Previo a pronunciarse sobre la petición del actor se tiene: PRIMERO.- En atención al escrito presentado por el actor ORTIZ MELO CARLOS ALBERTO y por cuanto ha dado cumplimiento al reconocimiento de su firma y rúbrica puestas en el escrito de desistimiento de la causa laboral que sigue en contra de DECAMERON ECUADOR S.A; se lo acepta y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 373 del Código de Procedimiento Civil, ley supletoria en materia laboral, al tenor del Art. 6 del Código del Trabajo, dispone devolver el expediente con la ejecutoria respectiva, la que contendrá copia del indicado reconocimiento y de esta providencia a la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para los fines de ley. **Notifíquese y devuélvase.**

DR. ALFONSO ASDRUBAL GRANIZO GAVIDIA

**JUEZ NACIONAL**

**Certifico:**

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO

**SECRETARIO RELATOR**

En Quito, lunes siete de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ACOSTA GARCIA CHRISTIAN ANDRES en la casilla No. 5348 y correo electrónico ab.juliovargas@hotmail.com del Dr./Ab. VARGAS ABAD JULIO CESAR. HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. en el correo electrónico hsantacruz@sabogados.ec.

**Certifico:**

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO

**SECRETARIO RELATOR**

**SANTANDERR**

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA**  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
**ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

Quito, a 21 MAR 2018

SECRETARIO RELATOR

R0138- 2016

Habeas Corpus No. 513-2016

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-

Quito, lunes 7 de marzo del 2016, las 11h30.

**VISTOS.- Antecedentes:** En la acción constitucional de hábeas corpus presentada por Pedro Hiliodoro Torres Nicolalde contra el Dr. Carlos Emanuel Carrera Vásquez, Juez B de la Unidad Judicial Penal del cantón Otavalo, el accionante interpone recurso de apelación de la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura de 5 de febrero del 2016, las 14h57, que declara sin lugar la acción de hábeas corpus, y además dispone que la Directora del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de Ibarra tome las medidas adecuadas y conducentes para garantizar los derechos del accionante mientras se resuelva su situación jurídica.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto, este Tribunal de la Sala hace las siguientes consideraciones: **PRIMERO: Competencia:** Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de apelación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 191.3 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que se observe omisión de solemnidad sustancial que pudiera influir en la decisión de la presente acción, por lo que se declara su validez.- **SEGUNDO.-** La acción de hábeas corpus prevista en el artículo 89 de la Constitución de la República, es una de las garantías jurisdiccionales que tienen todas las personas en la comprensión de que la libertad constituye uno de los bienes jurídicos de supremo valor indispensable para la existencia misma de la sociedad y que cobra mayor significación al momento en que el artículo 1 ibídem caracteriza al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia; y que, al tenor de lo contemplado en el artículo 89 de la Carta Fundamental *“La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad...”*. Por tanto, son presupuestos fundamentales para la procedencia de la acción de hábeas corpus que la privación de la libertad se haya producido de forma ilegal, esto es, contraria a ley; arbitraria, o sea al margen de la ley,

sin norma jurídica que la sustente; e, ilegítima, de modo que exista falta de racionalidad jurídica.- **TERCERO.-** La acción de hábeas corpus, tiene tutela supralegal al encontrarse regulada en varios instrumentos internacionales, tales como, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que en el artículo 8 contempla: *“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”* y en el artículo 9 señala: *“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”*. A su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en su artículo 9 inciso cuarto que: *“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fue ilegal”*.- La Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, artículo 5 inciso cuarto (1950) señala que toda persona privada de su libertad, por detención o prisión, tiene el derecho de introducir un recurso ante el tribunal con el fin de que se estatuya, en un breve plazo, sobre la legalidad de la detención y ordene la libertad si la detención es ilegal.- De modo similar el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) expresa que toda persona *“debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”*.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el artículo 7 inciso sexto, establece que: *“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes, cuyas leyes prevén que toda persona amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”*.- **CUARTO.-** En la especie, del expediente y de la normativa correspondiente, se establece lo siguiente: **4.1.** La acción de hábeas corpus interpuesta por Pedro Heliodoro Torres Nicolalde se fundamenta, en síntesis, en los siguientes aspectos: a) Que de la partida de nacimiento que adjunta a la acción de hábeas corpus se determina que es una persona adulta mayor, perteneciente al

grupo de personas de atención prioritaria desarrollado en el Capítulo III del Título II de la Constitución de la República; b) Que sin embargo mediante auto dictado por el Ab. Carlos Emanuel Carrera Vásquez, el 6 de octubre del 2015 se dispuso su privación de libertad bajo la figura de prisión preventiva dentro del proceso penal signado con el número 1020220141233 sin tomar en cuenta su edad y condición social, inobservando su derecho de someterse a arresto domiciliario, garantizado en el artículo 537 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República; y, c) Que con tales antecedentes, mediante acción de hábeas corpus solicita se declare se han vulnerado sus derechos constitucionales y se disponga se ordene arresto domiciliario en sustitución de la medida de prisión preventiva.- **4.2.-** La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, a la que correspondió el conocimiento de esta acción, mediante resolución de 5 de febrero de 2016, a las 14h17, decidió negar la acción constitucional de hábeas corpus propuesta por Pedro Heliodoro Torres Nicolalde, por cuanto del antecedentes del caso, el Juez B de la Unidad Judicial Penal del cantón Otavalo actuó de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto inicialmente se dictaron medidas cautelares sustitutivas al procesado como es la obligación de presentarse cada 15 días ante el fiscal de la causa y el arresto domiciliario con supervisión policial, sin embargo, el procesado ha incurrido en incumplimiento de esas medidas cautelares, razón por la cual, debió ordenarse su arresto y prisión preventiva para garantizar la presencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena.- **4.3.-** De la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, se desprenden los siguientes elementos: a) Que se ha iniciado instrucción fiscal en contra de Pedro Heliodoro Torres Nicolalde por el presunto delito de violación, habiéndose practicado la audiencia de formulación de cargos, en la que el Juez B de la Unidad Judicial Penal del cantón Otavalo, tomando en cuenta que el sindicado se encuentra en el grupo de personas vulnerables por su edad y el tipo de delito que se investiga, ha adoptado las siguientes medidas cautelares, conforme al artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal: “1.- La obligación de abstenerse de acercarse a la víctima en cualquier lugar en que la misma se encuentre así como a los miembros de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad. 2.- La prohibición de ausentarse del país, para la cual se oficiará al organismo migratorio competente a fin de que proceda a inscribir esta medida. 3.- La prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través




de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia. 4.- La obligación de presentarse cada 15 días ante el señor fiscal de la causa. 5.- El arresto domiciliario con supervisión o vigilancia policial, para lo cual se oficiará al señor Jefe del Segundo Distrito "Valle del Amanecer" a fin de que disponga el cumplimiento de este mandato a uno de los agentes de policía a su cargo....". b) Consta el oficio No. 755-JSDVA-SZI de 3 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Nelson Males Galarza, Mayor de Policía, Jefe del Segundo Distrito Valle Amanecer, en el que informa que no se pudo dar cumplimiento al oficio No. 0506-UJPCO-2015, de 2 de julio del 2015, para la custodia del arresto domiciliario de Pedro Heliodoro Torres Nicolalde, en su vivienda ubicada en el la Cdla. Los Lagos. Calles Yahuarcocha y San Pablo, por haberse constatado que ese lugar se encontraba cerrado con candados y se desconoce el paradero de esa persona. c) Que ante esta situación, el Juez B de la Unidad Judicial Penal del cantón Otavalo, dicta la providencia el 10 de julio de 2015, las 15h49 disponiendo la localización y captura del procesado; quien fue detenido por la Policía. d) El Juez de la causa, convoca a audiencia oral y pública para determinar la situación jurídica del procesado; y en consideración al informe la Policía del Segundo Distrito Valle Amanecer respecto a que el domicilio del procesado estaba deshabitado y con seguridades, que se desconocía su paradero; además que el señor fiscal informa que no se ha presentado ante ese funcionario, de acuerdo con el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal dicta auto de prisión preventiva en contra de Pedro Heliodoro Torres Nicolalde, para cuyo efecto ordena se gire la respectiva boleta de encarcelamiento.- 4.4.- A este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia le corresponde pronunciarse exclusivamente sobre aquellos aspectos que corresponden al objeto de la acción de hábeas corpus, esto es, recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, según lo contempla el artículo 89 de la Constitución de la República.- 4.5.- Al respecto este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia considera que las medidas cautelares en materia penal tienen por objeto garantizar la presencia del sindicado en el juicio y eventualmente para el cumplimiento de la pena, así como de los bienes que aseguren el pago de la indemnizaciones para reparación de la parte ofendida; así como también proteger a la víctima y sus familiares ante el posible hostigamiento del procesado o


terceras personas.- El Juez de lo penal tiene la potestad de dictar las medidas cautelares personales y reales que estime necesarias en consideración a las circunstancias particulares del presunto delito, del proceso y de la víctima.- En el caso de las personas adultas o adultos mayores, el artículo 38.7 de la Constitución de la República establece: *“7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.”* El artículo 537 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal dispone: *“Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad.”* Se debe señalar que las medidas sustitutivas no definitivas, toda vez que el artículo 534 del mismo Código, al referirse a la finalidad y requisitos de las medidas cautelares, en su inciso final establece que: *“De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.”*; en concordancia con esta norma, el artículo 536 ibídem, dispone: *“Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado.”*- En consecuencia, como ha ocurrido en este caso, si el procesado ha incumplido con la medida sustitutiva de arresto domiciliario, el Juez estaba en capacidad legal de suprimirla y dictar prisión preventiva, sin que aquello implique que el imputado se encuentre privado de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, así como que esté en riesgo la vida o la integridad física de la persona privada de libertad, según lo contempla el artículo 89 de la Constitución de la República, para la procedencia de la acción constitucional. Además es necesario señalar que la acción constitucional de hábeas corpus tiene por objeto proteger el derecho a la libertad de las personas que se encuentren privadas de aquella de manera ilegal o arbitraria, pero no el que se sustituya una medida cautelar de carácter personal, como es la pretensión del accionante, pues para ello existen



otros mecanismos.- Por lo manifestado, este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el recurso de apelación propuesto por Pedro Heliodoro Torres Nicolalde y confirmar la resolución de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que declara improcedente la acción de habeas corpus.- Notifíquese.

  
Dra. Paulina Aguirre Suárez

JUEZA PONENTE

  
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia

JUEZ NACIONAL

  
Dra. Rosa Jacqueline Álvarez Ulloa

CONJUEZA NACIONAL

Certifico

  
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

SECRETARIO RELATOR SALA DE LO LABORAL.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.

En Quito, lunes siete de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: TORRES NICOLALDE PEDRO HELIODORO en la casilla No. 6205 y correo electrónico wayo\_127@hotmail.com. GONZALEZ GERMANIA en el correo electrónico gonzalezg@minjusticia.gob.ec; JUEZ B DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON OTAVALO - IMBABURA en el correo electrónico carlos.carrera@funcionjudicial.gob.ec. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

**RAZON:** En treinta y dos fojas útiles se devolvió de oficio al Secretario (a) Relator (a) de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura las actuaciones de la presente causa, incluyendo dos fojas de la Ejecutoria Suprema.

Quito, 14 de marzo de 2016.

Dr. Segundo Ulloa Tapia

Secretario Relator (E)

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Quito, a..... 21 MAR 2016.....  
SECRETARIO RELATOR

R0139-2016 – Juicio Laboral N°. 1338-2015

**PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR****CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-****Quito, martes 6 de febrero del 2016.**

**VISTOS:** El actor Eduardo Emilio González Peña; interpone recurso de casación de la sentencia dictada por los Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que en los términos del fallo recurrido confirma la sentencia de primer nivel que declara sin lugar la demanda; dentro del juicio laboral que sigue en contra de Filanbanco S.A. en Liquidación.

**I****JURISDICCION Y COMPETENCIA**

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente (fj.4). Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora Paulina Aguirre Suárez, Jueza Nacional; y, doctora Rosa Álvarez Ulloa, Conjueza Nacional de conformidad con el oficio N° 106-SG-CNJ de fecha 01 de febrero de 2016.

**II****FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN**

El casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, han infringido las siguientes normas de derecho: artículos 4, 7, y 216, numeral 3 del Código del Trabajo; 325 de la Constitución de la República; 11 del Código Civil; y, 19 de la Ley de Casación. Fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.

**III****CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS**

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal [...] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo [...] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. [...]”. Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, al referirse al derecho al trabajo dispone: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual influye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico- profesional, particularmente aquellos designados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar,

*encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo". De tal manera, que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.*

#### IV

**4.1.- ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.-** Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal I) de la Constitución de la República, que establece: *"Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados"*; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 048-11-SEP-CC, del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: *"Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto. [...]"*. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: *"El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese*

camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Cabe precisar, que la demanda ha sido presentada con fecha 21 de agosto de 2008, conforme consta del acta de sorteo (fs. 9), por lo que no se encuentra inmersa en lo dispuesto por la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, publicada en el R.O. Segundo Suplemento No. 498 de 31 de diciembre de 2008, que en su artículo 3, agrega un innumerado a continuación del artículo 151 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que señala: *"Resuelta la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, no podrá iniciarse procedimientos judiciales ni administrativos contra dicha institución financiera, ni decretarse embargos, gravámenes, ni dictarse otras medidas precautelatorias sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de ejecución de sentencias en razón de fallos judiciales o administrativos, a causa de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha en que se resolvió liquidar a esa institución financiera y mientras tal situación continúe en vigor, excepto las hipotecas constituidas por la institución financiera a favor de terceros, las que se registrarán por el artículo 2381 del Código Civil"*; al haberse presentado la demanda con fecha anterior a la vigencia del citado artículo. Por consiguiente, cumpliendo con la disposición constitucional de motivación, luego de analizar el recurso de casación, la sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación y para hacerlo se considera: **4.1.1.- ÚNICO CARGO.- CAUSAL PRIMERA.-** Esta causal del artículo 3 de la Ley de Casación, procede cuando el juzgador de instancia incurre, en falta de aplicación, aplicación indebida, o errónea interpretación de normas de derecho, lo que implica que se configure un *error de juicio*, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. El tratadista Murcia Ballén, respecto de la violación directa de la norma, señala: *"Como lo anticipamos, la violación directa de la norma sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin consideración a la prueba de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la existencia, validez y alcance del precepto*



*legal que trascienden a la parte resolutive del fallo...".* (MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, sexta edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.). Al fundamentar su recurso el casacionista sostiene, que existe errónea interpretación del artículo 216 numeral 3 del Código del Trabajo, ya que para efectos del pago de un monto global de jubilación, esto es un capital para que el jubilado lo administre por sí mismo, por mandato legal, debe estar debidamente fundamentado, de tal manera que cubra las pensiones jubilares y sus adicionales de por vida; y, que si este monto, por las condiciones de edad avanzada del jubilado, es muy exiguo, para proteger al jubilado de esta eventualidad, la ley establece la exigencia que podrá no ser menor al 50% del salario básico unificado multiplicado por los años de servicio, por lo que deberá pagarse esa cantidad. En virtud de lo cual considera el casacionista, que es errado interpretar, que existe un mínimo establecido en la ley, y que si el empleador ha entregado este mínimo, cumple con la misma; debe entenderse que la interpretación literal de la disposición normativa es que el mínimo opera como excepción y no como regla general, ya que interpretar de otra manera es enervar el sentido proteccionista del Derecho Laboral que va dirigido a otorgar al jubilado una vida digna en los últimos años de su vida. Que el fondo global suscrito entre las partes, contiene errores de fondo y de forma, pues en el mismo no consta la fundamentación del cálculo de fondo global, y se violenta la ley mediante la reducción de un derecho no disponible por el trabajador como lo es la pensión jubilar, por lo que se torna ilegal y sin ningún efecto el supuesto finiquito o acuerdo de fondo global si este no se ajusta a lo dispuesto en la ley. Que la jubilación es un derecho no disponible para el trabajador, y por lo tanto irrenunciable, y que sin embargo, la sala en su sentencia ni siquiera ha intentado determinar si existió o no renuncia de derechos en la transacción a la que se hace referencia en sentencia, sino más bien, le da autoridad de cosa juzgada.- Que existen fallos de triple reiteración, que establecen que el fondo global es un anticipo de las pensiones jubilares a futuro, siendo estos: N° 204-97 R. No. 303-98; N° 267-97 R. No. 324-98 y 246-98 R. No. 327-98. Finalmente manifiesta, que el fondo global de jubilación debe reliquidarse porque perjudica a sus derechos laborales, implicando renuncia a sus derechos, lo que se encuentra prohibido por la Constitución de la República. Al respecto, este Tribunal de Casación efectúa el siguiente análisis: a) El artículo 219 (actual 216) numeral 3 del Código del Trabajo, señala las formas de garantizar el derecho a la jubilación: a) una pensión mensual; b) un depósito en el IESS del capital necesario para que este instituto lo jubile por su cuenta; y, c) que el empleador entregue directamente un fondo global sobre la base de un

cálculo debidamente fundamentado y practicado, en el mismo artículo de la referencia señala: *“El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o autoridad competente judicial o administrativa [...]”*, y en el inciso segundo del numeral 3 de esta misma norma legal, prevé: *“ Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio.”*. En el caso de la especie, el tribunal *ad quem*, refiriéndose al fondo global suscrito entre las partes señala: *“En el Acta de Entrega de Fondo Global celebrada, consta que al ahora accionante se le entregó en concepto de fondo global de jubilación patronal la cantidad de \$6.493.61, valor que dividido para 27.66 (tiempo de servicio de Eduardo González es igual a \$234.76, lo cual es superior al 50% de la última remuneración percibida, razón por la que a criterio de la Sala, dicho instrumento cumple con los requisitos legales pertinentes, demostrándose que en ningún momento ha existido perjuicio en contra del trabajador, ni se han vulnerado sus derechos, además de que ha sido celebrado ante la pertinente Autoridad Administrativa – Inspectoría del Trabajo. Y que para su celebración no ha existido vicio del consentimiento: error, fuerza o dolo, lo cual la torna inimpugnable.”* (La negrita nos pertenece), análisis efectuado por los juzgadores, que evidencia la errónea interpretación alegada, pues el fondo global, debe ser el resultado de un cálculo debidamente fundamentado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales; por lo que debe entenderse, que cuando la ley hace referencia a que el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación, un monto inferior al 50% del sueldo que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por el número de años de servicio prestados, se refiere a un mínimo, es decir, no menor a ese porcentaje, lo que no quiere decir, que sí al trabajador le corresponde más en derecho el juzgador no lo pueda ordenar, dado que es una garantía básica, es decir, no menos de lo que la ley ha establecido. Respecto del derecho a la jubilación, la Corte Constitucional para el período de transición, en la sentencia N° 39-11-SEP-CC, caso N° 671-10-EP, se ha pronunciado señalando: *“ (...) Esta Corte manifiesta que desconocer o limitar el derecho de una pensión jubilar vitalicia de un adulto mayor a las que se refiere el artículo 216 del Código del Trabajo, conlleva someterlo a condiciones de eventuales carencias de medios de subsistencia y de poder gozar de un status de tranquilidad en una etapa respetable en la vida de todo ser humano, cuando también los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y que todo ello guarda*

relación directa con los derechos a la dignidad de las personas, reconocida y plasmados en nuestro texto constitucional y en tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.(...<sup>1</sup>). Tanto más, que al ser la jubilación un derecho de carácter imprescriptible e irrenunciable, el cual tiene por finalidad garantizar un sustento económico en favor del trabajador que ha prestado sus servicios por un período igual o superior a 25 años, para que en el momento en el que la vulnerabilidad de su condición le exponga a los riesgos propios de la vejez, cuente con los medios adecuados para vivir con dignidad. Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal de Casación, realizar el cálculo correspondiente a efecto de verificar si el “ACUERDO DE ENTREGA DE FONDO GLOBAL”, suscrito por las partes a los 30 días del mes de mayo de 2003, en el que se le reconoció a favor del trabajador por este concepto la cantidad de USD. 6.493.61, cubre las pensiones mensuales y adicionales, que exige el artículo 216 regla tercera del Código del Trabajo. Siendo oportuno precisar, que la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en casos similares, para efectuar el cálculo del fondo global de jubilación venía tomando como referencia la pensión jubilar anual vitalicia que percibía el trabajador o a falta de ella, la establecida en el numeral 2) del artículo 216 del Código del Trabajo; más las pensiones adicionales décimo tercera y cuarta, y a falta de procedimiento sobre la expectativa de vida el coeficiente determinado en el artículo 218 del Código del Trabajo, así como el año adicional que la ley contempla para los herederos de conformidad con el artículo 217 ibídem; sin embargo al haber emitido el Ministerio de Trabajo las normas que regulan la jubilación patronal, publicadas en el R.O. No. 588 de 16 de septiembre de 2015, que en su artículo 3 determina las variables que deben considerarse para calcular el fondo global, estableciendo la siguiente fórmula: “Coeficiente actualizado de renta vitalicia x (pensión mensual x12) + décimo tercera remuneración + décimo cuarta remuneración”. El coeficiente al que se refiere la formula ha sido determinado por el Ministerio de Trabajo, considerando los parámetros que se precisan en el mencionado artículo 3 del Acuerdo Ministerial, por lo que este Tribunal de la Sala de lo Laboral acoge el referido acuerdo, por ser parte del ordenamiento jurídico al tenor de la disposición del artículo 425 de la Constitución de la República; y el procedimiento allí establecido, efectúa el cálculo del fondo global de jubilación que le correspondía al accionante, para cuyo efecto se toma como pensión patronal mensual la que venía percibiendo a la fecha en que se suscribió el “Acta de Entrega de Fondo Global” en la cantidad de USD. 24.43, y como edad del trabajador a la fecha del acuerdo 55 años.

<sup>1</sup> El texto íntegro de la sentencia véase en: <http://www.corteconstitucional.gob.ec>.

FÓRMULA: pensión anual USD. 293.16 + USD. 24.43 décima tercera pensión + USD. 121.91 décima cuarta pensión vigente al año 2003 = USD. 439.50 x coeficiente 11,7356273556750 (hombre de 55 años) = USD. 5.157,80, por lo que no existe diferencia alguna a favor del accionante, ya que por este concepto recibió una cantidad superior, esto es USD. 6.493.61. La cantidad entregada al trabajador es superior al 50% del salario básico unificado vigente al momento de celebrarse la respectiva acta 121.91 (50%) = USD. 60.955 x 29 años = USD. 1.767,69. Por las argumentaciones anteriormente expuestas y a pesar de que en el presente caso, se ha producido la errónea interpretación del artículo 216 numeral 3 del Código del Trabajo, sin que aquello incida en el fondo de la causa, ya que como se ha evidenciado no existe renuncia de derechos del trabajador, por lo que este Tribunal de la Sala de lo Laboral, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no casa la sentencia emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de fecha 13 de abril de 2015, a las 17h35, en base a los argumentos esgrimidos en este fallo. Notifíquese y devuélvase.-

Dr. Merck Benavides Benalcázar

JUEZ NACIONAL

Dra. Paulina Aguirre Suárez

JUEZA NACIONAL

Dra. Rosa Álvarez Ulloa

CONJUEZA NACIONAL

Certifico

Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

SECRETARIO RELATOR DE LA SALA DE LO LABORAL

DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

En Quito, martes ocho de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las catorce horas y veinte y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: GONZALEZ PEÑA EDUARDO EMILIO en la casilla No. 5137 y correo electrónico argudoabogados@hotmail.com. No se notifica a BAJAÑA COTALLAT SORAYA, REPRESENTANTE LEGAL, FILANBANCO S.A. EN LIQUIDACION por no haber señalado casilla y/o correo electrónico. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a.....

21 MAR 2018

SECRETARIO RELATOR



R0140 - 2016

JUICIO No. 1351-2013

PONENCIA: DR. ALFONSO ASDRÚBAL GRANIZO GAVIDIA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.-

Quito, lunes 7 de marzo del 2016, a las 09h03.-

**VISTOS:** En el juicio de trabajo seguido por Julio Norberto Moreno Márquez en contra de Fernando Idrovo Triviño, Leonardo Federico Aveiga Almeida y Alex Eduardo González Pezo, por sus propios derechos, por los que representan de las compañías MISANSA Minas San Antonio S.A. y LANGOSTARSA S.A., los demandados inconformes con la sentencia expedida el 4 de enero del 2013 a las 12h27, por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en tiempo oportuno interponen recurso de casación, por lo que encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: **PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-** Este Tribunal es competente para conocer y decidir el recurso de casación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República; 184 y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, artículo 613 del Código del Trabajo; y en razón del auto de fecha 5 de noviembre del 2015, a las 10h03, emitido por la Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, en el cual se analiza los recursos y se los admite a trámite por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades exigidas por el artículo 6 de la ley de la materia.

**SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO.-** **2.1.** El demandado Leonardo Federico Aveiga Almeida, por sus propios derechos y en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Minas San Antonio S.A. MISANSA, considera que en la sentencia de segunda instancia se han infringido las siguientes normas: artículos 115, 116, 117, 121, 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil; 74, 185 y 188 del Código del Trabajo, fundamenta sus acusaciones en las causales primera, tercera y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. **2.2.** La empresa demandada LANGOSTARSA S.A., a través de su Gerente y Representante Legal Sahara Emilia Molina Veloz, acusa que en la sentencia que impugna se han infringido los siguientes artículos: 635 del Código del Trabajo; y, 115 del Código de Procedimiento Civil, fundamenta su recurso en las causales primera y quinta de la Ley de Casación. **TERCERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN.-** Tomando en cuenta algunos criterios valiosos de la doctrina se advierte: que Manuel de la Plaza, al tratar sobre el concepto y fines de la casación considera que: "... el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad de Juez



supremo, colocado en la cima de las organizaciones judiciales, mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces, como ahora, precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídica, que ante el evento, más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un órgano singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección única a la interpretación de las normas jurídicas, cualesquiera que fuese su rango; cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y procurase, a la par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro concepto, quedasen infringidas...” (La Casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11). A su vez, Ricardo Vescovi, al referirse a la naturaleza y fin de la casación, expresa: “Luego de una evolución histórica en la que se ha producido alguna alteración en sus finalidades iniciales (Supra Cap. I) hace ya un siglo que, la más relevante doctrina sobre el tema, asigna a nuestro Instituto, estas dos finalidades esenciales: la defensa del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia” (La Casación Civil, Primera Edición, Montevideo, Ediciones IDEA, 1979, p. 25). Por su parte, el tratadista Santiago Andrade Ubidia, al abordar sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: “La función de la Casación es construir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública...”. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17). En este contexto, Galo García Feraud, al determinar los propósitos del recurso de casación, reitera que ésta surge “... como un recurso que pretende defender el derecho objetivo contra cualquier tipo de abuso de poder desde el ejercicio de la potestad jurisdiccional; esa defensa del derecho objetivo ha sido llamada por algunos tratadistas como Nomofilaquia, que naturalmente se refiere a eso, a la defensa de la norma jurídica objetivamente considerada (...) otra de las finalidades que persigue el recurso de casación es la uniformidad jurisprudencial, y, naturalmente, hacia ese punto se dirigen los esfuerzos del mayor número de legislaciones que recogen este tipo de recurso...” (La Casación, estudio sobre la Ley No. 27 Serie Estudios Jurídicos 7, Quito, 1994, p. 45). Sin embargo de ello al expedirse la Constitución de 2008 y conceptualizar que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, cambió radicalmente el marco en el que se ha desenvuelto la administración de

justicia en forma tradicional y exige que juezas y jueces debamos garantizar en todo acto jurisdiccional los principios de supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales de los justiciables; por tanto, es necesario tener en cuenta como señala la Corte Constitucional, en la sentencia No. 66-10-SEP-CC, caso No. 0944-09-EP, Registro Oficial Suplemento No. 364, de 17 de enero del 2011, p. 53 que, *“El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación...”*. Por tanto, siendo el recurso de casación de carácter extraordinario y formalista, por su naturaleza jurídica únicamente procede en casos excepcionales cuyos límites impone la ley y es así que a partir de esta conceptualización este recurso debe cumplir su rol de control de legalidad de las sentencias de instancia y con ello precautelar, de una parte, la defensa del derecho objetivo; y de otra, propiciar la unificación de la jurisprudencia mediante el desarrollo de un sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración.

**CUARTO: ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO CON RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.-** Del estudio realizado por este Tribunal de los libelos acusatorios, la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Justicia del Guayas, en confrontación con el ordenamiento jurídico, y considerando que las empresas demandadas han presentado individualmente los recursos de casación, cada uno de los cuales se fundamentan en varias causales del artículo 3 de la Ley de la materia, esta Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia procederá a realizar el análisis y resolver las acusaciones formuladas en cada recurso y de conformidad a lo establecido en la doctrina y la jurisprudencia, que señalan que se deben analizar en primer lugar las causales que corresponden a vicios *“in procedendo”*, que afectan a la validez de la causa y su violación determina la nulidad total o parcial del proceso, así como también se refieren a la validez de la sentencia impugnada; y, en segundo orden, procede el análisis de las causales por errores *“in judicando”*, que son errores de juzgamiento, los cuales se producen, ya sea por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una norma de derecho o por una infracción directa de esta clase de normas. Del examen realizado a los recursos de

casación interpuestos se advierte: **4.1. LA COMPAÑÍA DEMANDADA MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, A TRAVÉS SU REPRESENTANTE LEGAL, FUNDAMENTA SU RECURSO EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:** **4.1.1. Causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación**, que a su tenor prevé: *“5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles”*. De manera que, esta causal hace referencia de una parte, a los requisitos que la ley establece para que se configure la validez de una sentencia; y de otra, cuando en la parte dispositiva se producen decisiones contradictorias o incompatibles con la resolución. Sobre este aspecto en la doctrina Fernando de la Rúa al tratar sobre los requisitos procesales internos de la sentencia, expresa que estos atañen a su contenido, a su oportunidad y a su forma. En relación a los requisitos de contenido expresa: *“a) el juez debe resolver todas las cuestiones esenciales que hayan sido objeto del proceso; b) su decisión debe guardar correlación (congruencia con lo pedido y resistido); y c) en lo que atañe al contenido volitivo, el fallo debe ser expresión de la libre voluntad jurisdiccional del tribunal”*. Al hacer referencia a los requisitos de oportunidad sostiene que estos tienen relación con los términos y los actos previos. Al tratar sobre los términos indica: *“El juez debe pronunciar la sentencia dentro de los plazos establecidos...”*; y, al abordar sobre los actos previos sostiene que *“Se vincula también con la oportunidad...”*; y, al hacer mención a los requisitos de forma indica que verificados los presupuestos externos y la oportunidad del fallo, y precisados los límites que determinan el eventual contenido del pronunciamiento, *“...el juez tiene que poner atención en las formas que debe revestir la sentencia...”*. El autor sostiene que se debe distinguir entre las formas exteriores y las formas internas, que atañen a su estructura formal. Al abordar sobre las formas externas sostiene que estas *“...son las que imponen las leyes, según los casos, respecto de la documentación, publicidad y comunicación de la sentencia...”*; y, al mencionar sobre la estructura formal expresa: *“...la sentencia debe reunir ciertos elementos estructurales que son imprescindibles para su existencia como acto procesal. En realidad, en ellos se condensan y sobre ellos repercuten otras exigencias ya analizadas. Así, el requisito de intervención y capacidad del tribunal hace necesario que sus miembros la suscriban para que el acto permita conocer su voluntad jurisdiccional; la necesidad de fundar y resolver todas las cuestiones esenciales hace preciso que haya una motivación y una parte resolutive suficientemente explícita como para que esas cuestiones queden decididas; y las menciones subjetivas, indicando a quién afecta o alcanza la decisión*

*jurisdiccional, se vinculan con el presupuesto procesal de intervención de las partes. Los requisitos que atañen a la estructura de la sentencia son los siguientes: a) elementos subjetivos o individualización de los sujetos a quienes alcance el fallo; b) enunciación de las pretensiones; c) motivación de la sentencia, que configura el tema más amplio y trascendental de estas reflexiones; d) parte resolutive; e) fecha y firma (...)*. (Teoría General del Proceso, Ediciones Depalma, Argentina-Buenos Aires, 1991, pp. 139-160). **4.1.1.1.-** El representante Legal de MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, al amparo de esta causal dice: “(...) fundamento expresamente mi recurso de casación en el hecho cierto de que la resolución o sentencia no contiene los requisitos exigidos por la ley (...)” y luego de transcribir el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la obligación del juez de apreciar la prueba en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, señala: “Para demostrar lo aquí expresado, me permito citar específicamente las pruebas que no han sido expresadas siquiera y peor aún valoradas por los señores Jueces de la Primera Sala (...).” **4.1.1.2.-** En el caso sub júdice se observa que el recurrente acusa que la sentencia no contiene los requisitos exigidos por la ley, al no haber expresado y valorado todas las pruebas aportadas al proceso y a las que se refiere en el escrito contentivo del recurso, como ordena el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, se debe precisar lo siguiente: **a)** Una de las formas como se puede incurrir en el vicio contenido en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, es que la resolución no contenga los requisitos que exige la Ley, es decir omisiones que la afectan en cuanto acto escrito, como por ejemplo no identificar a las personas a quienes el fallo se refiere, la enunciación de las pretensiones, la motivación de la sentencia, o errores en cuanto al lugar, fecha y firma de quien la expide. En este sentido se debe señalar que en el Código de Procedimiento Civil no existe ninguna norma que especifique la estructura que debe tener una sentencia, sin embargo, si existen disposiciones que hacen referencia a los requisitos de forma, como por ejemplo los artículos: 274, que establece la obligación de los jueces de decidir con claridad los puntos que fueren materia de la resolución; 276 *Ibídem*, que prevé que las sentencias deben contener los fundamentos o motivos de la decisión; artículo 287 *Sic*, que dispone que las sentencias, autos y decretos contendrán la fecha y hora en que fueron expedidos y la firma de los jueces que los pronunciaron, sin que ninguno de ellos haya sido invocado por el recurrente al amparo de esta causal, por lo que este Tribunal se ve impedido de realizar análisis alguno. **b)** El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, invocado por el recurrente, obliga a los jueces a apreciar en conjunto la prueba de acuerdo a las

reglas de la sana crítica, observándose que de la fundamentación de la causal del recurso en análisis, el casacionista se dirige más bien a impugnar la valoración que hace el Tribunal Ad quem sobre los elementos de prueba producidos en el juicio, lo cual es ajeno a la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, debiendo precisarse en este sentido que, el Tribunal de Casación no está facultado para entrar a conocer de oficio un vicio de la resolución impugnada, así como tampoco le está permitido rebasar el ámbito señalado por las causales citadas por el recurrente, por lo que sin necesidad de ningún otro análisis la acusación deviene en improcedente.

**4.1.2. Causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,** que procede por: *“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”.*

**4.1.2.1.-** De la cita expuesta se desprende que no corresponde al Tribunal de casación revalorizar la prueba, ni juzgar los motivos que sirvieron en el proceso de convicción del tribunal ad-quem para dictar el fallo, en este sentido la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia expresó: *“La valoración o apreciación probatoria, o sea la determinación de la fuerza de convicción de los medios probatorios incorporados al proceso, es una atribución reservada a los jueces y tribunales de instancia; la potestad del tribunal de casación se reduce a controlar o fiscalizar que en esa valoración no se hayan aplicado indebidamente o dejado de aplicar o interpretado erróneamente normas procesales que regulan la valoración de la prueba, yerros que han conducido o traído como consecuencia transgresión de normas sustantivas o materiales. El yerro en la valoración probatoria se da en los siguientes casos: 1.- Cuando se valora un medio de prueba que no está incorporado en el proceso es decir, el juzgador se inventa ese medio de prueba. En este aspecto hay que tomar en cuenta que el juzgador debe valorar las piezas agregadas al proceso “lo que no está en el proceso no está en el mundo”. 2.- Cuando se omite valorar un medio de prueba que está incorporado en el proceso que es de importancia para la decisión de la causa. 3.- Cuando se valora medios de prueba que no han sido pedidos, presentados o practicados de acuerdo con la ley; esto es, con trasgresión del artículo 121 del Código Procedimiento Civil. (...) Para que sea tomado en cuenta el cargo por tal causal, el recurrente en su formulación debe cumplir éstos requisitos: 1) Identificar con exactitud el medio de prueba específico que, a su juicio ha sido valorado defectuosamente (declaración testimonial, instrumento público o privado, confesión judicial, inspección judicial, informe pericial) mejor aún si se señala la foja procesal en que se haya agregado*



dicha prueba. 2) Identificar con exactitud la norma procesal que regula la valoración de la prueba que, a juicio del recurrente no ha sido aplicada, o ha sido aplicada indebidamente o ha sido interpretada erróneamente. No valen las enunciaciones genéricas de normas que regulan determinada materia o, luego de identificar un artículo de determinado cuerpo legal, agregar “y siguiente”. 3) Demostrar con lógica jurídica el nexo o vinculación entre los medios de prueba y las normas procesales que regulan la valoración, que han conducido al yerro alegado. 4) Identificar con exactitud la norma sustancial o material que como consecuencia del yerro probatorio ha sido aplicada indebidamente o no ha sido aplicada (...)>>. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito-Ecuador, 2005, pp. 157-158).

**4.1.2.2.-** Al amparo de esta causal, el representante Legal de MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, dice: “(...) fundamento expresamente mi Recuso de Casación en la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba”, y a continuación se refiere al artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, que prevé “Las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio”; artículo 117 Ibídem, que dice: “Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”; y, artículo 121 que enumera los medios probatorios al disponer: “Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes (...)” y alega que en la sentencia impugnada, “(...) en el considerando tercero se sustenta y se menciona un hecho evidentemente falso, ajeno a la verdad, a la realidad procesal y a la Litis, ya que reiteradamente lo he manifestado, el visto bueno que se tramitó en contra del hoy actor, fue concedido a favor de mi representada. (...) Esta falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba (...) ha conducido a una equivocada aplicación de la norma de derecho al considerar que se ha producido un inexistente despido intempestivo ordenando el pago de las indemnizaciones constantes en los arts. 185 y 188 del Código del Trabajo”. La sentencia dictada por los señores jueces de la Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el considerando Tercero se pronuncia: “(...) la traba de la litis se concreta en determinar la afirmación de los demandados de que la relación laboral terminó por trámite de Visto Bueno. Al respecto, de acuerdo con la Resolución de Visto Bueno de fs. 50 y vta., éste le fue negado a los demandados, por cuanto fue solicitado después que el accionante y otros trabajadores habían denunciado ante la Inspectoría del Trabajo del Guayas, haber sido despedidos del Trabajo con fecha 8 de



agosto del 2008 fs. 42 y vta., conforme consta también del acta de inspección de fs. 44 y vta.". En torno a estas alegaciones, es necesario insistir en que la valoración de la prueba es una actividad reservada a los jueces de instancia, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N° 101-13-SEP-CC, caso No. 0403-2013-EP, que fue publicada en el Registro Oficial No. 161 de 14 de enero de 2014 y en la cual entre otros aspectos precisa: <<"La casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales ..." (...) "Entonces, al ser el recurso de casación de carácter extraordinario la Corte Nacional de Justicia no tiene la facultad para valorar la prueba o estudiar los argumentos sostenidos por las partes durante la sustanciación de la causa pues, es un recurso que se fundamenta en el análisis sobre la legalidad de la sentencia recurrida. Al respecto, existen varios pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que la casación, al ser un recurso extraordinario, debe cumplir con ciertos condicionamientos tanto para su presentación y su resolución y parte de ellos no es la valoración de la prueba...>>, criterio emitido por el máximo órgano de interpretación y justicia en materia constitucional, que ha establecido el límite de actuación de los jueces casacionistas, en cuanto a la valoración de la prueba. En el caso sub examine, este Tribunal determina que la alegación del recurrente se concreta al hecho de que la Sala de alzada declara con lugar el pago de la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, desconociendo el visto bueno solicitado por el empleador y concedido por el Inspector del Trabajo del Guayas, y en ese sentido es pertinente señalar que el Tribunal Ad quem se remite a "fs. 50 y vta." del expediente, para referirse a la resolución de Visto Bueno que "(...) le fue negado a los demandados", sin embargo, al revisar el cuaderno de primer nivel, se observa que en la citada foja, efectivamente consta una Resolución que niega la petición de Visto Bueno, pero en contra de Germán Bolívar Moreno Márquez, **persona ajena al proceso laboral objeto del presente recurso**, por lo que se evidencia que el tribunal de segunda instancia ha incurrido en un error al valorar el citado documento. Es necesario precisar que a fs. 60 del expediente consta agregada una copia certificada de la resolución que concede el visto bueno solicitado por Leonardo Federico Aveiga Almeida, en su calidad de Gerente General de la Compañía MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, en contra del Trabajador Julio Norberto Moreno Márquez, respecto de la cual se realiza las siguientes observaciones a fin de cumplir con el control de

legalidad que exige el recurso de Casación: a) El artículo 172 del Código del Trabajo, enumera de manera taxativa las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, y en el numeral 1 consigna *“Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor”*; en concordancia el artículo 611 Sic, establece el trámite a seguir y los plazos que deben observarse al decir: *“El inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos y motivos en que se funde”*. En este contexto revisada la copia certificada de la resolución de visto bueno que obra a fs. 60 del expediente, se desprende que: a) El empleador Leonardo Federico Almeida, representante legal de la Compañía Minas San Antonio S.A. MISANSA, pone en conocimiento del Inspector del Trabajo del Guayas, que el trabajador Julio Norberto Moreno Vásquez *“(...) desde el día viernes 8 de agosto del 2008, a partir de las 10h00 am en un acto de indisciplina abandonó su puesto de trabajo, y que llega un tiempo mayor a tres días de faltas hasta la actualidad (...)”*; b) La Inspectora Provincial de Trabajo del Guayas notificó la petición de visto bueno al accionado *“(...) el día 20 de agosto del 2008, a las 13H38”*; c) La diligencia de investigación conforme lo dispuesto en el artículo 618 del Código del Trabajo, se la realizó *“(...) el 18 de septiembre del 2008, a las 14h39 minutos (...)”* (conforme consta en la parte expositiva de la resolución), sin embargo, en el considerando cuarto numeral 4.2. se consigna *“A foja 18 de los autos consta el Acta de Inspección realizada el día 14 de agosto del 2008 a las 12H30 de la mañana, realizada por la Abogada MAURA ZAMORA LOOR, en la que manifiesta que el trabajador JULIO NORBERTO MORENO MARQUEZ, abandonó su puesto de trabajo (...)”*, sin que se pueda determinar de manera fehaciente cual fue la fecha en la que se realizó la diligencia de inspección; d) En la parte resolutive consta la concesión del Visto Bueno solicitado por la parte empleadora, y en consecuencia se *“(...) dan por terminadas las relaciones laborales que lo vincula con el trabajador JULIO NORBERTO MORENO MARQUEZ por encontrarse éste incurso en el numeral primero del artículo 172 del Código del Trabajo.- NOTIFIQUESE.- fj).- Abg. Magali Wittong de Vélez Inspectora Provincial de*

*Trabajo del Guayas. Lo que comunico a usted para los fines de ley. Guayaquil 24 de Octubre del 2008*" (Las negrillas no corresponden al texto). De lo expuesto, se concluye que efectivamente las relaciones laborales entre el actor y la empresa demandada terminaron por visto bueno concedido por la inspectora del trabajo al amparo del artículo 172 numeral 1 del Código de la materia, evidenciándose de esta forma que existe una valoración absurda, ilógica y arbitraria por parte del Tribunal Ad quem, toda vez que la resolución de la Inspectora del Trabajo que concede la petición de visto bueno, es un instrumento público que ha sido pedido, presentado y practicado de acuerdo con lo que determina el artículo 577 del Código del Trabajo, que se refiere al momento procesal oportuno para solicitar y practicar las pruebas, conforme se evidencia del escrito de excepciones y formulación de pruebas presentado por el demandado y que consta a fs. 37 a 39 del expediente, bajo la denominación "*prueba # 5*", en consecuencia, la alegación del recurrente es procedente y no ha lugar el pago de la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio previstas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.

**4.1.3. Causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación**, que se configura en los casos de: "*Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva*"; está reservada a los errores de juzgamiento conocidos como "*in iudicando*", cuando se acusa a la sentencia de violación directa de la norma sustantiva, de precedentes jurisprudenciales obligatorios en donde los reproches probatorios son inadmisibles, pues ocurre cuando no se ha subsumido adecuadamente los hechos fácticos probados, admitidos, dentro de la hipótesis normativa a que corresponde, porque se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, porque no se ha aplicado la que corresponde, o porque aplicando la que corresponde se ha interpretado de manera errada al momento de emitir el fallo. Por tanto, se trata de tres tipos de transgresión, esto es, a) Aplicación indebida que se configura cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado; más se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla y que según Humberto Murcia Ballén: "Emana, pues, la indebida aplicación, no del error sobre la existencia y validez de la ley, sino del yerro en que incurre el juzgador al relacionar la situación fáctica controvertida en el proceso y el hecho hipotetizado por la norma que aplica" (Recurso de Casación Civil, 4ta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Vocatio in Ius, Bogotá, 1966, p. 322) o como señaló La Primera Sala de lo Civil y Mercantil, al decir: "Cuando el juzgador

entiende rectamente la norma, pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incorre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido”. (Dr. Santiago Andrade, La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 183). b) Falta de aplicación, se produce en el momento que quien juzga no aplica la norma que corresponde al caso que se está litigando, por lo que se conoce a este error como de omisión; de ahí que la misma Primera Sala de lo Civil y Mercantil al referirse a esta clase de transgresión expreso: “Cuando el juzgador deja de aplicar en el caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la acogida”. (ob. cit. p. 183); y, c) Errónea interpretación, que tiene lugar cuando siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, quien juzga le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la ley y por ello La Sala de lo Civil y Mercantil referida señaló que se produce este vicio de juzgamiento: “Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica jurídica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene” (ob. cit. p. 183). En este sentido Humberto Murcia Ballén expresa: “Muy distinta a las dos anteriores es la esencia de la violación por interpretación errónea de la ley. No se trata, en esta clase de quebranto, como ocurre en las dos atrás analizadas, de un yerro de <<diagnóstico jurídico>>, o de uno de relación entre el hecho específico concreto y el hecho hipotetizado por la norma jurídica, sino de un error acerca del contenido de ésta”. (ob. cit. p. 324). Por tanto, quien interpone un recurso de casación debe tener presente al momento de fundamentarlo que toda norma sustancial tiene dos partes: un supuesto y una consecuencia y de no contenerlo se complementa con otra u otras normas, para así formar una proposición jurídica completa en la que se distinga claramente el supuesto de hecho y por tanto el efecto jurídico respectivo, y que sobre ello el Dr. Santiago Andrade Ubidia sostuvo: <<Respecto a la causal primera, también es imprescindible realizar la “proposición jurídica completa”: no es suficiente señalar una norma de derecho sustantivo, sino que deberá examinarse si ella contiene una proposición jurídica.” (ob. cit. p. 203) y para que ello ocurra es necesario que se precisen todas las disposiciones legales que la constituyen; de modo que si se fundamenta el recurso en esta causal, se debe puntualizar el vicio o yerro, teniendo en cuenta que éstos son independientes y se excluyen entre sí, y el no identificarlo o escoger el incorrecto, el recurso puede no surtir los efectos que la o el recurrente espera. 4.1.3.1. El recurrente acusa la “errónea interpretación de normas de

derecho, en la sentencia o auto y que ha sido determinante en su parte dispositiva” al decir que “Los señores Jueces de la Primera Sala se han permitido imponer un recargo del 100% del valor fijado como vacaciones, al amparo de la estatuido en el Art. 74 del Código de Trabajo (...)” pues alega “(...) que el actor realizaba funciones de cargador de sacos, es decir no realizaba ninguna actividad técnica o de confianza, adicionalmente no consta que el empleador haya negado su derecho a la vacación, por ende al no encuadrarse en este presupuesto legal no existe obligación de pagar dicho recargo (...)”. La sentencia de segunda instancia en el considerando cuarto señala: “Establecida la existencia del vínculo laboral, correspondía a los demandados justificar el cumplimiento del pago de los beneficios sociales de Ley que reclama el actor en su demanda; y, a falta de constancia procesal, se ordena su solución (...) las vacaciones con el 100% de recargo según lo dispone el Art. 74 del Código del Trabajo”. El artículo 74 del Código del Trabajo, dice a su tenor literal: “Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al trabajador por corto tiempo, el empleador podrá negar la vacación en un año, para acumularla necesariamente a la del año siguiente. En este caso, si el trabajador no llegare a gozar de las vacaciones por salir del servicio, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las no gozadas, con el ciento por ciento de recargo”, es decir, en esta norma se establece la facultad del empleador para negar las vacaciones, siempre que se verifiquen los siguientes presupuestos de procedencia: a) Que se trate de labores técnicas o de confianza; y, b) Que sea difícil de reemplazar al trabajador por corto tiempo. En el caso sub examine no existe constancia procesal, de que la empleadora haya negado las vacaciones al trabajador, así como tampoco se ha demostrado que el actor del juicio laboral haya desarrollado labores técnicas o de confianza, que hayan hecho difícil su reemplazo, por lo que no procede el pago del recargo previsto en el artículo 74 del Código del Trabajo, por lo que procede el cargo de errónea interpretación de la referida norma, invocado por el recurrente. Al amparo de la misma causal, el casacionista acusa la falta de aplicación de los artículos 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, pues alega que “Resulta por demás absurdo, ilegal e incoherente, ordenar el pago de lo no reclamado y más aún de lo evidentemente mal calculado (...) es decir estaríamos frente a un fallo extra petita (...)”. Al respecto es necesario precisar que la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación procede por violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios, observándose en el presente caso que, el recurrente ha fundamentado las alegaciones realizadas en normas adjetivas o de



procedimiento, lo cual se contrapone con la causal invocada, también ha alegado el vicio de extra petita, que es ajeno a la causal primera, por lo que se insiste en lo manifestado en el considerando tercero de esta sentencia, esto es que el recurso de casación es de carácter extraordinario y formal, lo que exige al recurrente cumplir con los condicionamientos y requisitos expresos previstos en la Ley de Casación para su presentación, a fin de que la Corte Nacional admita el recurso en una fase inicial previo a la resolución de la causa *“De modo que, solo en aquellos casos en los que un recurso ha superado la fase admisión, le corresponderá a la Corte Nacional de Justicia pronunciarse respecto del fondo de la cuestión y emitir una sentencia fundada en derecho que resuelva respecto de la pretensión del accionante”* (Corte Constitucional, sentencia N° 331-15SEP-CC, caso No. 2202-13-EP, de 30 de septiembre de 2015). De conformidad con lo expuesto, en el caso sub júdice se observa que la Conjueza Nacional mediante auto de fecha 5 de noviembre del 2015, a las 10h03, admite el recurso a trámite, por lo que le corresponde en este momento al tribunal casacionista resolver la pretensión del recurrente y en este contexto, se observa que el problema que plantea es que la sentencia del tribunal ad quem ordena *“(...) el pago de lo no reclamado”*, en el considerando quinto de la sentencia que dice: *“Ha lugar el pago de la remuneración de los 7 días del mes de agosto del 2008 laborados con el triple de recargo según el artículo 94 del Código del Trabajo”, con lo cual “no ha aplicado lo dispuesto en el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, y esta falta de aplicación ha sido determinante en la parte dispositiva de la resolución (...)”*. El artículo 273 antes invocado, dice *“La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella”*, observando este Tribunal que la pretensión N° 9 que consta en la demanda presentada por el trabajador (fs. 1 y 2 del cuaderno de primer nivel), dice: *“El pago los del ultimo día laborado (7 de agosto del 2008) \$ 10,66”*, valor que resulta de dividir el sueldo que manifiesta en su demanda que recibía para 30 días del mes ( $320/30= 10,66$ ), y que por lo tanto la pretensión del actor es el pago de 1 día de trabajo en el mes de agosto del año, 2008, por lo que el cargo alegado por el casacionista procede, y por tanto no corresponde pagar al trabajador por los 7 días del mes de agosto, sino únicamente por 1 día con el triple de recargo de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Código del Trabajo.

**4.2. LA OTRA COMPAÑÍA DEMANDADA LANGOSTARSA S.A. A TRAVÉS SU REPRESENTANTE LEGAL, SAHARA EMILIA MOLINA VELOZ, FUNDAMENTA SU RECURSO EN LAS SIGUIENTES CAUSALES: 4.2.1. Causal quinta del artículo 3**



**de la Ley de Casación**, señalando que la sentencia dictada por el tribunal ad quem no contiene los requisitos exigidos por la ley y fundamenta su recurso en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal manifiesta que esta alegación fue realizada también por el representante legal de la compañía Minas San Antonio S.A., y por lo tanto su análisis consta en el numeral 4.1.1.2 de esta sentencia, por lo tanto es innecesario repetir lo ya manifestado, por lo que la recurrente se remitirá al contenido del numeral antes señalado. **4.2.2. Causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación**, por falta de aplicación del artículo 635 del Código del Trabajo, alegando que *“Los señores Jueces de la Primera Sala, a pesar de que consta en el proceso la fecha de término de relaciones laborales del hoy actor con mi representada, esto es el día 15 de julio del 2005, y a pesar de haber sido alegada expresamente la prescripción de la acción en contra de mi representada (...) se permiten condenar a mi representada al pago de valores y de indemnizaciones que no le corresponde asumir (...)”*. La sentencia dictada por los señores jueces de segunda instancia, en la parte resolutive disponen *“(...) ordena que las compañías MISANSA, Minas San Antonio S.A. y LANGOSTARSA S.A. (...) paguen al actor JULIO NORBERTO MORENO MÁRQUEZ, los siguientes valores (...)”*. El artículo 635 del Código del Trabajo a su tenor literal dice: *“Prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos.- Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo, especialmente contemplados en este Código”*. Respecto de esta alegación el Tribunal casacionista señala: a) Luis Claro Solar al analizar sobre la prescripción expresa el doble aspecto en que puede ser considerada y clasificada, esto es: *<<(...) prescripción adquisitiva o usucapión (...), mediante la cual “... nos hace adquirir” mediante el uso en la tenencia con ánimo de señor o dueño durante un lapso determinado el dominio de las cosas ajenas...”; y, “...prescripción extintiva o liberatoria”, o sea aquella “...que nos libera de una obligación extinguiéndola>>*. (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, volumen VIII, Editorial Jurídica de Chile, 1979, pp. 19 y 20). En ese sentido el Art. 2392 del Código Civil del Ecuador expresa: *“Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción”*. A su vez, el Art. 2393 ibídem señala: *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El Juez no puede declararla de*

oficio". b) Al analizar la prescripción extintiva en materia laboral, una de las censuras que se ha efectuado con respecto a la prescripción extintiva es de considerar que colisiona con el carácter tuitivo de aquel, en cuanto por la vía de la prescripción se afectan derechos de las y los trabajadores. Sin embargo, en este debate la doctrina laboral explica que la prescripción extintiva o liberatoria surge a consecuencia de la necesidad de consolidar el principio de seguridad jurídica, que entre otros aspectos tiene un interés público. En este sentido Guillermo Cabanellas, al referirse a la prescripción en el derecho laboral sostiene: *"Todo derecho ha de ejercitarse dentro del plazo válidamente señalado, para evitar que prescriban las acciones de que se dispone a fin de tornarlo efectivo judicialmente, cuando no haya habido satisfacción y cumplimiento por la otra parte. Por la prescripción liberatoria se considera que el acreedor, cuando deja pasar cierto tiempo sin ejercer la acción concedida en derecho, decae tácitamente de su posición, por cuanto se presume, ante su inacción o silencio, que ha remitido la deuda. En Derecho Laboral, dados los intereses en juego y la necesidad de conocer el alcance inmediato de las obligaciones y de los derechos, la prescripción es generalmente más corta que en el Derecho Civil y en el Comercial. Hay un interés social en no prolongar por demás una situación de incertidumbre, y se presume por la tácita que el no ejercer la acción legalmente reconocida, dentro del término fijado para ello, equivale a la renuncia de un derecho, considerado tal vez como improcedente por el eventual acreedor. Por otra parte, la dificultad de la prueba, tanto más insegura, cuanto más se aleja del momento en que se crearon las relaciones jurídicas o en que se produjeron los hechos de trascendencia en las mismas, justifica igualmente la fijación de un plazo prescriptivo más corto..."* (Tratado de Derecho Laboral, Doctrina y Legislación Iberoamericana, Tomo II, Volumen 3, Tercera Edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires- República Argentina, 1998, pp. 532-533). c) En el Ecuador la prescripción en la Legislación Laboral ha tenido diferentes matices, así al dictarse por primera vez el Código del Trabajo mediante Decreto Supremo No. 210 por parte del General G. Alberto Enríquez, Jefe Supremo de la República, con fecha 5 de Agosto de 1938, en el Título VIII, Capítulo Único, en el Art. 476 se adoptó el sistema de prescripción extintiva en el ámbito laboral, al expresar : *"Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en un año, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que siguen y más pertinentes de este Código..."*. Más adelante, al promulgarse la Primera Codificación del Código del Trabajo en Octubre de 1960, en el Título VIII, Art. 533, al regularse sobre la prescripción, se vuelve a reiterar el concepto de que en materia laboral las acciones provenientes de los actos y

contratos de trabajo prescriben en un año. En tanto que, al publicarse la Segunda Codificación del Código del Trabajo en el Registro Oficial Suplemento No. 239, de fecha 7 de Junio de 1971, en el Gobierno de José María Velasco Ibarra, en el Título Octavo, al tratar sobre la prescripción en el Art. 581, se modifica el tiempo para que opere la prescripción al decir: *"Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo especialmente contemplados en este Código"*. En la actualidad, en el Art. 635 del Código del Trabajo se mantiene un texto similar al antes indicado, referente a la prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos. d) En el ordenamiento jurídico laboral ecuatoriano se han establecido dos casos de imprescriptibilidad de derechos laborales vía resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 1989, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 233 de 14 julio de 1989, el primero que determinó la imprescriptibilidad del derecho al fondo de reserva, fundamentando tal decisión entre otros aspectos, en el derecho reconocido de manera expresa a los trabajadores en la norma que en la actualidad consta en el inciso segundo del Art. 196 del Código del Trabajo que contempla: *"El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo"*. Texto de orden legal que fue adoptado por primera vez en el inciso segundo del Art. 124 del Código del Trabajo de 1938 y que definió la naturaleza jurídica de orden legal del derecho al fondo de reserva; y, el segundo caso que expresó, que es imprescriptible el derecho del trabajador, que hubiere prestado sus servicios por 25 años o más, en forma continuada o interrumpidamente, para que se beneficie con la jubilación patronal al que se refiere el Art. 221, actual 216 del Código del Trabajo, resolución que tuvo como antecedente varios pronunciamientos en el sentido que la naturaleza jurídica de este derecho se halla definida por aspectos reconocidos en el Código del Trabajo, al sostener que la Jubilación Patronal establecida en este cuerpo legal, es una prestación de tracto sucesivo y de carácter vitalicio; y, que la o el trabajador para alcanzar el derecho en análisis debe haber laborado 25 años o más en beneficio de un mismo empleador, de forma continuada o ininterrumpidamente. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia estableció a la jubilación patronal como un derecho imprescriptible dada su naturaleza jurídica de orden legal cuyos elementos sustanciales se hallan normados en el Código del Trabajo. En el presente caso, si bien es cierto la representante legal de la demandada LANGOSTARSA S.A., ha venido alegando la prescripción, sin embargo no justifica tal excepción, no

obstante aquello se observa que desde la fecha que termina la relación laboral según el juramento deferido rendido por el actor y que ha sido aceptado en el considerando séptimo de la sentencia de segunda instancia, esto es el 7 de agosto del 2008, hasta la fecha de la citación con la demanda (fs. 14 a 22) no han transcurrido los tres años previstos en el artículo 635 del Código del Trabajo para que opere la prescripción, por lo que la alegación deviene en improcedente. En virtud de lo expuesto, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA**, en los términos de este fallo casa parcialmente la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Justicia del Guayas, el 4 de enero del 2013 a las 12h27, y dispone que las compañías MISANSA Minas San Antonio S.A. y LANGOSTARSA S.A., a través de sus representantes legales, cancelen al actor los siguientes valores: décima tercera remuneración: 169,69 + décimo cuarta remuneración; \$ 66,66 + vacaciones \$ 342,61 + pago de un día del mes de agosto del 2008 \$10,66 + el triple de recargo de conformidad con el artículo 94 del Código del Trabajo \$31,98, lo que da un total de \$ 621.60 (seiscientos veinte y uno con 60/100). Los intereses en los rubros que corresponda, se calcularán al momento de ejecutoriar la sentencia, conforme la disposición del Art. 614 del Código del Trabajo. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Casación por haberse aceptado parcialmente el recurso, se dispone devolver el 50% de la caución a la empresa demandada MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA; y, el 50% restante al actor por la demora. Sin costas no honorarios de abogado que regular. **Notifíquese y devuélvase.-**

Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia  
**JUEZ NACIONAL**

Dra. Paulina Aguirre Suárez  
**JUEZA NACIONAL**

Dr. Merck Benavides Benalcázar  
**JUEZ NACIONAL**

**Certifico.-**

Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.  
**SECRETARIO RELATOR.**

En Quito, martes ocho de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las diez horas y treinta y siete minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: MORENO MARQUEZ JULIO NORBERTO en el correo electrónico malena2270@gmail.com. COMPAÑIAS MISANSA MINAS SAN ANTONIO S.A. en la casilla No. 2539 y correo electrónico dmf@estudioamador.com.ec del Dr./Ab. MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO; LANGOSTARSA S.A. en la casilla No. 2588 y correo electrónico anic726@hotmail.es del Dr./Ab. ANGEL NILTON IZQUIERDO CEVALLOS. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a 21 MAR 2018  
SECRETARIO RELATOR

CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

R0141-2016 – Juicio Laboral N°. 841-2014

**PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR****CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-**

miércoles 9 de marzo del 2016, las 10h08.-

Quito,

**VISTOS:** Dentro del juicio laboral que sigue José Miguel Montenegro Godoy en contra de Olavo Yépez Ovando, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, de fecha 19 de mayo del 2014, las 10h51 que revoca la sentencia subida en grado y en su lugar acepta la demanda, disponiendo que el demandado pague al actor el valor de \$5.653.3., la parte demandada inconforme con la sentencia, presenta recurso de casación, el mismo que ha sido admitido por la Sala de Conjueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en auto de calificación de 22 de octubre del 2014 a las 11h04; y estando la causa en estado de resolver, se considera:

**PRIMERO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA:**

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformativa del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación en el proceso laboral según lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctor Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Juez Nacional y doctora Rosa Álvarez Ulloa Conjueza de la Sala de lo Laboral, en atención al oficio No. 106-SG-CNJ de 1 de febrero de 2016.

**SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:**

La parte demandada alega como normas vulneradas las siguientes: Artículos 75, 76 numeral 4 y 7 literal i) de la Constitución de la República del Ecuador; 115, 117, 121, 122, 123, 143, 164, 165, 167, 179, 180, 216, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil; 1, 16, 280, 588 del Código del Trabajo. Acusa transgredido el fallo de triple reiteración “Juicio II Jurisprudencia



Corte Suprema del Ecuador Pág. 202 a 210”. Funda su recurso en las causales tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

#### **TERCERO.- CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS:**

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal [...] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo [...] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. [...]”. Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, al referirse al derecho al trabajo dispone: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual influye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la

orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico- profesional, particularmente aquellos designados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”. Es decir que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.

#### **CUARTO.- ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.-**

**4.1.-** Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de la Constitución de la República, que establece: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 048-11-SEP-CC, del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: “Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto. [...]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: “El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por

una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación, la sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación, siguiendo el orden de análisis de la casuales esto es se inicia observando las acusaciones de la causal cuarta, para luego de ser procedente las acusaciones efectuadas bajo la casual tercera. 4.2.- Con sustento en la causal cuarta, el recurrente alega: "La sentencia atacada, en ningún momento hace una valoración a la prueba actuada, pedida y entregada por el Doctor Edgar Merlo, Defensor Público de la Provincia de Imbabura, en Oficio No DPDPP=-2013-054, que con copias certificadas corre de fojas 81 a 84 del proceso, la cual tiene todos los elementos para considerarla Prueba Plena, pues cumple con todos los presupuestos del art. 117 del Código de Procedimiento Civil [...], con lo que demuestra que le Defensor Público prestó la ayuda solicitada por Montenegro Godoy, para presentar una demanda de trabajo en el Ministerio Laboral, contra la Sra. Rosa Amada Suárez, de la cual recibió la cantidad de un mil dólares, por lo cual se colige que no es posible que una persona de 65 años esté trabajado en dos domicilios distintos al mismo tiempo [...] Consecuentemente, la sentencia atacada, al omitir una prueba presentada por un Institución del Estado, cual es la Defensoría Pública de Imbabura, igualmente inaplica una norma de derecho constante en los artículos 164 y 165 del Código de Procedimiento Civil." "Que la sentencia atacada, omite la prueba reina del proceso laboral, la cual es la confesión judicial"; que "la confesión judicial rendida por José Montenegro Godoy, reúne todos los elementos de legitimidad, en conformidad con los art. 122, 123 y 143, del Código de Procedimiento Civil, por lo que A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBA". Que "consecuentemente, la sentencia atacada no es completa y por lo tanto carece de

motivación, por lo que la causal cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación ha sido demostrada”. Bajo las argumentaciones señaladas se considera: **4.2.1.-** Al invocar la causal cuarta en el recurso de casación, debe considerarse que aquella se produce por “Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la Litis”; esta causal contempla los vicios de ultra petita, citra petita y extra petita, vicios que provocan incongruencia en el fallo. Ahora bien, en la especie, como se ha expuesto con anterioridad, el recurrente centra su reclamo expresando que se ha omitido considerar en la sentencia la prueba aportada al proceso por el Defensor Público, así como la confesión judicial rendida por el actor; concluyendo que “la sentencia atacada no es completa y por lo tanto carece de motivación, por lo que la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación ha sido demostrada”. Al respecto este Tribunal de Casación considera que la causal cuarta contempla trasgresiones de inconsonancia o incongruencia en la sentencia, características que surgen de la confrontación entre la parte resolutive de la sentencia, las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas; en este sentido para establecer si existe uno de los vicios ultra petita, citra petita y extra petita, es preciso hacer una comparación entre lo que se ha demandado, las excepciones opuestas y lo que se ha resuelto en la sentencia, es decir las acusaciones efectuadas bajo esta causal, deben versar sobre los puntos sobre los cuales quedó trabada la litis, por tal razón establecer acusaciones como las que efectúa el recurrente en relación a que en la sentencia no se ha considerado la prueba aportada por el Defensor Público, así como la confesión judicial del actor, y por tal razón establecer una carencia de motivación en la sentencia, implica una inconsistencia en la reclamación efectuada por el recurrente bajo la causal invocada, provocando que su pretensión no tenga asidero legal, consecuentemente se rechaza el cargo alegado bajo esta causal. **4.3.-** Con relación a la causal tercera, la parte recurrente argumenta que: “La sentencia atacada adolece de una absoluta falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, lo cual ha conducido a una equivocada resolución en la sentencia”, acusa que “no se ha tomado en consideración el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República, pues “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria” También se ha inobservado el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, pues tal certificación no se practicó conforme lo prescribe la ley”; acusa que no se ha aplicado el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, acusando la valoración de la prueba específicamente de los roles de pago; establece una falta de aplicación del

artículo 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil. Argumenta además, aspectos de carácter probatorios tales como: “En lo que tiene que ver con el certificado conferido por el teniente Político de Ambuquí que corre en fojas 20 del proceso no se le da valor probatorio toda vez que no ha sido reconocido su firma en legal y debida forma en la Audiencia definitiva que respecta a lo presenciando el día 13 de septiembre del 2013 a fin de cumplir con el principio de inmediación y contradicción”, que “en la sentencia atacada, se dice que “ha sido demostrada la relación laboral, mediante los roles de pago mensuales por servicios en Ambuquí, que obran de fs. 21 a 24, agregadas al proceso a través del mismo escrito de anuncio de prueba del accionante antes indicado” aquí hay varios problemas no resueltos ni justificados por los autores de la sentencia [...]”, y señala varias acusaciones sobre la prueba aportadas al proceso, tales como roles de pago. Concluye expresando que “los señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en vez de hacer un análisis de la resolución del inferior, a efecto de darle más consistencia, seguridad y conformidad con las leyes pertinentes, faltaron a su deber y saltaron de mala fe al no fundamentar ni motivar las supuestas pruebas, atentando contra el principio de la imparcialidad y la verdad proceso, faltando la ética y condenando a quien no merece [...]”. Que “existe una errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, pues no existe fundamentación ni motivación de la misma, se omite y no aplica la Constitución de la República, el Código de Procedimiento Civil de las reglas del debido proceso, con su consecuencia fatal: condenar a quien no lo merece.”

**4.3.1.-** La causal tercera, está vinculada con la aplicación de la ley que regula la valoración de la prueba, procede cuando las normas de valoración de la prueba no han sido aplicadas o lo han sido indebidamente, o erróneamente interpretadas, provocando que normas sustantivas hayan sido inaplicadas o aplicadas de forma desacertada. Por lo tanto para que esta causal prospere el recurrente está obligado a puntualizar a más de las normas de valoración de la prueba que a su criterio no fueron aplicadas, o se aplicaron incorrectamente o fueron erróneamente interpretadas, cómo ese desacierto de las normas le llevaron al tribunal de alzada a incurrir en la violación indirecta de la norma sustantiva, es decir establecer la proposición jurídica completa. Ahora bien, sobre la acusación que efectúa el recurrente, este Tribunal de Casación procede a observar la valoración de la prueba que han efectuado los jueces de instancia y el pronunciamiento que han tenido respecto de la alegación de la parte demandada en el recurso de casación, así se observa: La sentencia materia de casación en el considerando Sexto, al referirse a la valoración de la prueba establece: “Además, mediante escrito de anuncio de





*prueba, de la accionante, que obra de fs. 26, se agrega al proceso, la certificación de fs. 20, conferida por el Teniente Político de la parroquia Ambuquí, en la cual, indica que ha estado presente, ha sacado cama, colchón, frazadas, televisor de 14 pulgadas, equipo de sonido, comodín velador, DVD, plancha, certificación a la cual se le da valor de prueba, por ser Autoridad, quien emite la misma". "Por último, también ha sido demostrada la relación laboral, mediante los roles mensuales de pago por servicios en Ambuquí, que obra a fs. 21 a 24, agregadas al proceso, a través del mismo escrito de anuncio de pruebas de la accionante antes indicado". "Con esta prueba se demuestra la contradicción incurrida por el demandado, cuando dice que se le contrataba esporádicamente y por cierto número de horas; es decir, si esto era verdad, lo lógico o normal, era que terminado el trabajo de limpieza de la piscina u otra actividad, esto es una o dos horas de trabajo, se le pague la remuneración pertinente por dicho tiempo de trabajo; sin embargo, de los roles de pago en referencia se demuestran lo contrario".*


Al respecto, como se observa, en la sentencia recurrida, se efectúa un análisis de la prueba aportada al proceso, explicando de manera adecuada cómo se ha efectuado el proceso valorativo de las misma sin que se evidencie que en la mencionada sentencia se hubiere violentado las reglas de valoración de la prueba o que en la cual se haya expuesto una valoración absurda, arbitraria, ilegal o alejada de la realidad procesal; con relación a la prueba agregada al proceso, específicamente los roles de pago que alega el recurrente así como el certificado conferido por el Teniente Político de Ambuquí se observa que aquella ha sido debidamente anunciadas en la etapa procesal pertinente, las mismas que no ha sido contradichas por la parte demandada, consecuentemente aquellas han sido observadas al tenor de lo que dispone las reglas del debido proceso y las reglas de la sana crítica tal como establece los artículos 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil. Además es preciso mencionar que no es atribución del Tribunal de Casación, el volver a revalorar la prueba efectuada por los juzgadores de instancia, pues su labor se determina en un análisis minucioso de esta valoración, analizar la prueba como pretende el recurrente en su escrito de casación, se estaría incurriendo en una revalorización de la prueba, situación que está vedada a este Tribunal, por lo cual se desecha el cargo en relación a la causal tercera invocada por el recurrente. En virtud de lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no casa la sentencia emitida por los Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de



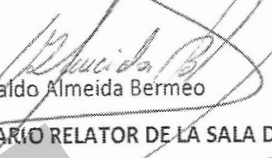
Imbabura, de fecha 19 de mayo del 2014, las 10h51.- De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese el valor de la caución rendida a la parte actora. Notifíquese y devuélvase

  
Dr. Merck Benavides Benalcázar  
JUEZ NACIONAL

  
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia  
JUEZ NACIONAL

  
Dra. Rosa Álvarez Ulloa  
CONJUEZA NACIONAL

Certifico

  
Dr. Oswaldo Almeida Berméo  
SECRETARIO RELATOR DE LA SALA DE LO LABORAL  
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

En Quito, miércoles nueve de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las once horas y ocho minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: MONTENEGRO GODOY JOSE MIGUEL en la casilla No. 1991 y correo electrónico cervanvini@hotmail.com del Dr./Ab. LUIS ELIAS CERVANTES SILVA. YEPEZ OBANDO OLAVO en el correo electrónico victorguzmanp60@hotmail.com. Certifico:

  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEÓ  
SECRETARIO RELATOR

ANDRADEA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

21 MAR 2018

SECRETARIO RELATOR

R0142-2016- Juicio Laboral N°. 1812-2014

*PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-*Quito, ~~Miércoles 09 de marzo de 2016~~; 14h 09m56

VISTOS: La parte actora Cristina Elizabeth Chávez Moreira, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por los Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro del juicio laboral que sigue en contra de la compañía Onmilife del Ecuador S.A.

I

### JURISDICCION Y COMPETENCIA

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformativa del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente (fj.3). Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Jueza Nacional; y, doctora Rosa Álvarez Ulloa, Conjueza Nacional de conformidad con el oficio N° 106-SG-CNJ de fecha 01 de febrero de 2016.

II

### FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la sentencia impugnada, han transgredido las siguientes normas de derecho: artículos 4, 7, y 40 inciso segundo del Código del Trabajo; artículos 115 y 207 del Código de Procedimiento Civil; artículos 325 y 326 numeral 2 de la Constitución de la República. Fundamenta su recurso en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.

III

### CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal [...] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo [...] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ukidia: “Los motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. [...]”. Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”: así también en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el

trabajo y su seguimiento, se ha establecido que: 2.- *Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: (a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.*” Es decir, que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.

#### IV

**4.1.- ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.-** Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de la Constitución de la República, que establece: *“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”*; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 048-11-SEP-CC, del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: *“Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales*

cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto. [...]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: “El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...”. (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación, la sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación y para hacerlo considera: **4.1.1.- ÚNICO CARGO.- CAUSAL TERCERA.-** Esta causal del artículo 3 de la Ley de Casación, tiene que ver con la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prueba en la apreciación de los hechos, a fin de que prevalezca la apreciación que debe hacerse de acuerdo a derecho y no a la que con criterio subjetivo, hiciera el tribunal, apartándose de la sana crítica, exigiendo para su configuración, la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Identificación del medio de prueba que a criterio del recurrente ha sido erróneamente valorado en la sentencia (confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial, dictamen de peritos o intérpretes, o cualquier otro medio de prueba permitido por la ley). 2. Determinación de la norma procesal sobre valoración de la prueba que a su criterio ha sido infringida. 3. Demostración, lógica jurídica del modo en que se produjo la violación; y, 4. Identificación de la norma sustantiva que se ha aplicado erróneamente o no se ha aplicado como resultado del yerro en el que se ha incurrido al realizar la valoración de la prueba. Con sustento en esta causal, la casacionista manifiesta lo siguiente: Que existe falta de aplicación de los artículos 173, 325 y 326 numeral 2 de la Constitución de la República, que han llevado a

la no aplicación de los artículos 4, 7 y 40 inciso segundo del Código del Trabajo; falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, específicamente de los artículos 115 y 207 del Código de Procedimiento Civil.- Que el artículo 115 ibídem, dispone valorar la prueba en su conjunto, y que sin embargo de aquello, los señores jueces no valoraron, así de la contestación a la demanda en el numeral 5 la demandada se excepcionó, hechos que no los demostró, al contrario las declaraciones de los testigos de conformidad con el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, las declaraciones no tienen validez, no dieron la razón de sus dichos, y que los señores jueces de alzada dan valor a esta prueba a pesar de haberseles advertido en su escrito de contestación y fundamentación de 18 de junio de 2014, a las 12h35, que a fs. 3, 4, 5; 33 a 35 y 253 a 255 se encuentra agregado el contrato de trabajo suscrito entre la trabajadora y la empresa demandada, en cuya cláusula segunda se le hace renunciar al pago de horas suplementarias y extraordinarias, y que en la cláusula tercera se le obliga a trabajar horas suplementarias y extraordinarias, como en efecto se lo hizo, no cancelándole por ser trabajadora de confianza; y que aun en ese supuesto los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de horas extraordinarias de los días sábados, domingos y feriados; por lo que al suscribirse un contrato en éstas condiciones se violaron derechos constitucionales de la trabajadora de conformidad con el artículo 40 inciso segundo del Código del Trabajo generan nulidad; que la verdad histórica de su horario de trabajo, se encuentra en el registro de entrada y salida de la mencionada compañía, habiendo solicitado en el escrito de prueba en el acápite IV que su empleadora exhiba la bitácora de control diario de trabajo, por mandato del juez de la causa debía haberla exhibido y dejado copias en autos el 15 de diciembre de 2011, cuestión que no lo hizo, sino que presenta únicamente roles de pago de fs. 37 a 169 de los autos de primera instancia, en la que se tiene solo el pago de sueldos, sujetándose al ilegal contrato de trabajo.- Que su ex empleadora no cumple los mandatos del juez a quo ni lo ordenado por el juez ad quem con fecha 28 de mayo de 2014, a las 16h10, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 612 del Código del Trabajo, el juez superior ordenó el cumplimiento de la prueba legalmente solicitada, sin embargo no dio cumplimiento pese a los dos requerimientos, lo que al tenor del artículo 581 inciso final del Código del Trabajo se tendrá como cierto. Añade la casacionista, que la demandada no ha demostrado que la trabajadora tomaba media jornada el día jueves cuando laboraba los días sábados, sino que sus testigos no dicen que tomaba media jornada sino que descansaba un día entre semana, contradiciendo lo afirmado por la defensa de la demandada que consta a fs. 21, en donde

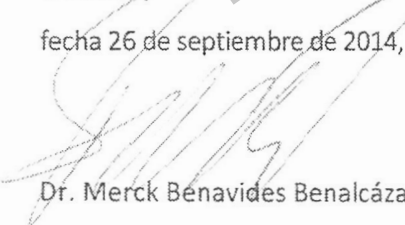


reconoce que trabajaba todos los días de la semana, pero que por el trabajo del día sábado laboraba media jornada del día jueves.- Que no se toma en consideración a la confesión ficta de la actora, concretamente las preguntas 1 y 6 del pliego de absoluciones en las que se le pregunta no haber trabajado horas suplementarias, de lunes a viernes de 09h00 a 18h00. Que a pesar de haberle requerido a la parte empleadora la exhibición de la bitácora; con la que irrefutablemente probaba haber trabajado de lunes a viernes todos los sábados, de 09h00 a 14h00, misma que era lógico no la iban a presentar, pero que el legislador para evitar éstas artimañas de los empleadores, en el inciso final del artículo 581 del Código del Trabajo, estableció: *“El (sic) caso que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia señalada por el Juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliera con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien solicita la diligencia”*, y que a pesar de aquello, no existe ningún pronunciamiento sobre este hecho, dándoles el hecho no midieron el derecho. En estos términos fija y limita la casacionista su recurso, por lo que corresponde a éste Tribunal de Casación en atención al principio dispositivo consagrado en el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República, y desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, pronunciarse de lo que es materia de casación, dado que al juzgador le está permitido actuar dentro de los límites fijados por la recurrente, estándole vedado interpretar extensivamente o modificar el recurso, y mucho menos actuar de oficio ya que este recurso es extraordinario, formal y limitado. 4.1.2.- Al respecto, este Tribunal de Casación, realiza las siguientes precisiones: a) El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, establece que: *“La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.”*, disposición legal en la que por una parte se impone a los jueces la obligatoriedad de valorar los medios probatorios incorporados al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica, mismas que tienen relación con el análisis lógico jurídico que realiza el juzgador, así como su experiencia y el conocimiento de la normativa jurídica aplicable al caso concreto; y, por otra parte, que la prueba sea vista como un todo, en aplicación del “principio de unidad de la prueba”, que en palabras de Jaime Azula Camacho, tiene importancia en la medida en que *“al juez le corresponde dar por establecidos los hechos en relación con los cuales exista armonía o concordancia entre los distintos medios probatorios”*. Más adelante el mismo autor señala: *“que la apreciación conjunta de la prueba*

consiste en la actividad intelectual que debe realizar el juzgador de instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, y a través de la cual llega al convencimiento homogéneo, sobre el cual habrá de edificar su fallo estimatorio o desestimatorio: que son ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones o el demandado sus defensas; o que no lo son” (AZULA CAMACHO, Jaime, (2008), “Manual de Derecho Procesal”, Tomo VI, Tercera edición, Editorial Temis S.A., Bogotá-Colombia, pág. 7). De esta manera, se faculta a los jueces a valorar la prueba con absoluta independencia, sin que aquello signifique incurrir en una valoración arbitraria, absurda o ilegal, en cuyo caso el Tribunal de Casación, habrá de examinar la prueba y verificar si respecto de aquella se ha violado o no las reglas de la sana crítica, caso contrario le está vedado a este Tribunal volver a valorar la prueba incorporada al proceso. b) Expuestas así las cosas, corresponde verificar si el criterio de valoración efectuado por los jueces de alzada en la sentencia impugnada, es susceptible de ser revisado en casación. Así tenemos que, el tribunal *ad quem* en el considerando QUINTO, denominado “ANÁLISIS DE LA SALA”, al referirse a la improcedencia del pago de las horas extraordinarias y suplementarias que aduce la casacionista tener derecho a recibir, argumenta: “[...] en la especie se puede constatar con la declaración de los testigos de la parte demandada que, si bien es cierto la actora trabajaba dos sábados rotativos al mes, no es menos cierto, que la empresa la compensaba con un día libre de su trabajo entre semana, siendo este el día jueves de las semanas que si laboraba los días sábados; quedando desvanecida toda pretensión para el cobro de horas extraordinarias; respecto a las horas suplementarias, la actora no las laboró puesto que así lo acepta en su demanda, al hacer constar que laboro de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 con una hora de descanso para el almuerzo; a su vez, se toma en cuenta la Confesión Judicial de la parte demandada; y, aún más, se considera el Acta de Finiquito, suscrita de manera libre y voluntaria entre las partes procesales, [...], en la cual la ex empleado acepta la cantidad de (6.913.26 dólares americanos), suma que asciende a la liquidación de sus haberes [...]”; es decir, que los jueces de alzada valoraron la prueba testimonial, misma que ha sido analizada a la luz de lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos concurran.”, pues las razones expuestas son coherentes, y se ajustan a lo previsto en la ley, en tanto los jueces gozan de libertad para apreciar este medio de prueba en relación con las otras pruebas actuadas en el proceso, en el

caso de la especie, los juzgadores en la sentencia impugnada, se refieren también al acta de finiquito suscrita por la trabajadora en la que de forma libre y voluntaria, acepta que con la liquidación recibida se da por satisfecha en todos sus haberes laborales, por lo que la accionante no ha logrado justificar el derecho a percibir el pago de horas extraordinarias en la forma que exige. En lo que respecta a la alegación de que su empleador en el contrato de trabajo en la cláusula segunda le hizo renunciar al pago de horas suplementarias y extraordinarias con el argumento de que se trata de un cargo de confianza, es necesario señalar que aun inclusive existiendo esta cláusula, la misma no le libera a la trabajadora de probar que ha laborado en jornada extraordinaria para su empleador. c) En lo atinente a las horas suplementarias, este Tribunal de Casación, no encuentra que el razonamiento efectuado por los jueces de alzada, en el sentido de que no procede el pago de este rubro sea absurdo, arbitrario o ilegal, toda vez que es la misma accionante quien al establecer los hechos en su demanda conforme así lo exponen el tribunal *ad quem*, señala que laboró de lunes a viernes de 09h00 a 18h00, con una hora para su almuerzo, es decir, que trabajaba ocho horas diarias, jornada laboral que se ajusta a lo previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo, que dice: “*La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. [...]*”, en consecuencia se desecha el cargo. d) Respecto al cuestionamiento que hace la casacionista, que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 581 inciso cuarto, que dispone: “*En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliera con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien solicita la diligencia.*”, ya que la demandada no ha exhibido la bitácora que le ha sido solicitada, se precisa lo siguiente: El tribunal *ad quem*, en uso de la potestad conferida en el artículo 612 del Código del Trabajo, que dispone: “*La Corte fallará por los méritos de lo actuado pero, de oficio, podrá ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos*”, en concordancia con lo prescrito en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la práctica de la prueba aludida, a la parte demandada, así se verifica del cuaderno de segunda instancia, de tal manera, que el tribunal *ad quem* en atención a la facultad conferida en el artículo 612 del


Código de Trabajo, otorgaron a la recurrente la posibilidad de obtener la referida prueba, sin embargo frente al hecho de que la entidad demandada informa al juzgador que la empresa no tiene la referida bitácora (prueba solicitada de oficio), ya que no lleva un control de trabajo a través de aquella; por lo que correspondía a los jueces como en efecto así lo hacen, fallar por el mérito de lo actuado. Por las consideraciones antes expuestas, al no haberse producido la vulneración de los artículos 115 y 207 del Código de Procedimiento Civil, tampoco se ha transgredido los artículos 4, 7, y 40 inciso segundo del Código del Trabajo; artículos 325 y 326 numeral 2 de la Constitución de la República, por lo que se desecha el cargo acusado. En tal virtud, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no casa la sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de fecha 26 de septiembre de 2014, a las 14h56. Notifíquese y devuélvase.-

  
Dr. Merck Benavides Benalcázar

JUEZ NACIONAL

  
Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo

JUEZA NACIONAL

  
Dra. Rosa Álvarez Ulloa

CONJUEZA NACIONAL

  
Certifico

Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

SECRETARIO RELATOR DE LA SALA DE LO LABORAL

DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

En Quito, miércoles nueve de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las doce horas y dieciocho minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: CHAVEZ MOREIRA CRISTINA ELIZABETH en la casilla No. 181 y correo electrónico yenan\_reyes@hotmail.com; oficinajuridicacampoverde@gmail.com. COMPAÑIA ONMILIFE DEL ECUADOR S.A. en el correo electrónico franklinapo@hotmail.com; LOOR COPPIANO GLANDYS ROSSANA, REPRESENTANTE LEGAL en el correo electrónico franklinapo@hotmail.com. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a

21 MAR 2018

SECRETARIO RELATOR

CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

R0143-2016 – Juicio Laboral N°. 1189-2014

**PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR**  
**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.-**  
**Quito, MIÉRCOLES de febrero de 2016; las 10h14**

**VISTOS:** Gabriela del Carmen Capelo Sanmartín presentó demanda en contra de Florencio Mauricio Jara Arévalo. El Juez Tercero de Trabajo del Azuay declaró parcialmente con lugar la demanda, de ésta el demandado propone recurso de apelación, mismo que es conocido y resuelto por la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Sala que reforma la sentencia recurrida reliquidando los valores a pagar; de la mencionada sentencia, emitida el 03 de julio de 2014, a las 10h00, el demandado interpone recurso de casación, mismo que es admitido mediante auto de 21 de febrero de 2015, las 9h15, emitido por los Conjueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

Encontrándose la causa en el estado de resolver, para hacerlo se considera.

**JURISDICCION Y COMPETENCIA**

El Consejo de la Judicatura aprueba la integración de la Corte Nacional de Justicia mediante Resolución No. 008 -2015 de fecha 22 de enero de 2015. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformativa del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículo 184.1 de la Constitución de la República y 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, así



como del sorteo que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Jueza Nacional y doctora Rosa Álvarez Ulloa, Conjueza Nacional, quien actúa en reemplazo del doctor Carlos Ramírez, de acuerdo al oficio No.106-SG-CNJ, de 1 de febrero de 2016.

## II

### **FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN**

El casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, han transgredido las siguientes normas de derecho: artículos 113, 114, 115, 122 y 273 del Código de Procedimiento Civil y artículo 592 del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en las causales tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

## III

### **CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN**

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal [...] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo [...] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogotá-

Colombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: *“Los motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. [...]”*. (La Casación Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, págs. 42-43). Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto tribunal de la justicia ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración.

#### IV

### ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS

**4.1 MOTIVACIÓN:** Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de la Constitución de la República, que establece: *“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”*; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como en los principios

generales del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 048-11-SEP-CC, del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: *“Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto. [...]”*. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: *“El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...”*. (Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de

analizar el recurso de casación, la sentencia impugnada y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación. En atención al orden lógico en que deben analizarse las causales, se comienza por analizar la causal segunda para proseguir con la primera de ser pertinente, y para hacerlo se considera:

**4.2 PRIMER CARGO.- CAUSAL CUARTA.-** La causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación expresa: “(...) 4. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis (...)” recoge los vicios de ultra y extra petita, así como los de citra petita o mínima petita; pues éstos implican incongruencia en la sentencia, resultante de la confrontación de la parte resolutive del fallo con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas. Esta incongruencia, que es un error in procedendo, puede ocurrir bajo los siguientes aspectos: a) cuando se ha otorgado más de lo pedido (plus o ultra petita); b) cuando se ha otorgado algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c) cuando se ha omitido resolver sobre algo pedido (citra petita).

**4.2.1.-** El recurrente al sustentar su recurso en la causal cuarta, señala que: “*El análisis de la documentación la Sala aduce que la relación laboral es con Jarev Cía. Ltda representada por Mauricio Jara Arévalo procediendo a resolver una situación que no fue motivo del litigio ya que se demandó a Mauricio Jara Arévalo como persona natural y no a la empresa Jarev Cía Ltda, inobservando lo dispuesto en el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil...La actora en su demanda consigno como fundamentos que en el MES DE MARZO DEL 2012 que supuestamente fue despedida por el señor Mauricio Jara Arévalo y sobre estos fundamentos se trabó la litis, más sucede que la Sala en su sentencia manda a pagar valores hasta el 22 de marzo del 2013???, resolviendo lo que nunca fue materia del juicio o de la litis, produciéndose como consecuencia la figura de la*

*extrapetita...La Sala al resolver lo que no fue materia del litigio o de lo que se trabó la litis al mandar a pagar de manera equivocada los valores de los meses de diciembre del 2012 y de enero al 22 de marzo del 2013, indica que de fojas 37 a la 42 existe depósitos realizados por la empresa JAREV CÍA LTDA y no Mauricio Jara Arévalo por el valor de (\$2.289,00), AL RESPECTO EN EL SUPUESTO CASO NO CONSENTIDO LA SALA, NO REALIZA LA SUMATORIA CORRECTA de los valores depositados en la Cuenta No. 3405640300 del Banco del Pichincha de la trabajadora por el tiempo no laborado ya que la cantidad correcta es el valor de (\$2.311,01) existiendo una diferencia de (\$588,99) de este valor por lógica se tendría que descontar los 7 días no laborados por su viaje al Perú del 29 al 31 de diciembre del 2012 y del 7 al 10 de febrero del 2013 a Panamá, la supuesta diferencia será de (\$402,31) y no (\$611,00) como consta en la sentencia... La Sala al resolver lo que no fue materia del litigio...manda a pagar de manera equivocada las remuneraciones adicionales, vacaciones y ropa de trabajo hasta el 22 de marzo del 2013"*

**4.2.2** La alegación del recurrente en base a la causal cuarta, se centra en un vicio de incongruencia extrapetita, lo cual significaría que el tribunal *ad quem* al dictar su sentencia, hubiese concedido "algo distinto de lo pedido"; para comprender de mejor manera esta alegación nos remitimos a lo explicado por la doctrina: "*Entre el fallo ultra petita y el extra petita, existe pues, un común denominador: en ambos el juez va más allá de lo pedido; pero en el caso de la ultra petita el exceso versa sobre algo que en menor cantidad se había solicitado en la demanda, en tanto que el fallo extra petita el exceso recae sobre un objeto no contemplado en la demanda... Adicionalmente a los motivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia por causa diferente a la invocada en ésta, o sea en la demanda*" (Hernán López Blanco, y Hernán Fabio; Instituciones de Derecho Procesal Civil Parte General, 7ª edición, Bogotá: Dupré Editores, 1997, p.582). El casacionista menciona que la actora en su demanda determinó que en el mes de marzo del 2012 fue despedida, y que sin



embargo los juzgadores de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay mandan a pagar valores hasta el 22 de marzo del 2013; al respecto cabe mencionar que los jueces del tribunal *ad quem*, al mandar a pagar los valores pertinentes toman en cuenta todo el contenido de la demanda, en la cual, la misma actora solicita rubros a pagar hasta el mes de mayo del año 2013, y a través de un debido análisis probatorio, llegan a determinar que: *“Se debe anotar que en el período de enero de 2009 a octubre de 2010, consta el reporte de afiliación, figurando como patrono la propia actora, y ABL PHARMA ECUADOR S.A. y solamente a partir de octubre de 2010 figura la empresa JAREV y la actora, como patronos, hasta el mes de marzo de 2013....Establecida la relación laboral, el tiempo de servicio y la remuneración, este Tribunal pasa a analizar los puntos reclamados por la actora, así en el 1.- Reclama diferencia salarial entre lo ganado y lo que realmente debía ganar como visitadora a médico, al respecto este rubro no se manda a pagar por cuanto en las Tablas Sectoriales del año 2013, el salario básico de los visitantes médicos es de \$350,00, y siendo que en el rol de pagos consta como \$800,00 el sueldo unificado, por consiguiente no se ha probado que exista diferencia salarial. En el numeral 2, la accionante reclama el pago de los salarios adeudados por los meses de noviembre, diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2013. De autos consta de fojas 11 a 36 los roles de pago desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2012, y de fojas 37 a 42, depósitos en la cuenta del Banco del Pichincha a nombre de DISMEDICA, por un valor total de dos mil doscientos ochenta y nueve, razón por la cual se le debe pagar la diferencia de \$611,00 dólares aplicando lo dispuesto en el Art. 94 del C. de Trabajo, esto es, con el triple de recargo...”* Es evidente entonces que la decisión de los jueces *ad quem*, respecto a las fechas de la relación laboral y los rubros a cancelarse, se encuentra debidamente motivada y dentro de lo solicitado en la demanda, y así lo ha fijado, de acuerdo a su facultad exclusiva de valoración de pruebas, aplicando en debida forma la normativa jurídica al caso concreto. Por lo expuesto, las pretensiones del casacionista, en base a la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, no proceden.



**4.3.- SEGUNDO CARGO.- CAUSAL TERCERA.-** La causal tercera, del artículo 3 de la Ley de Casación, procede por: *“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”*, tiene que ver con la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prueba en la apreciación de los hechos, a fin de que prevalezca la apreciación que debe hacerse de acuerdo a derecho y no a la que con criterio subjetivo, hiciera el tribunal.

**4.3.1** El recurrente con sustento en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, alega: *“...la Sala realiza un análisis incompleto solo al revisar y considerar únicamente el certificado migratorio que consta a fojas 88 del proceso que se prueba la salida y entrada al país del 7 al 10 de febrero de 2013 al Perú y Panamá y no la prueba aportada por mi parte consistente en el Informe de supervisión médica y certificaciones de los médicos de la Ciudad de Ambato en la que certifican que la actora no trabajó y visitó en los meses del año 2014, fechas en que supuestamente se encontraba trabajando. (fojas 56 a la 66) que esta es la causa y no aplica los artículos 113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil y Art. 592 del Código de Trabajo que contempla la reconversión laboral, cuyo efecto jurídico es el mandamiento del pago de las remuneraciones de los meses de diciembre del 2012 y enero a marzo del 2013 y la no aceptación de mi reconversión, por el hecho de no valorar la prueba actuada en su conjunto que conduce a la no aplicación de las normas antes mentadas...La Sala en su sentencia NO ANALIZA la prueba actuada por parte del demandado de conformidad al Art. 122 del Código de Procedimiento Civil que es la confesión judicial solicitada a la actora en la que comete el delito de perjurio al declarar las...preguntas y que se determina de manera clara que no laboró hasta el mes de*

*mayo del 2013... no se aplica los Art. 115 y 122 del Código de Procedimiento Civil...".*

**4.3.2** Al respecto, este Tribunal de Casación, considera pertinente hacer las siguientes consideraciones: Para que se configure la causal tercera, debe producirse lo que la doctrina denomina violación indirecta de la norma sustantiva, que exige la concurrencia de los siguientes requisitos: **a)** identificación del medio de prueba que a criterio del recurrente ha sido erróneamente valorado en la sentencia (confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial, dictamen de peritos o intérpretes, etc.) **b)** determinación de la norma procesal sobre valoración de la prueba que a su criterio ha sido infringida. **c)** demostración, lógica jurídica del modo en que se produjo el quebranto; y, **d)** identificación de la norma sustantiva que se ha aplicado erróneamente o no se ha aplicado como resultado del yerro en el que se ha incurrido al realizar la valoración de la prueba; pero mediante la fundamentación del recurso de casación, el recurrente no ha logrado demostrar tal vulneración, debido a que el tribunal *ad quem*, en su sentencia no excluye la valoración de pruebas, ni precedentes jurisprudenciales, realizando una valoración en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En su escrito de fundamentación del recurso, el recurrente alega que existe un análisis incompleto de las pruebas, por cuanto los juzgadores *ad quem*, no han valorado las pruebas que ha presentado, sin embargo en la sentencia recurrida, en sus considerandos Cuarto, Quinto y Sexto se hace un análisis prolijo de las pruebas, que le permiten arribar al juzgador de instancia a su acertada decisión, lo cual lo hace en base a las reglas de la sana crítica. Cabe anotar que este Tribunal de Casación no puede volver a valorar pruebas, aspecto que está vedado por disposición expresa de la ley.

Con relación a la supuesta falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, es necesario indicar que esta norma señala: *"La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin*

*perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.”; al respecto, éste Tribunal de Casación considera que la transcrita norma legal faculta explícitamente a los juzgadores a valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica; cabe compartir lo manifestado por el doctrinario Eduardo Couture, quien dice: “Este concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”. (Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Editorial B de F, cuarta edición – póstuma – 2002, pp. 221-222). En este punto es importante mencionar el criterio señalado por la Corte Suprema de Justicia, organismo que dijo: “Las reglas de la sana crítica no se halla consignadas en ningún precepto legal concreto y taxativo y por lo tanto, tal expresión no obliga a la Sala de instancia a seguir un criterio determinado” (GJS XVI No 4, p. 895). En el caso sub lite, el tribunal ad quem basa su resolución con argumentos sólidos, fundamentándola debidamente de acuerdo a los parámetros que exige la motivación, decidiendo en base a la valoración de*

las pruebas, según las reglas de la sana crítica, experiencia, formación y criterio judicial propio del juzgador.

Con relación a una supuesta vulneración de los artículos: 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, estas normas regulan la carga de la prueba; el artículo 122 ibídem define la confesión judicial, y el artículo 592 del Código del Trabajo, define la reconvención conexa; por tanto, evidentemente son normas que no constituyen preceptos jurídicos de valoración de la prueba, pues no contienen un mandato acerca de cómo valorarla, o al menos ciertos criterios, elementos, o parámetros de apreciación probatoria, que imponga a los juzgadores un determinado proceder respecto a tal valoración. Por lo expuesto, la pretensión del recurrente, fundamentada en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, no tiene asidero jurídico.

En tal virtud, este Tribunal de la Sala de lo Laboral, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no casa la sentencia emitida por los Jueces de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 03 de julio de 2014, a las 10h00. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese el valor de la caución a la parte actora.- Notifíquese y devuélvase.-

Dr. Merck Benavides Benalcázar

**JUEZ NACIONAL PONENTE**

Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo

**JUEZA NACIONAL**

Dra. Rosa Álvarez Ulloa Ruíz

**CONJUEZA NACIONAL**

**Certifico:**

Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

**SECRETARIO RELATOR**

En Quito, miércoles nueve de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las once horas y cincuenta y tres minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a CAPELO SANMARTIN GABRIELA DEL CARMEN en el correo electrónico mamemomho@hotmail.com. JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO en la casilla No. 3995 y correo electrónico marcelo.@hotmail.es. Certifico:

Unidad, Simplicidad, Paz  
Eficiencia, Integridad, Responsabilidad

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

ARIASA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a 21 MAR 2019

SECRETARIO RELATOR

CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

R 0144-2016 - Juicio Laboral N°. 2022-2014

**PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR****CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.-****Quito, miércoles 9 de marzo de 2016, las 09h00.**

**VISTOS:** La parte actora, Ana Lucía Falcones Mera, presenta demanda en contra del Ministerio de Educación, a través de su representante legal, así como en contra del Estado Ecuatoriano representado por la Procuraduría General del Estado, a través de su representante legal; la Jueza del Juzgado Primero del Trabajo de Manabí, declaró parcialmente con lugar a la demanda, por lo que la actora y la Procuraduría General del Estado propusieron recurso de apelación, mismo que fue conocido y resuelto por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante sentencia de 29 de julio de 2014, las 16h01; rechazando los recursos de apelación interpuestos, y confirma la sentencia recurrida. La actora, demandada y Procuraduría General del Estado interponen recursos de casación, aceptándose a trámite únicamente el presentado por la parte actora, mediante auto de 21 de septiembre de 2015, las 8h54, emitido por la Sala de Conjuces de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

#### **JURISDICCION Y COMPETENCIA**

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículo 184.1 de la Constitución de la Republica y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente. Este



Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: Doctor Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Jueza Nacional, y doctora Rosa Álvarez Ulloa, Conjueza Nacional, quien actúa en reemplazo del doctor Carlos Ramírez, de acuerdo al oficio No.106-SG-CNJ, de 1 de febrero de 2016.

## II

### FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, han transgredido las siguientes normas de derecho: artículos 424, 425 y 326.3 de la Constitución de la República; artículo 7 del Código del Trabajo; inciso segundo del artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 . Fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.

## III

### CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal [...] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo [...] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales immanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 13.). Por su

parte, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: *“Los motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. [...]”*. Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, al referirse al derecho al trabajo dispone: *“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual influye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico- profesional, particularmente aquellos designados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”*. De tal manera, que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.

## IV

## ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS

**4.1.- MOTIVACIÓN:** Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal I) de la Constitución de la República, que establece: *“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”*; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 048-11-SEP-CC, del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: *“Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto. [...]”*. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: *“El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la*

*conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...".* (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación, la sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación, y considera:

**4.2.- ÚNICO CARGO.- CAUSAL PRIMERA.-** Esta causal procede por: *"Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva"*, de producirse aquello, la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva, formándose un *error de juicio*, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. El jurista colombiano Humberto Murcia Ballén, respecto de la violación directa de la norma, señala: *"Como lo anticipamos, la violación directa de la norma sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin consideración a la prueba de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la existencia, validez y alcance del precepto legal que trascienden a la parte resolutive del fallo..."*. (Recurso de Casación Civil, sexta edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.).

**4.2.1** Con cargo a esta causal la casacionista manifiesta: *"Los señores Jueces de la Sala al*

*emitir la Sentencia realizan una interpretación equivocada de la pretensión...manifiestan que el derecho debatido en el proceso es el alcance del primero y segundo inciso del Art. 8 del mandato constituyente No. 2... y se refieren a las indemnizaciones laborales que por su naturaleza, dicen los jueces en su sentencia es concebida como una forma de castigar al empleador o patrono que estando en la obligación de respetar la estabilidad laboral del trabajador no la respetan, los señores jueces confunden la violación a la estabilidad que en derecho laboral se la conoce como DESPIDO INTEMPESTIVO y por lo cual existe una sanción, con un DERECHO DEL TRABAJADOR DEL SECTOR PÚBLICO, cuando se retira para acogerse a la jubilación, esto es, de percibir una bonificación o indemnización, así lo recoge el MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 en su Art. 8, cuyo inciso primero lo regula la LOSEP y es aplicable para los servidores sujetos a la Ley de Servicio Público y el inciso segundo que lo regula la Contratación Colectiva, donde exista, o en su defecto la aplicación directa de la norma que imperativamente manda a pagar 7 Salarios Básicos Unificados del Trabajador en General, hasta un monto máximo de 210 Salarios, y aclara que esta indemnización o bonificación será por CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, por lo tanto los señores Jueces omiten aplicar en la sentencia normas esenciales para determinar el derecho , como por ejemplo lo establecido en el Art. 424 de la Constitución...y Art. 425 Ibídem...el numeral 3 del Art. 326 de la Constitución y Art. 7 del Código del Trabajo...es innegable que lo dispuesto en el MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 le beneficia más a la trabajadora y por tener categoría de Ley Orgánica, está por encima jerárquicamente hablando de un Acuerdo emitido por la SENRES, por lo que, los Jueces de la Sala debieron aplicarla, así como hicieron para determinar la relación laboral y conceder el derecho a la jubilación patronal, aplicar los Artículos 424 y 425 de la Constitución; el numeral 3 del artículo 326 de la Constitución y Art. 7 del Código del Trabajo y el inciso segundo del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2."*

**4.2.2** Para resolver el caso *sub lite*, es necesario tener claro la naturaleza del Mandato Constituyente N° 02; el cual es denominado Mandato de Remuneración Máxima en el

Sector Público, mismo que fue dictado con el fin de contribuir a erradicar los privilegios remunerativos y salariales, eliminando las distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas que se pagaban en algunas entidades públicas, lo cual atentaba contra el derecho de igualdad. En el caso *sub lite*, la actora se acoge a la renuncia voluntaria, con el fin de beneficiarse de la compensación correspondiente, al ser aceptada su renuncia, la institución ahora demandada le cancela el valor total de 15.360,00 US dólares, dentro de los topes permitidos por el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, para el pago de dicho rubro, lo cual se lo ha hecho respetando los derechos que le asisten a la hoy casacionista, observando en debida forma la naturaleza de la existencia del mencionado mandato, el cual pone límites al pago excesivo a quienes se acogen a la jubilación, sin que este cree nuevos derechos o incremente los montos a recibir, por lo que no cabe obligación adicional por derecho alguno que se relacione con la terminación de la relación laboral; consecuentemente bien ha hecho el tribunal *ad quem* al aplicarlo a la luz de la razón de su creación, citando en debida forma sentencias en las cuales este Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, ya se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, es necesario mencionar que si bien el Tribunal *ad quem*, al emitir su decisión lo hace de manera correcta, al no mandar a pagar cantidades adicionales, es oportuno indicar que no es correcta la afirmación del tribunal *ad quem*, al afirmar que la actora se encuentra inmersa en el inciso primero del artículo 8 del mencionado mandato, mismo que es aplicable a los servidores públicos, disponiendo: *“El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Para el efecto, las instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de renunciaciones a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las programaciones presupuestarias*



*correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso.”; pues en el presente caso los topes son fijados por el inciso segundo del artículo 8 del Mandato Constituyente N° 2, mismo que dice: “Las autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de los trabajadores. Salvo en el caso de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total.”, siendo este inciso el aplicable a los obreros y obreras del sector público que por sus funciones se encuentran sujetos al ámbito del derecho del trabajo, como ocurre en el caso sub lite, pues la accionante se ha desempeñado en el cargo de “conserje”, actividad propia de una obrera amparada por el Código del Trabajo, tomando en consideración el principio de primacía de la realidad que advierte: “La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento...En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y es esta y no aquel acuerdo lo que determina su existencia”. Américo Pla Rodríguez, reafirma lo dicho al sostener que en materia laboral, han de prevalecer los hechos por sobre los acuerdos formales (DE LA CUEVA Mario, *Derecho mexicano del trabajo*, 2ª ed., México, 1943, p. 314, en Américo Pla Rodríguez, “Los Principios del Derecho del Trabajo”). No obstante, los Mandatos Constituyentes no generan derechos; toda vez que, el Mandato*

Constituyente N° 2, establece límites o techos máximos para evitar las desviaciones injustificadas del sistema remunerativo, recalcando que no modifica los contratos colectivos o convenios existentes, en tanto estos no superen dichos límites. La Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional, y de administración de justicia en esa materia, conforme lo dispone el artículo 429 de la Constitución de la República, en la sentencia 004-10-SAN-CC, de 9 de diciembre de 2010 (R.O.S. 370 de 25 de enero de 2011), caso N° 0069-09-AN, respecto del alcance del artículo 8 del Mandato Constituyente N° 02, señaló: *“El primer inciso del artículo 8 del Mandato N° 2 estatuye: “[...] Una lectura superficial de la norma en estudio podría llevar a concluir que el Mandato establece un monto indemnizatorio único por año de servicio para quienes se separen de una entidad pública, por supresión de partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario para efectos de jubilación, esto es, 7 salarios mínimos unificados correspondientes al trabajador privado; sin embargo, si se observa bien, la norma contiene en dos apartes la preposición “hasta”, que relaciona los números 7 y 210 (referidos a salarios mínimos básicos unificados), denotando límites para determinar precisamente valores máximos, tanto en las cantidades anuales como en el monto total a percibir por estos conceptos, por lo que se concluye la posibilidad de percibir cantidades menores y nunca mayores a las previstas. Es necesario tomar en cuenta el Mandato N° 4 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente el 12 de febrero del 2008, el mismo que en su cuarta consideración establece: “Que, el Mandato Constituyente No. 2 no altera las normas ya existentes para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones, excepto en aquellas que exceden los montos máximos fijados en el artículo 8 del referido mandato”; en consecuencia, los montos indemnizatorios existentes a la fecha de emisión del Mandato N° 2 continuaban vigentes, en tanto que aquellos que superaban los límites máximos previstos en el mencionado instrumento, se modificaban de acuerdo a los límites máximos previstos en el mencionado instrumento, se modificaban de acuerdo a los límites máximos en él preceptuados. A esta conclusión se llega tanto por el contenido de la disposición pertinente como porque el Mandato no contiene norma de expresa sustitución o de derogación alguna de*

disposiciones legales o de otra naturaleza sobre liquidaciones o indemnizaciones en la materia y, en virtud de la Primera Disposición Final del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en el sentido de que el ordenamiento jurídico se mantiene vigente, con la excepción de lo que resuelva en sentido contrario la Asamblea. Consecuentemente al tratarse de renuncia voluntaria para acogerse a los beneficios de la jubilación voluntaria, y al haberse reunido los presupuestos necesarios para tal efecto, así se ha procedido y la actora recibió los rubros pertinentes, como bien lo deja expresado el tribunal *ad quem*, por lo tanto no existe vulneración de las demás normas jurídicas alegadas por la casacionista, artículos 424, 425 y 326.3 de la Constitución de la República; artículo 7 del Código del Trabajo, referentes a la jerarquía constitucional, al respectivo orden jerárquico de las normas jurídicas, y a la aplicación más favorable de las mismas al trabajador, pues la tutela de los derechos de la trabajadora se ha realizado en observancia al principio de igualdad, y al amparo de uno de los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado a la aplicación de la normativa jurídica nacional e internacional laboral en pro de la justicia social (*Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, disponible en: <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/download/constitution.pdf>*); en tal virtud las alegaciones de la recurrente no prosperan, por no tener ningún asidero jurídico.

Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Laboral, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, en los términos de este fallo, **no casa** la sentencia emitida por los Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, el 29 de julio de 2014, a las 16h01.- Notifíquese y devuélvase.-

Dr. Merck Benavides Benalcázar

**JUEZ NACIONAL**

Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo

**JUEZ NACIONAL**

Dra. Rosa Álvarez Ulloa

**CONJUEZA NACIONAL**

CERTIFICO:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

En Quito, miércoles nueve de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: FALCONES MERA ANA LUCIA en la casilla No. 3003 y correo electrónico felix.faam@yahoo.com; felix.alcivar13@foroabogados.ec del Dr./Ab. ALCIVAR MERA FELIX ANDRES. MINISTERIO DE EDUCACION en la casilla No. 640 y correo electrónico merlusca35@hotmail.com; distritaljuridico3@hotmail.com del Dr./Ab. SANCHEZ VERA MERLIS KATIUSKA; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

**RAZON:** En doscientas cuarenta y cinco fojas útiles se devolvió de oficio al Secretario (a) Relator (a) de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí las actuaciones de la presente causa, incluyendo tres fojas de la Ejecutoria Suprema.

Quito, 16 de marzo de 2016.

Dr. Segundo Ulloa Tapia

Secretario Relator (E)

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL  
ES EL CORP DE SU ORIGINAL

Quito, a

21 MAR 2016

SECRETARIO RELATOR

R0146 - 2016

**Juicio No. 2518-2015**

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. - SALA DE LO LABORAL.** Quito, jueves 10 de marzo del 2016, las 09h54. VISTOS: Cristian Paúl Mayorga Triviño, comparece a fs.1 y manifiesta que prestó sus servicios lícitos y personales en la empresa ALMAKRO S.A., la que figura hoy como la principal dentro del sin número de empresas que el señor Luis Fernando Miranda Alcívar ha creado y repartido entre todos sus hijos, familiares y allegados con el objeto de separar a los trabajadores de aquellos, tratando de violentar la conformación de organismos sindicales, pese a ser todas estas (FEDERATED STORES S.A.; CORIURT S.A.; PORTELECOP S.A.; ALMAKRO S.A.; COSTCO S.A. entre otras), empresas de papel, cuyo domicilio, representantes legales, teléfonos, lugar de funcionamiento y giro social son los mismos entre sí.- Que, laboró desde el 1 de enero de 2004 para la Compañía ALMAKRO S.A., en el horario y con la remuneración que señala; que percibió el sueldo básico de USD 320 sin haber percibido horas extraordinarias ni recargos de ley; y que, la mencionada empresa se encontraba en mora en el pago de sus obligaciones patronales, por lo que presentó una denuncia el 29 de marzo de 2011. Que, el 24 de febrero de 2011 el actor y los trabajadores de la demandada conformaron el Comité Especial de Trabajadores de ALMAKRO S.A., presentando el pliego de peticiones y conflicto colectivo de trabajo. Que, entre el 8 y 11 de febrero de 2011 el Ab. Jaime Flores Proaño, dentro del juicio coactivo No 008-2011 UCEDEP en contra de ALMAKRO S. A. en su calidad de Juez de Coactivas de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del FIDEICOMISO ACD-CFN NO MAS IMPUNIDAD “UGEDEP” antes AGD, nombra a la Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga en calidad de Administradora y Depositaria Judicial de todos los bienes muebles y enseres para proceder al inventario y posterior embargo y retiro de mercaderías de ALMAKRO S.A., posesionándose físicamente en su lugar de trabajo y tomando el control y administración tanto de la empresa como el control laboral; que la mencionada funcionaria procedió a retirarles las llaves del local, cerrar la empresa al público y a controlar la entrada y salida del personal con guardias privados; que también les indicó que no se preocupen que se respetaría su estabilidad laboral, pero que desde ese día la UGEDEP asumía el control de la empresa. Que, mediante Resolución No 006-UGEDEP-2011 expedida el 21 de enero de 2011 la UGEDEP declaró de real propiedad el inmueble donde funciona la empresa, los locales comerciales uno A y uno B del centro comercial donde funciona ALMAKRO S.A., inscribiéndose con fecha 11 de febrero de 2011 en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayas, es decir que la UGEDEP pasó a administrar el negocio, muebles e inmuebles de su patrono ALMAKRO S.A.; que sin embargo de lo manifestado, al intentar cobrar la quincena del

mes de febrero la Ing. Ortiz les indicó que debían cobrarle al señor Fernando Miranda Alcívar; razón por la que constituyeron tres organismos Sindicales: Comité Especial de Trabajadores de ALMAKRO S.A. (24 febrero 2011); Comité de Empresa de los Empleados y Obreros de ALMAKRO S.A., (24 marzo 2011) y el Sindicato de Empleados y Obreros de ALMAKRO S.A., Empresas vinculadas anexas de los señores Miranda (24 marzo 2011). Que, una vez constituidos en Comité Especial de conformidad con lo establecido en el Art. 497.7 del Código del Trabajo se declararon en huelga ipso facto; y pese a que presentaron una medida cautelar constitucional se violaron sus derechos consagrados en la Constitución. Que, el lunes 11 de abril de 2011 la Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga en su calidad de Administradora y Depositaria Judicial de ALMAKRO S.A. al tratar de ingresar a su puesto de trabajo a eso de las 09h00 aproximadamente se encontraron que los guardias de seguridad por orden de la mencionada funcionaria les impidió por la fuerza el ingreso a sus lugares de trabajo hecho que dice haber sido constatado por el Ab. Víctor Zamora Olmedo, en inspección realizada por la Inspectoría de Trabajo. Que, con los antecedentes expuestos, fundados en las disposiciones constitucionales y legales que cita, demanda en juicio de trabajo, cuyo procedimiento es oral a sus ex patronos la empresa ALMAKRO S.A., en la persona de sus representantes legales y administradores: Luis Fernando Miranda Alcívar, Fernando Andrés Miranda Decker, Jonathan Paúl Miranda Decker, y solidariamente al tenor de los arts. 36, 41 y 171 del Código del Trabajo a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del FIDEICOMISO ACD-CFN NO MAS IMPUNIDAD “UGEDEP” (antes AGD) en la persona de su representante legal Pedro Delgado Campaña, y a la Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga, en su calidad de Administradora y Depositaria Judicial de la UGEDEP, por los derechos que representan y por sus propios derechos, para que en sentencia se los condene al pago de los rubros que determina.- La demanda que antecede se ha presentado en la Corte Provincial del Guayas; luego del sorteo de Ley, recae la competencia en el Juzgado Séptimo de Trabajo del Guayas.- Mediante auto de 7 de junio de 2012 a las 15h43 el Juez Séptimo de Trabajo del Guayas, avoca conocimiento de la causa y dispone citar a los demandados; citaciones que se practican como obra de autos; así como la citación al Procurador General del Estado.- Ante la petición del actor, quien declara bajo juramento que desconoce el domicilio de los demandados, Fernando Andrés Miranda Decker, Jonathan Paúl Miranda Decker e Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga y la imposibilidad de determinar su domicilio, mediante tres publicaciones se cita por la prensa a los mencionados demandados (fs. 28 a 30).- Comparecen la Dra. Patricia Salazar Ulloa, en calidad de delegada del Procurador Judicial del señor Pedro Delgado Campaña, en calidad de representante legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de



Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, UGEDEP, como justifica con la procuración judicial que adjunta y posteriormente en la misma calidad el Dr. Jorge Patricio Carrillo Zurita. A fs.83 comparece el Director Regional de la Procuraduría General del Estado.- Citados los demandados se realiza la audiencia preliminar en los términos que constan en el acta respectiva y posteriormente la audiencia definitiva en la que se evacúan las pruebas solicitadas por las partes. Concluido el trámite el Juez de Origen dicta el auto inhibitorio de 30 de julio de 2014 a las 12h45 (fs.252 a 253), disponiendo que se remita el proceso a una de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia en razón del fuero; radicándose la competencia por mandato legal en la Presidencia de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia para sustanciar la causa a partir del momento procesal en que se produjo la inhibición.- Encontrándose el proceso en estado de resolver, se manifiesta: PRIMERO.- Se ha dado este juicio el trámite previsto en el Art. 575 del Código del Trabajo, no habiéndose omitido solemnidad sustancial alguna ni violado el trámite por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO.- La Disposición Transitoria Décima Quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone entre otros que el representante legal del Fideicomiso ACD-CFN NO MAS IMPUNIDAD (ex AGD) gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resolución publicada en el R.O. No.517 de 8 de junio de 2015, resolvió que: “Gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia quienes cumplan las funciones establecidas en el inciso primero de la Décimo Quinta Disposición Transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por los actos, decisiones y resoluciones que hayan adoptado en el ejercicio de sus funciones a partir del 1 de enero de 2010, únicamente en las materias: penal, civil, mercantil y de trabajo”; de modo que el demandado Pedro Delgado Campaña, en su calidad de representante legal de esta entidad, goza de fuero de Corte Nacional y por lo mismo los demás demandados en aplicación del Art. 168.2 del Código Orgánico de la Función Judicial; por lo que, la competencia de la primera instancia de la causa al tenor de la disposición del artículo 195.1 ibídem, se radica en la Presidencia de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia.- TERCERO.- El actor expresa en su demanda que prestó sus servicios lícitos y personales en la empresa ALMAKRO S.A., representadas por los demandados, Luis Fernando Miranda Alcívar, Fernando Andrés Miranda Decker, Jonathan Paúl Miranda Decker; la Litis respecto a los mencionados demandados se trabó ante su rebeldía con la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda al tenor de la disposición del Art. 580 del Código del Trabajo; por lo que correspondía al actor justificar sus afirmaciones de conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil. Revisadas las pruebas actuadas la existencia de la relación laboral

entre el actor y ALMAKRO S.A., se desprende del certificado de fs. 98, mismo que no ha sido impugnado y de las confesiones fictas de los demandados, cuyas respuestas al pliego de preguntas formuladas por el actor al tenor de la disposición del inciso último del Art. 581 del Código del Trabajo han de tomarse como afirmativas; así como de la prueba testimonial aportada; testigos que si bien han iniciado juicios similares, como admiten, son quienes dan cuenta de la existencia de la relación laboral. Sobre la idoneidad de los testigos compañeros de trabajo del trabajador; la ex Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto a que "... Son los compañeros del trabajador que reclama sus derechos los testigos, que, de mejor modo, pueden ayudar al juez a esclarecer un punto cualquiera que se indague en la controversia; esta clase de testigos, se denominan en la doctrina, necesarios o inexorables, y no les afecta tacha alguna, pues sin su testimonio, los altos intereses de la justicia quedarían burlados ..." .- Gaceta Judicial Año LXXXI Serie XIII No.12 p.2777; criterio que la suscrita Jueza comparte y lo ha emitido en varios fallos.- En lo que respecta a la solidaridad de los demandados, representante legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del FIDEICOMISO ACD –CFN No más Impunidad "UGEDEP", Pedro Delgado Campaña e Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga, Administradora y Depositaria Judicial de la UGEDEP, alegada por el actor en su demanda, se manifiesta que, no se ha demostrado que hubieren ejercido funciones de representantes del empleador para que se encuentren inmersos en la disposición del Art. 36 del Código del Trabajo que invoca la accionante; o que al tenor del Art. 41 ibídem hubieren tenido la calidad de empleadores del actor y por lo mismo este hubiere trabajado para dos empleadores. El Art. 171 del Código del Trabajo en el que se fundamenta el actor para dirigir su acción solidariamente en contra de los citados demandados, señala: "En caso de cesión o de enajenación de la empresa o negocio o cualquier otra modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará obligado a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En el caso de que el trabajador opte por continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones"; en el caso de la especie, el Juzgado de Coactivas de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad "UGEDEP", en el juicio de coactiva No.008-11-UGEDEP, dicta el auto de 7 de febrero de 2011 a las 14h30, en el que dispone a la Compañía ALMAKRO S.A. el pago de la cantidad de USD 20,783.452 más el 10% en concepto de costas judiciales; y varias medidas cautelares entre otras: "3) La prohibición de venta y enajenación de bienes inmuebles registrados a nombre de la Compañía ALMAKRO S.A. y del señor JOSE MANUEL PEREZ BOLAÑOS ...; 4) el secuestro de todos los bienes muebles y enseres, así como todo el inventario de mercancías, mercaderías; y , la retención de los dineros en efectivo, que se encuentren

dentro de la propiedad ubicada en el local Uno – B, de la Planta baja del Conjunto Comercial “ALBAN BORJA, ...” (fs. 113 a 114). En el juicio coactivo en referencia, mediante providencia de 10 de febrero de 2011 a las 09H35 se designa Depositaria Judicial y Administradora de “todos los bienes muebles y enseres, así como todo el inventario de mercancías, mercaderías secuestrados; y, de los dineros retenidos, a la Ingeniera Comercial María Tamara Ortiz Luzuriaga, quien estando presente acepta el cargo y jura desempeñarlo fiel y legalmente ...”; entonces, la entidad demandada, interviene en la Compañía ALMAKRO S.A., cumpliendo el proceso de ejecución de la acción coactiva iniciada en su contra; es decir en calidad de acreedora de dicha compañía; el propio actor en su demanda, manifiesta que, la Depositaria Judicial y Administradora accionada, procedió al inventario y retiro de mercaderías de la compañía; de modo que es evidente que el actor no continuó ejerciendo sus funciones. Del análisis efectuado se concluye que la relación laboral se desarrolló entre el actor y la Compañía ALMAKRO S.A.; y que la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD “UGEDEP”, no ejerció funciones de administración del negocio; sino que intervino en calidad de acreedora de ALMAKRO S.A., en el juicio coactivo incoado en su contra para recuperar obligaciones pendientes de pago.- CUARTO.- La relación laboral entre el actor y su empleadora ALMAKRO S.A., termina con la intervención de la UGEDEP, al ejecutar las medidas cautelares ordenadas en el juicio coactivo No.008-2011-UGEDEP; por tanto se produjo un despido indirecto por parte de la compañía empleadora.- Humberto Villasmil Prieto argumenta que cualquier manifestación voluntaria del empleador de dar por terminada la relación de trabajo, aun de manera no expresa, imposibilita que la continuidad del vínculo laboral pueda operar. (Prieto, Humberto Villasmil. Estudios de derecho del trabajo. Universidad Católica Andrés Bello, 2005). Al respecto, Francisco de Ferrari citando a Rafael Caldera, en el segundo volumen de su obra titulada “Derecho del Trabajo”, página 371, dice, que el despido indirecto existe por cuanto “la conducta seguida revela en el patrono un propósito de salir por vía sinuosa del trabajador o por lo menos, poner a éste en caso de retirarse del servicio.” (Gaceta Judicial 14 de 27-abr-2004). En síntesis, la configuración del despido no se realiza necesariamente a través de un acto unilateral y arbitrario por parte del empleador, también hay casos, que corresponde a todas las situaciones en las cuales por un comportamiento del empleador, el trabajador se considera en situación de despido (Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2388). En el caso en estudio, por las circunstancias en las que se ha encontrado el empleador; el trabajador se ha visto impedido de continuar ejerciendo sus labores; es decir se ha producido una terminación de la relación laboral forzosa, lo que equivale a un despido intempestivo indirecto; cabe señalar que el Acta de Investigación

de la Inspección de Trabajo del Guayas (fs. 169), no hace sino expresar que el Inspector que la suscribe a petición de Cristian Paúl Mayorga Triviño, hoy actor ha constatado que el almacén “ALMAKRO S.A.”, se encuentra con candados y custodiado por guardias de la empresa de Seguridad “IC Servicios de Seguridad Privada del Ecuador ICSSE Cía. Ltda.”; quienes le han informado que los trabajadores de la empresa están impedidos de ingresar hasta nueva orden; y que ha observado a través de las vitrinas del almacén que no existe mercadería; aseveración que corrobora el hecho de que el trabajador no continuó laborando en su calidad de Ayudante de Bodega. De lo analizado se concluye que la relación laboral entre el actor y su empleadora ALMAKRO S.A.; terminó unilateralmente al haberse privado al trabajador por las razones ya expuestas de continuar con su actividad laboral; pues es obvio que el empleador estaba enterado de las medidas cautelares ordenadas en su contra, por lo que deberá pagar al actor: a) La indemnización prevista en el Art. 188 del Código del Trabajo; b) La bonificación a la que se refiere el Art. 185 ibídem.- QUINTO.- Probada la relación laboral entre ALMAKRO S.A., y el actor, correspondía a la empleadora justificar que ha cumplido con el pago de las obligaciones patronales previstas en el Art. 42.1 del Código del Trabajo; al no hacerlo, se ordena que pague al actor: a) Décimos tercero y cuarto sueldos correspondientes al año 2011; b) Vacaciones, correspondientes a los períodos 2008 a 2011.- SEXTO.- Se niega el pago de los siguientes rubros: a) La indemnización prevista en los Arts. 187 y 455 del Código del Trabajo, porque la conformación del Comité Especial de Trabajadores de ALMAKRO S.A.; del Comité de Empresa de empleados y obreros de ALMAKRO S.A. y del Sindicato de Empleados y Obreros de ALMAKRO S.A. y empresas Vinculadas y Anexas, como afirma el actor y como consta del proceso, se constituye el 24 de febrero de 2011; es decir con fecha posterior a la terminación de la relación laboral; b) La estabilidad a la que se refiere el Art. 172.6 del Código del Trabajo; pues la denuncia por falta de afiliación se presenta el 29 de marzo de 2011; esto es con fecha posterior a la terminación de la relación laboral.; c) La remuneración correspondiente a los meses de marzo y abril de 2011; porque como ya se analizó el actor laboró para ALMAKRO S.A. hasta la fecha en que la UGEDEP ejecutó las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Coactivas.- SEPTIMO.- En cumplimiento de la Resolución de la entonces Corte Suprema de Justicia, publicada en el R.O. No 138 de 1 de marzo de 1999 se procede a cuantificar los rubros que se ordena pagar.- Se toma como tiempo de servicios desde el 1 de enero de 2004, como afirma el actor en su Juramento Deferido hasta el 7 de febrero de 2011, fecha de intervención de la Compañía y como remuneración percibida USD 320, según el Juramento Deferido del actor: Despido intempestivo: a) Art. 188 CT = USD 2,240; b) Art. 185 CT = 480; Total = USD 2,720.- Haberes: a) Décimo tercer sueldo: dic/10 a

7 feb/11 = USD 58,73.- Décimo cuarto sueldo: sept/10 a 7 feb/11 = USD 113,55; c) Vacaciones: enero/08 a 7 feb/11 = USD .496,21; Total = USD 668,49.- Total General = USD 3,388.49.- En virtud de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LA LEY, se acepta parcialmente la demanda y se ordena que la Compañía ALMAKRO S.A., en las personas de: sus representantes legales y administradores: Luis Fernando Miranda Aleívar, Fernando Andrés Miranda Decker y Jonathan Paúl Miranda Decker, por los derechos que representan y por sus propios y personales derechos, paguen al actor la cantidad de TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 3,388.49), valor al que ascienden los rubros que se ordena pagar. En la etapa de ejecución se calculará los intereses a los que se refiere el Art. 614 del Código del Trabajo en los rubros que los generan.- Con costas se regula los honorarios del abogado del actor en el 5% del valor que se ordena pagar.- Por las consideraciones que se precisan se desecha la demanda en contra de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del FIDEICOMISO ACD-CFN NO MAS IMPUNIDAD "UGEDEP" (antes AGD) en la persona de su representante legal, Pedro Delgado Campaña, y de la Ing. María Tamara Ortiz Luzuriaga, en su calidad de Administradora y Depositaria Judicial de la UGEDEP.- NOTIFIQUESE.-

  
DRA. PAULINA AGUIRRE SUAREZ  
JUEZA NACIONAL

Certifico:

  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

En Quito, jueves diez de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las diez horas y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: ALMAKRO S.A. en el correo electrónico [enrique.mariduena@hotmail.com](mailto:enrique.mariduena@hotmail.com); [jsanchez@ugede.gob.ec](mailto:jsanchez@ugede.gob.ec); DELGADO CAMPAÑA PEDRO, REPRESENTANTE LEGAL UGEDEP en el correo electrónico [casillerojudicial@ugedep.gob.ec](mailto:casillerojudicial@ugedep.gob.ec);



enrique.mariduenaa@hotmail.com;jsanchez@ugede.gob.ec; MIRANDA ALCIVAR  
LUIS FERNANDO, REPRESENTANTE LEGAL en el correo electrónico  
enrique.mariduenaa@hotmail.com;jsanchez@ugede.gob.ec; MIRANDA DECKER  
FERNANDO ANDRES, ADMINISTRADOR en el correo electrónico  
enrique.mariduenaa@hotmail.com;jsanchez@ugede.gob.ec; ORTIZ LUZURIAGA  
MARIA TAMARA, ADMINISTRADORA Y DEPOSITARIA JUDICIAL DE LA  
UGEDEP en el correo electrónico  
enrique.mariduenaa@hotmail.com;jsanchez@ugede.gob.ec; PROCURADURIA  
GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200; UNIDAD DE GESTION Y  
EJECUCIÓN DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS  
IMPUNIDAD - UGEDEP en el correo electrónico  
enrique.mariduenaa@hotmail.com;jsanchez@ugede.gob.ec. No se notifica a  
MAYORGA TRIVIÑO CRISTIAN PAUL por no haber señalado casilla y/o correo  
electrónico. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

AGUIRREP

**RAZON:** En doscientas cincuenta y siete fojas útiles se devolvió de oficio al  
Secretario (a) Relator (a) de la Unidad Judicial de Florida de Trabajo con sede en el  
cantón Guayaquil las actuaciones de la presente causa, incluyendo tres fojas de la  
Ejecutoria Suprema.

Quito, 16 de marzo de 2016.

Dr. Segundo Ulloa Tapia

Secretario Relator (E)

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a 21 MAR 2016  
SECRETARIO RELATOR



R0148 - 2016

**JUICIO No. 1429-12****JUEZA PONENTE:** Dra. Paulina Aguirre Suárez**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL**

Quito, viernes 11 de marzo de 2016, las 14h00

**VISTOS:** En el juicio laboral seguido por Francisco Javier Fuentes Cunalata en contra de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELECGALAPAGOS S.A., en la persona del Ing. José María Moscoso Arteaga, Presidente Ejecutivo y representante legal de esa Empresa, por los derechos que representa y por sus propios y personales derechos; tanto la parte actora como la demandada formulan recursos extraordinarios de casación de la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2014, las 13h39, por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que reforma la sentencia subida en grado en los términos del considerando Tercero de ese fallo. La Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 5 de noviembre de 2015, las 09h46, desecha el recurso de casación interpuesto por la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELECGALAPAGOS S.A., y admite a trámite el recurso presentado por el actor, Francisco Javier Fuentes Cunalata. Dicho recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto el Tribunal hace las siguientes consideraciones:

**PRIMERO: Competencia:** Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación; corresponde a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado conforme a lo previsto en el artículo 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, como consta de la razón que obra del expediente.- **SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación:** El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en las causales primera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. Las normas que considera infringidas son: los artículos 5, 7, 10, 29, 30, 40, 47, 185, 188, 169.5 y 370 del Código del Trabajo; y, los artículos 326 numerales 2, 3 y 13, 424 y 427 de la

Constitución de la República. En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República y regulado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. El recurso de casación se fundamenta en los siguientes cargos: **2.1.- CAUSAL CUARTA:** La parte recurrente alega que en su demanda reclamó los derechos prescritos en los artículos 47, 29, 30 y 40 del Código del Trabajo, a pesar de que en el proceso consta copia certificada del convenio colectivo de trabajo, en el fallo recurrido se omitió resolver sobre aquello.- **2.2.- CAUSAL PRIMERA:** Con respecto a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, el recurrente formula los siguientes cargos: a) Falta de aplicación del artículo 10 del Contrato Colectivo de Trabajo y de los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo; expresa que la mencionada norma del Contrato Colectivo contempla que en el evento de ser despedido y se violare la estabilidad de cinco años, se le deberá pagar las remuneraciones correspondientes a ese período. Que, de acuerdo con el artículo 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, su empleadora debió reubicarle en otro lugar de trabajo, pero no se procedió así, sino que a los tres meses la Empresa remitió su aviso de salida al IESS, según el Acuerdo No.063-2011 de 16 de febrero de 2011 y el aviso de salida es de 14 de mayo del 2011, cuando lo correcto era que en febrero del 2011 se lo reintegre y se lo reubique en otro lugar de trabajo, pero no proceder a notificar su salida, lo que considera que constituye despido. Expresa que la demandada cumplió parcialmente con lo previsto en el artículo 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, pero que no existe prueba alguna de lo afirmado en el fallo, respecto de haber sido reintegrado a su puesto de trabajo; y que además, se le perjudica al expresar que la relación laboral terminó por la causal 5ta del artículo 169 del Código del Trabajo, cuando el Acuerdo No.063-2011 no expresa tal situación, sino que dice: "INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL... pero no para el trabajo" (sic). Expresa que por lo tanto, se ha violado su estabilidad laboral al no ser reintegrado y emitir el aviso de salida, siendo procedente el pago de las remuneraciones previstas en el

artículo 10 del Contrato Colectivo de Trabajo, así como las indemnizaciones y bonificación de los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo. b) Se acusa también la falta de aplicación del artículo 370 del Código del Trabajo, que establece una indemnización por cuatro años de remuneraciones si como consecuencia de un accidente de trabajo se produjere la incapacidad permanente; y de autos consta el acuerdo del IESS en el que se aprecia que es incapaz permanente. c) Finalmente, señala que existe falta de aplicación del artículo 424 de la Constitución como norma suprema y del artículo 326 numeral 2 y 3 respecto a que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y que en caso de duda en materia laboral se aplicará en el sentido más favorable a los trabajadores.- **TERCERO.- Del recurso de casación:** El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con ciertos elementos formales para su procedencia; el recurso de casación tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia, en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente. El Tratadista Humberto Murcia Ballén, sobre el objeto de la casación señala: *“Tradicionalmente se le ha asignado a la casación como objetivo la anulación de las sentencias proferidas con violación de las reglas de derecho, o sea que dicho recurso corresponde al poder que tiene el Tribunal Supremo para asegurar el respeto a las leyes por los jueces; y desde este punto de vista la casación es una institución política que responde a un interés social evidente. En efecto, es esencial a todo régimen político que la ley sea estrictamente obedecida e interpretada de la misma manera en todo el territorio nacional. De ahí que la más relevante doctrina sobre el tema le haya asignado al instituto en comento, hace ya cerca de dos siglos, esta finalidad esencial: la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia”* (Obra: Recurso de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, pág. 73). El Dr.

Santiago Andrade Ubidia al abordar sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: *“La Función de la Casación es constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública...”*. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17). De conformidad a lo establecido en la doctrina y la jurisprudencia, se deben analizar en primer lugar las causales que corresponden a vicios *“in procedendo”*, que afectan a la validez de la causa y su violación determina la nulidad total o parcial del proceso, así como también se refieren a la validez de la sentencia impugnada; vicios que están contemplados en las causales segunda, cuarta y quinta; en segundo orden, procede el análisis de las causales por errores *“in iudicando”*, que son errores de juzgamiento, los cuales se producen, ya sea por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una norma de derecho o por una infracción directa de esta clase de normas, vicios que se hallan contemplados en las causales tercera y primera.- **CUARTO.- Análisis del recurso de casación.-**

**Motivación:** Conforme el mandato contenido en el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de Casación debe expresar con razonamiento jurídicos apropiados y coherentes, sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derecho, las razones o motivos

por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la motivación en casación debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida. El tratadista Michele Taruffo sobre la motivación expresa:... *“el <contenido mínimo esencial> de la motivación equivale a lo que ha sido definido como justificación en primer grado. En síntesis, la misma comprende: 1) la enunciación de las elecciones realizadas por el juez en función de: identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos, calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprende de la misma; 2) el contexto de vínculos de implicación y de coherencia entre estos enunciados, (...); 3) la calificación de los enunciados particulares sobre la base de los criterios de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son racionalmente correctas. La necesidad de estas tres categorías de requisitos para la existencia de la motivación podría justificarse analíticamente, pero es suficiente recordar lo que se ha sostenido en materia del modelo general de la motivación; lo único que falta añadir es que todos estos requisitos son necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la decisión.”* (Taruffo Michele, La motivación de la sentencia civil, Editorial Trotta, Madrid, 2011, págs. 407-408). Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación. **4.1.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL CUARTA:** La causal cuarta de casación corresponde a: *“Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis”*. Los vicios que configuran la causal cuarta son relativos a la inconsonancia o incongruencia resultante de la comparación entre la parte



resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y las excepciones deducidas, esto es, el asunto o asuntos materia de la litis. Al respecto, el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis; obligación que se relaciona con el principio dispositivo consagrado en los artículos 19 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vicios que tipifican a la causal cuarta afectan al principio de congruencia, que consiste en la concordancia que debe haber entre las pretensiones de la demanda, los medios de defensa o contrademanda deducidos por la parte demandada, y la resolución del juez. El principio de la congruencia delimita el contenido de la sentencia en cuanto ésta debe pronunciarse de acuerdo con el alcance de las pretensiones, impugnaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto. El autor Humberto Murcia Ballén expresa: *“De lo antes dicho podemos inferir que el principio de la congruencia o armonía del fallo se contrae a la necesidad de que éste se encuentre en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y que hubieran sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa. O sea que el juez, en su sentencia, tiene que pronunciarse sobre todo lo que se le ha pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado; pero, además, su decisión no puede fundarla sobre hechos que no están en el debate. Ejercer toda su actividad jurisdiccional, sin exceso, pero también sin defecto, pues tanto éste como aquél entraña un vicio de actividad que se llama incongruencia o inconsonancia.”* (Recurso de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Bogotá, 2005, pág. 505). Acorde a la doctrina y la jurisprudencia, esta incongruencia, que es un error de procedimiento o vicio de actividad, puede tener tres formas o aspectos: 1) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); 2) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido, es decir se decide sobre puntos que no son objeto del litigio (extrapetita); 3) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citra o mínima petita). **4.1.1.-** En



cuanto a esta causal, el recurrente expresa que en la sentencia de segunda instancia no se han resuelto ciertos rubros que fueron materia de su demanda, concretamente el reclamo sobre los beneficios contemplados en los artículos 47, 29, 30 y 40 del Tercer Contrato Colectivo de Trabajo de la Empresa ELECGALAPAGOS S.A. Para determinar si efectivamente se ha producido el vicio contemplado en la causal cuarta de casación, es necesario comparar el asunto o asuntos materia del litigio, que están determinados por las pretensiones propuestas en la demanda y las excepciones presentadas en oposición de aquella, con lo resuelto por el juzgador en sentencia. En el presente caso tenemos que el actor, en el libelo de su demanda, numerales 7 y 8 solicitó el pago de USD 30.000 por invalidez permanente conforme el artículo 47 del Contrato Colectivo, pues la Empresa demandada no contrató la póliza de seguro; y también demanda los beneficios previstos en los artículos 29, 30 y 40 del Contrato Colectivo. La sentencia de segundo nivel objeto del recurso de casación no se pronuncia sobre estos reclamos, incurriendo en el vicio de *citra petita*, que precisamente sucede cuando el juzgador omite o deja de resolver todos aquellos puntos materia de la litis; en tal virtud se configura la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, que amerita se case parcialmente la sentencia exclusivamente sobre el tema objeto de la omisión. Por tal motivo, es necesario revisar también los cargos por la causal primera de casación.-

**4.2.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL PRIMERA:** La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, procede por: “*Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.*”.- Corresponde a los errores que en Doctrina se conocen como “in judicando”, es decir, de juzgamiento, cuando ha existido en el fallo la violación directa de la norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios. La infracción de una norma de derecho se produce cuando el juzgador no ha efectuado la correcta subsunción de los hechos en el contenido hipotético, abstracto o genérico de la norma; cuando la jueza, juez o tribunal de instancia da por ciertos determinados hechos materia

de la litis, realiza un ejercicio de lógica jurídica al establecer si aquellos encajan o no en la hipótesis de la disposición legal que sería aplicable al caso y las consecuencias que aquella ha establecido, para sustentar su decisión. Esta causal contempla tres diferentes tipos de infracción, que son autónomos e independientes entre sí, por ello el casacionista deberá identificarlos con absoluta precisión; estos son: a) aplicación indebida, que se produce cuando el juzgador elige una norma que no corresponde al caso que se está juzgando, que no se relaciona con los hechos materia de la litis; b) falta de aplicación, es un error de omisión, ya que el vicio consiste en que el juzgador no aplica la norma que efectivamente corresponde al caso materia del litigio; y, c) errónea interpretación está constituida por una equivocación de hermenéutica jurídica, en tal caso el juez ha elegido correctamente la norma aplicable al caso, pero al interpretarla le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al texto de la Ley, dando como resultado una consecuencia distinta a la prevista en la norma. Es importante señalar que bajo esta causal no corresponde analizar los hechos, ni la prueba; pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal de instancia. Otro aspecto importante en esta causal, es que el error sea relevante en la decisión de la causa, es decir, que si no hubiere incurrido en la equivocación, el resultado en la sentencia habría sido distinto. **4.2.1.-** En relación con esta causal, se procede a analizar cada uno de los cargos propuestos por el recurrente: **4.2.1.1.-** En primer término lo relativo a la falta de aplicación del artículo 10 del Tercer Contrato Colectivo de Trabajo y de los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo. La sentencia de segunda instancia en el numeral 3.6 del considerando Tercero analiza expresamente lo previsto en el artículo 43 del Contrato Colectivo en caso de accidente de trabajo, llegando a la conclusión de que, conforme esa disposición contractual, la empresa demandada debe pagar al accionante la indemnización prevista en el artículo 10 de ese Contrato, como efectivamente manda a pagar en la parte resolutive del fallo; por lo tanto, contrario a lo que afirma el recurrente, el Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas aplicó las normas de los artículos 43 y 10 del Contrato Colectivo. Efectivamente

el artículo 43 en referencia estipula: *"En caso de accidente de trabajo, la empresa cubrirá al trabajador los gastos médicos y clínicos hasta su recuperación total, sin perjuicio de seguirle pagando su remuneración íntegra mientras dure dicha rehabilitación según lo determina el artículo 371 del Código del Trabajo. Cuando se declare a un trabajador su invalidez parcial permanente, la Empresa lo reubicará en otro lugar de trabajo, o de acuerdo a las condiciones físicas del trabajador y su nivel de preparación. En caso de no existir una actividad en la cual el trabajador afectado pueda laborar normalmente, la empresa lo indemnizará conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del presente Contrato Colectivo y terminará la relación laboral."* Por su parte el artículo 10 del referido Contrato, revisado conforme la Disposición Transitoria Tercera del Mandato Constituyente No.8, establece una indemnización por cuatro años de remuneraciones del trabajador. Por tanto, el Tribunal Ad quem estimó que el ex trabajador, al haber sido declarado con incapacidad permanente para el trabajo por el IESS, según Acuerdo No.063-2011 de 16 de febrero de 2011 y no haber sido reubicado por la Empresa en otro puesto de trabajo, la relación laboral terminó por esa circunstancia, conforme el artículo 169 numeral 5 del Código del Trabajo, esto es, por incapacidad permanente del trabajador, correspondiéndole la indemnización conforme los artículos 43 y 10 del Contrato Colectivo; sin que sea procedente el pago de una doble indemnización por incapacidad permanente y por despido intempestivo como pretende el actor. Por lo tanto, como ya se observó las normas contractuales cuya violación se acusa fueron aplicadas correctamente en el fallo de segunda instancia.- **4.2.1.2.-** El segundo cargo es de falta de aplicación del artículo 370 del Código del Trabajo que dispone: *"Si el accidente hubiere ocasionado incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, la indemnización consistirá en una cantidad igual al sueldo o salario total de cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente al sesenta y seis por ciento de la última renta o remuneración mensual percibida por la víctima"*. Al respecto es necesario señalar que las indemnizaciones por accidentes de trabajo a las que se refiere el Título IV del Capítulo IV del Código del Trabajo, corresponden

exclusivamente a los trabajadores que no hubieren sido afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que obviamente no es el caso del accionante, por así expresamente establecerlo el artículo 367 del Código Laboral, por lo que no cabe dicho pago. **4.2.1.3.-** Finalmente el recurrente se refiere a la falta de aplicación de las normas constitucionales de los artículos 424 y 326 numerales 2 y 3 de la Constitución de la República, sin formular un cargo en concreto, sino que hace mención a estas disposiciones de manera general. El artículo 424 de la Constitución establece que aquella es la norma suprema y sus disposiciones prevalecerán sobre todas las demás que conforman el ordenamiento jurídico. En el presente caso, el recurrente no formula cargo alguno explicando la violación de esta norma y no existe ninguna evidencia que el Tribunal de segunda instancia hubiese vulnerado ese principio, aplicando una norma de orden secundario por sobre algún precepto constitucional. En lo referente a los preceptos de los numerales 2 y 3 del artículo 326 de la Constitución, no se ha determinado cuál acto o contrato por el cual se hubiese obligado al ex trabajador a renunciar sobre determinado derecho o alteración del mismo en menoscabo del trabajador; ni tampoco se ha planteado alguna duda en relación a la aplicación de normas jurídicas que ameriten la aplicación en el sentido más favorable al trabajador.- Por lo manifestado, se desechan los cargos propuestos por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.- **QUINTO.- casación de la sentencia:** En virtud de lo expuesto en el numeral 4.1.1 de esta sentencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Casación, procede casar parcialmente el fallo de segunda instancia, para que este Tribunal se pronuncie única y exclusivamente sobre las pretensiones del actor que no fueron analizadas en la sentencia de segunda instancia. El actor en su demanda solicita el pago de la cantidad de USD 30.000,00 por invalidez permanente sufrida conforme el artículo 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, puesto que la empresa demandada no contrató la póliza de seguro a la cual estaba obligada.- El mencionado artículo estipula que la Empresa empleadora contratará una póliza de seguro contra accidentes personales, vida y enfermedad, para sus

trabajadores, en caso de muerte accidental o invalidez total o parcial, con los valores que allí se detallan, estableciendo para el caso de invalidez permanente la cantidad de USD 30.000,00.- Sobre el particular este Tribunal considera que el incumplimiento de una cláusula de un contrato colectivo de trabajo, como sería el no haber contratado la póliza de seguro, corresponde sea reclamado por quienes representan a los trabajadores y en un conflicto colectivo del trabajo, cuya competencia corresponde exclusivamente a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, según el Capítulo II del Título V del Código Laboral, sin que este sea un aspecto que pueda ser resuelto por un juez con competencia para un conflicto individual de trabajo.- Por otra parte, la cobertura de la póliza de seguro es de carácter general, pues se refiere a casos de muerte o incapacidad parcial o permanente ocurridos en cualquier evento; siendo, en cambio, el accidente de trabajo un caso particular, cuyas consecuencias y compensaciones están regulados en el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Finalmente, sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, obra de fs.125 a 135 del expediente de primer nivel, que ELECGALAPAGOS S.A. tenía contratado el seguro de vida y accidentes personales de sus trabajadores, a la fecha en que el actor sufrió su accidente de trabajo, sin que corresponda al juez del trabajo el determinar si la Empresa Aseguradora pagó o no por el supuesto siniestro, por lo que no procede este cargo. En cuanto al reclamo de los beneficios contemplados en los artículos 29, 30 y 40 del Contrato Colectivo de Trabajo referentes a los subsidios de antigüedad y familiar, así como servicio de comisariato, aquellos fueron eliminados en virtud de la revisión del Tercer Contrato Colectivo de Trabajo de ELECGALAPAGOS, realizada por disposición del Mandato Constituyente No.8; en consecuencia, este reclamo es improcedente. **DECISIÓN:** Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, en los términos de este fallo, CASA parcialmente la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2014, las

13h39, por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas; ratificándola en cuanto a los valores que se mandan a pagar en esa sentencia y desechando los rubros reclamados en los numerales 7 y 8 de la demanda.- Sin costas ni honorarios. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-

  
Dra. Paulina Aguirre Suárez  
Jueza Nacional

  
Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo  
Jueza Nacional

  
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia  
Juez Nacional

Certifico


  
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo

SECRETARIO RELATOR SALA DE LO LABORAL.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.



En Quito, viernes once de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: FUENTES CUNALATA FRANCISCO JAVIER en la casilla No. 152 y correo electrónico cirodiaz70@hotmail.com del Dr./Ab. DIAZ GUZMAN CIRO AGUSTIN, EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. en el correo electrónico psornoza@hotmail.com; pablo.sornoza@elecgalapagos.com.ec del Dr./Ab. SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR; MARCO SALAO BRAVO en el correo electrónico psornoza@hotmail.com; pablo.sornoza@elecgalapagos.com.ec del Dr./Ab. SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR; PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200. Certifico:

  
DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a..... 21 MAR 2018.....  
SECRETARIO RELATOR



  
CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

RO149-2016

JUICIO No.2288-15

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-

Quito, 11 de marzo de 2016, las 14h36.

**VISTOS:** En el juicio de trabajo seguido por Felipe Mogro Giler en contra del Consejo Provincial de Manabí, representado por el Ing. Mariano Nicanor Zambrano Segovia, en calidad de Prefecto Provincial; y del Procurador General del Estado, representado por el Ab. Jaime Andrés Robles Cedeño; la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2015 a las 08h46 por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que confirma la sentencia subida en grado, que declara sin lugar la demanda. Mediante auto de 17 de diciembre de 2015 a las 11h30, la Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, admite a trámite el recurso de casación; encontrándose en estado de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO: Competencia:** Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación, por lo que corresponde dictar la resolución del recurso de casación, por el sorteo realizado conforme a lo previsto en el artículo 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, como consta de la razón que obra del expediente. Conforman el Tribunal la Dra. Rosa Álvarez Ulloa en reemplazo del Dr. Carlos Ramírez Romero, conforme Oficio No. 106-SG-CNJ de 01 de febrero de 2016.- **SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación:** El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Las normas que considera infringidas son: artículos 11 numerales 3, 4, 5, 8 y 9, y 326 numerales 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los artículos 5; 6; 7 y 637 del Código del Trabajo, artículos 6 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 18 numeral 6; 2403 y 2418 inciso tercero del Código Civil y artículo 8 inciso segundo del Mandato Constituyente número 2. En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República y regulado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. El recurso de casación se fundamenta en los

siguientes cargos: **2.1.- CAUSAL PRIMERA:** La parte recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, alegando que en la sentencia impugnada en el considerando Quinto numeral 5.5 se hace un reconocimiento expreso por parte de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en cuanto a que las normas del Código Civil y Código de Procedimiento Civil no establecen o prohíben expresamente que la citación dentro de una acción constitucional interrumpa la prescripción, pero así tampoco dichas normas expresan que la citación no interrumpa dicha prescripción, por lo tanto no hay norma expresa que establezca que la citación dentro de una acción constitucional interrumpa o no interrumpa la prescripción, así lo establece el artículo 637 del Código del Trabajo en concordancia con el artículo 635 ibídem y 2418 inciso tercero del Código Civil; dichas normas expresas prevalecen sobre cualquier otra interpretación, puesto que no hay en la Constitución de la República ni en el Código del Trabajo, norma expresa que diga que la citación dentro de una acción constitucional interrumpa o no interrumpa la prescripción en las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo. Que, el tribunal ad quem estaba obligado a aplicar los artículos 11 numerales 3, 4, 5, 8 y 9 y 326 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 5; 6; 7 y 637 del Código del Trabajo, lo cual no lo hizo; es decir que no aplicó el principio *In dubio pro operario*, principio interpretativo del derecho laboral; también en concordancia con los artículos 18 numeral 4; 2403 y 2418 inciso tercero del Código Civil, artículos 6 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial; normas jurídicas que dan origen de legitimidad, sustento y validez legal al acto de aplicación ordenado en el artículo 8 inciso 2 del Mandato Constituyente No.2. Que, al rechazar el recurso de apelación, el tribunal ad quem vulneró su legítimo derecho para que se le cancelen los valores determinados en el Mandato Constituyente anteriormente citado. **TERCERO.- Del recurso de casación:** El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con ciertos elementos formales para su procedencia; este recurso tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia, en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente. El tratadista Humberto Fernández Vega, señala que: *“El recurso de casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e*

*interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación de los agravios que se pueden inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley."* (Fernández Humberto, El recurso extraordinario de Casación Penal, Leyer Editorial, Bogotá - Colombia, pág. 79).- El autor Luis Armando Tolosa Villabona señala respecto a la casación que: "... *el marco filosófico político de la Casación en general, permite deducir que este recurso no sólo en Colombia, sino en el derecho occidental, tiene como finalidad la defensa de las garantías fundamentales en cuanto pretende defender el principio de legalidad y el debido proceso frente a la arbitrariedad de las decisiones judiciales en la aplicación de la ley material o procesal.*" (Tolosa Luis, Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá – Colombia, 2005, pág. 87).

**CUARTO.- Análisis del recurso de casación.- Motivación:** Conforme el mandato contenido en el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de Casación debe expresar con razonamientos jurídicos apropiados y coherentes, sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derecho, las razones o motivos por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la motivación en casación debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida. El tratadista Michele Taruffo sobre la motivación expresa: ... *"el <contenido mínimo esencial> de la motivación equivale a lo que ha sido definido como justificación en primer grado. En síntesis, la misma comprende: 1) la enunciación de las elecciones realizadas por el juez en función de: identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos,*

calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprende de la misma; 2) el contexto de vínculos de implicación y de coherencia entre estos enunciados, (...); 3) la calificación de los enunciados particulares sobre la base de los criterios de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son racionalmente correctas. La necesidad de estas tres categorías de requisitos para la existencia de la motivación podría justificarse analíticamente, pero es suficiente recordar lo que se ha sostenido en materia del modelo general de la motivación; lo único que falta añadir es que todos estos requisitos son necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la decisión.” (Taruffo Michele, La motivación de la sentencia civil, Editorial Trotta, Madrid, 2011, págs. 407-408). Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: **4.1.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL PRIMERA:** La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, procede por: *“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”*.- Corresponde a los errores que en Doctrina se conocen como “in judicando”, es decir, de juzgamiento, cuando ha existido en el fallo la violación directa de la norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios. La infracción de una norma de derecho se produce cuando el juzgador no ha efectuado la correcta subsunción de los hechos en el contenido hipotético, abstracto o genérico de la norma; cuando la jueza, juez o tribunal de instancia da por ciertos determinados hechos materia de la litis, realiza un ejercicio de lógica jurídica al establecer si aquellos encajan o no en la hipótesis de la disposición legal que sería aplicable al caso y las consecuencias que aquella ha establecido, para sustentar su decisión. Esta causal contempla tres diferentes tipos de infracción, que son autónomos e independientes entre sí, por ello el casacionista deberá identificarlos con absoluta precisión; estos son: a) aplicación indebida, que se produce cuando el juzgador elige una norma que no corresponde al caso que se está juzgando, que no se relaciona con los hechos materia de la litis; b) falta de aplicación, es un error de omisión, ya que el vicio consiste en que el juzgador no aplica la norma que efectivamente corresponde al caso materia del litigio; y, c) errónea interpretación está constituida por una equivocación de hermenéutica jurídica, en tal caso el juez ha elegido correctamente la norma aplicable

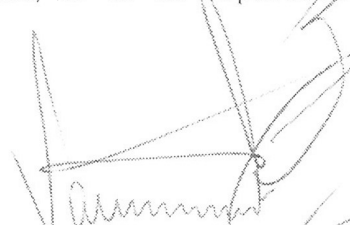


al caso, pero al interpretarla le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al texto de la ley, dando como resultado una consecuencia distinta a la prevista en la norma. Es importante señalar que bajo esta causal no corresponde analizar los hechos, ni las pruebas; pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el tribunal de instancia. Otro aspecto importante en esa causal, es que el error sea relevante en la decisión de la causa, es decir, que si no hubiere incurrido en la equivocación, el resultado en la sentencia habría sido distinto. **4.1.1.-** Con cargo a esta causal el casacionista acusa a la sentencia impugnada de incurrir en falta de aplicación de los artículos 11 numerales 3,4,5,8,9 y 326 numerales 2,3 de la Constitución de la República; 637, 7,6 y 5 del Código del Trabajo; 2418 inciso tercero del Código Civil y 8 inciso 2 del Mandato Constituyente No.2; por las razones que precisa y se detallan en el numeral 2.1.- Al respecto este Tribunal de Casación manifiesta: La prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo (Arts. 2392 y 2414 del Código Civil).- El artículo 635 del Código del Trabajo establece “*Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la relación laboral ...*”.- En el caso sub judice, el nexo de trabajo existente entre el actor y la entidad demandada, concluyó el 30 de abril de 2009, como expresa el tribunal ad-quem en el Considerando Quinto de la Sentencia. La citación con la demanda se perfecciona con la última boleta el 5 de noviembre de 2012, de modo que ha operado la prescripción en los términos del citado artículo 635 del Código del Trabajo. Ahora bien, el recurrente alega que la prescripción de la acción se interrumpió en conformidad con el artículo 637 del Código del Trabajo. La mencionada norma señala: “*La prescripción de tres años o más se suspende o interrumpe de conformidad con las normas del Derecho Civil; pero transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión y toda acción se declarará prescrita*”. El artículo 2418 del Código Civil dispone: “*La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la citación de la demanda judicial...*” Respecto a la interrupción natural, según la disposición señalada y la doctrina ha de entenderse que opera, cuando el deudor reconoce la obligación reclamada en forma tácita o expresa; actos que en la especie no se han demostrado procesalmente y no se evidencian de la sentencia que resuelve



la acción extraordinaria de protección presentada por el actor y otros a través de la cual ha impugnado el acta de finiquito.- Sobre la interrupción de la prescripción en materia laboral, Américo Plá Rodríguez señala “... *caben las formas de interrumpir la prescripción de validez general. Por ejemplo el reconocimiento expreso por parte del deudor...*”. Las relaciones jurídicas no pueden permanecer en la incertidumbre en cuanto a su eficacia durante un prolongado término, sin contrariar principios elementales de seguridad y estabilidad, y sin menoscabar legítimas expectativas de terceros. Si la ley ha establecido plazos para el ejercicio de las acciones, no es porque limita el derecho de acceso a la jurisdicción, sino que lo encausa para que de él se haga un uso ordenado y no se abuse de la posibilidad de someter a otro a un procesamiento cuando así se quiera por parte del afectado, porque lo contrario sería atentar contra la estabilidad y certeza que requiere el ordenamiento jurídico. Américo Plá Rodríguez, en su Obra “Los Principios del Derecho del Trabajo”, 3ª. Edición actualizada. Sobre la prescripción en materia laboral cita a varios tratadistas: Ferro “*La prescripción es una de las instituciones que encuentran su razón de ser en las exigencias de la seguridad jurídica, en la vida de relación. Elemento éste que justamente con el orden social es el que se persigue con el establecimiento de derecho*”; expresa que quizá quien concrete mejor la justificación de la prescripción sea Centeno al afirmar: “*Las normas del derecho del trabajo a través del principio de irrenunciabilidad garantizan la intangibilidad de los derechos, pero de ello no puede derivarse la protección de su no ejercicio y de la inercia o inacción que afecta al interés social tanto como su pérdida por el transcurso del tiempo. Si constituye una actitud socialmente reprobable no ejercitar un derecho en cuya realización está interesado el orden jurídico integral, la ley no puede propiciar la subsistencia sin término de la situación de duda, prestando una asistencia a quien no ejercitó su derecho estando en aptitud de hacerlo....*”. Sobre el tema, concluye citando a Centeno y expresando que “*el verdadero fundamento de la prescripción en el derecho del trabajo es el mismo que en el derecho común: la seguridad jurídica, que alcanza plena vigencia en aquél aun cuando a través de ello se pueda llegar a un resultado (como es la pérdida del derecho por parte del trabajador)...*”. La falta de aplicación ocurre, cuando siendo la norma la aplicable al caso el Juez la ignora en su fallo. En el caso de la especie, al proceder la excepción de prescripción de la acción, los jueces de segunda instancia no solo aplican las normas que corresponden al caso, sino que lo hacen correctamente, dándoles el alcance y sentido que tienen. En cuanto a la vulneración de las normas

constitucionales que cita el casacionista, mismas que contienen los principios para el ejercicio de los derechos (Art.11 CR); y los principios que sustentan el derecho del trabajo (Art.326 CR); éstas no se han vulnerado; pues como ya se observó los derechos deben ejercerse en los plazos establecidos en la ley. De lo analizado se concluye que no prosperan los cargos formulados. **DECISIÓN:** Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, el 18 de septiembre de 2015 a las 08h46.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-

  
Dra. Paulina Aguirre Suárez

Jueza Nacional

  
Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez Nacional

  
Dra. Rosa Álvarez Ulloa

Conjueza Nacional

Certifico

  
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.

**SECRETARIO RELATOR SALA DE LO LABORAL.**

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.**

En Quito, viernes once de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: MOGRO GILER FELIPE en la casilla No. 5343 y correo electrónico josed.ona17@foroabogados.ec. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MANABI en la casilla No. 6186 y correo electrónico cveram@manabi.gob.ec; gina.intriago13@foroabogados.com.ec; intriago@iuslaw.ec; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200. Certifico:

DR. OSWALDO ALMEIDA BERMEO  
SECRETARIO RELATOR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Quito, a..... 21 MAR 2018  
SECRETARIO RELATOR

#### FE DE ERRATAS:

- Rectificamos el error deslizado en el sumario de la Edición Jurídica N° 45 de 21 de octubre de 2019.

Donde dice:

Debe decir:

#### CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

##### RESOLUCIONES:

##### SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL

OFICIO NRO. 1638-SSL-CNJ-2017  
RO111-2016; RO112-2016; RO113  
-2016; RO114-2016; RO115-2016;  
RO117-2016; RO118-2016; RO119-2016;  
RO120-2016; RO121-2016; RO122-2016

#### CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

##### RESOLUCIONES:

##### SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL

OFICIO NRO. 1638-SSL-CNJ-2017  
RO111-2016; RO112-2016; RO113 -2016;  
RO114-2016; RO115-2016; RO116-2016;  
RO117-2016; RO118-2016; RO119-2016;  
RO120-2016; RO121-2016; RO122-2016

LA DIRECCIÓN